

Boaventura de Sousa Santos

IZQUIERDAS DEL MUNDO, ¡ÚNANSE!

Y OTROS ENSAYOS



Izquierdas del mundo, ¡únanse!
y otros ensayos

De Sousa Santos, Boaventura

Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos / Boaventura De

Sousa Santos. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

CLACSO.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-722-774-1

1. Izquierda Política. 2. Análisis Político. I. Título.

CDD 320.531

Diseño y diagramación: Eleonora Silva

Arte de tapa: Villy

Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos

Boaventura de Sousa Santos



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva

Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Equipo Editorial

María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

María Leguizamón - Gestión Editorial

Nicolás Sticotti - Fondo Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos (Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2020).

ISBN 978-987-722-774-1

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

El contenido de este libro expresa la posición de los autores y autoras y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Índice

El presente como encrucijada y la urgencia de construir alternativas frente a una crisis global.....	9
<i>Karina Batthyány y Nicolás Trotta</i>	
Siglas	17
Prefacio del autor.....	21
Capítulo 1. El nuevo interregno	27
Capítulo 2. La articulación entre fuerzas de izquierda: el caso portugués	41
Capítulo 3. Brasil: la fractura del desgaste de gobernar	55
Capítulo 4. Colombia: la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio.....	101
Capítulo 5. México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad.....	123
Capítulo 6. España: la fractura de la identidad nacional.....	143
Adenda sobre otros contextos	159
Conclusión	163

Otros ensayos

Ecuador: del centro al fin del mundo.....	169
Evo Morales: el indio fuera de lugar.....	175
La nueva Guerra Fría y Venezuela	191
Soplan vientos favorables desde España.....	195
Las venas abiertas de Nicaragua.....	201
Carta abierta al presidente Iván Duque.....	207
Para alimentar la llama de la esperanza	213
El autor	231

El presente como encrucijada y la urgencia de construir alternativas frente a una crisis global

Karina Batthyány (Secretaria Ejecutiva, CLACSO)

Nicolás Trotta (Ministro de Educación, Argentina)

La pandemia del COVID-19 evidenció la imperiosa necesidad de construir una nueva alternativa progresista ante una crisis social y ambiental de una extraordinaria gravedad y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.

Frente a esta situación terminal, la tarea crucial y más urgente para los partidos y frentes políticos progresistas y las redes comunitarias y colectivos de científicos sociales críticos consiste en construir horizontes allí donde hoy hay abismos. Si la ideología dominante postula que, ante el modelo de acumulación capitalista neoliberal no hay alternativas, nuestra tarea es fabricar bisagras políticas y conceptuales que articulen el pasado con el presente, enhebrando narrativas capaces de proyectar una nueva agenda social organizada en torno a, por lo menos, tres tareas: un trabajo de reconceptualización y profundización de la justicia social –que no es otra cosa que colocar por encima de los intereses sectoriales una política del bien común–; el reconocimiento

y la sanción de nuevos derechos –especialmente dirigidos hacia grupos históricamente excluidos: las mujeres y las disidencias sexuales, las infancias y juventudes, las afrodescendencias, los pueblos originarios–, y una política orientada al cuidado y preservación del ambiente en el que vivimos –es decir, la casa de todos y todas–.

Los desafíos que estamos llamados a enfrentar tienen lugar en un momento histórico inédito cuyo principal actor venía desplegándose con toda su fuerza hasta la pandemia: las fuerzas neoliberales han hegemonizado la agenda global con el propósito excluyente de acelerar la concentración de la riqueza. Bajo los auspicios del capital financiero global, como nunca antes, un grupo reducido de personas ha concentrado un volumen de riqueza extraordinariamente grande; nunca antes, tampoco, las economías de los países estuvieron tan a merced de poderosos grupos financieros como lo están ahora, poniendo en jaque la soberanía política y la independencia económica, herramientas imprescindibles para el desarrollo sostenible de una sociedad.

Ante este escenario global, el mapa de América Latina se encuentra en un estado de reconfiguración permanente. En los dos últimos años se sucedieron de manera vertiginosa acontecimientos políticos que pueden ser hilados con la calma de quienes reconstruyen trozos del pasado pero para quienes vivimos y palpítamos el ritmo diario de la gestión deben ser rápidamente enumerados: la victoria de Andrés Manuel López Obrador –poniéndole fin a un largo ciclo de gobiernos neoliberales en el país azteca–; el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hacia fines del 2019 –cuyo enorme desafío consiste en poner de pie un país devastado por las políticas neoliberales impulsadas por la coalición Cambiemos–; la libertad de Lula tras 19 meses de detención arbitraria, los estallidos sociales que irrumpieron en octubre en Ecuador y entre octubre y febrero de 2020 en Chile y que dieron lugar posteriormente al referéndum histórico que dejará atrás la Constitución pinochetista –dando cuenta de la enorme vitalidad de los movimientos populares en todo el continente–; el golpe de Estado en Bolivia y el triunfo por la vía democrática

de los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca –que permitió el retorno tras el exilio a Evo Morales. Son algunas postales de nuestra historia reciente que invitan a la esperanza y nos recuerdan que la historia es tornadiza y no puede ser digitada por oscuros intereses desde los centros del poder.

Dicho sea de paso: no está en nuestro ADN político cultivar el pesimismo; quienes escribimos estas líneas venimos de tradiciones políticas y del pensamiento que se han forjado al calor de infatigables luchas por la construcción de sociedades más justas. Y no han sido pocas y pocos los que dejaron la vida en ello. Creemos que este momento reaccionario global debe enfrentarse con convicción e inteligencia, con una estrategia de integración política y una profunda creatividad. Las encrucijadas del presente demandan conciliar las bases y fundamentos de nuestras identidades políticas con la capacidad de maniobrar en un mundo convulsionado. Hay que aprender –y este es uno de los grandes méritos de este libro– que los problemas comunes que enfrentamos nos dejan aprendizajes globales que debemos identificar y estudiar, para no repetir errores.

Precisamente por eso, y en más de un sentido, este volumen constituye una pieza fundamental para la construcción colectiva de ese horizonte que ya ha comenzado a vislumbrarse. El conjunto de ensayos que reúne este nuevo libro de Boaventura de Sousa Santos es un texto imprescindible para comprender las características del interregno histórico en el que vivimos, analizar las fuentes de donde brotan las desigualdades que nos preocupan y –sobre todo– trazar una hoja de ruta y una estrategia para consolidar proyectos políticos que contribuyan a construir otros mundos posibles, más justos y más igualitarios.

Frente a ese desafío, ¿quién mejor que Boaventura de Sousa Santos para orientar la mirada y la imaginación hacia la construcción de escenarios sociales alternativos? El gran sociólogo portugués es una de las referencias mundiales en el campo de las ciencias sociales y las humanidades; fundador de las epistemologías del Sur, Boaventura de Sousa Santos ha construido una mirada sobre el presente que

combina de un modo magistral el análisis incisivo con la capacidad (propia de los grandes maestros) de formular grandes ideas orientadoras, imprescindibles en estos tiempos.

De los libros se espera que sean capaces de contar buenas historias, una cierta cortesía compositiva, indispensable claridad y precisión argumental. Pero hay libros que, además, movilizan, inquietan, azuzan e instalan preguntas. *Izquierdas del mundo, ¡únanse!* Es uno de esos textos. En sus páginas se nos propone una lectura desde las nevaduras políticas del presente identificando las potencias que tienen los partidos y movimientos progresistas para construir nuevas hegemonías políticas frente al modelo geopolítico de dominación neoliberal.

En un libro clásico del pensamiento crítico, Raymond Williams afirmaba que el problema inicial siempre es la perspectiva desde donde se mira. Junto con situar un problema, hay que definir el punto de vista desde donde abordarlo. Siguiendo al autor de *Marxismo y literatura*, ¿cuál es el enfoque que asume este nuevo ensayo del sociólogo portugués? El propio Boaventura de Sousa Santos responde a la pregunta: su perspectiva es la de quien se propone realizar un análisis no coyuntural del presente. A diferencia de los enfoques a los que nos tiene habituados –las lecturas de mediano y largo plazo– Boaventura calibra la mirada en el corto plazo para realizar desde allí un análisis de fondo tanto sobre las dificultades como sobre las enormes posibilidades que tienen las fuerzas progresistas y las izquierdas en el siglo XXI para desplegar una alternativa que reviva las tradiciones del internacionalismo progresista y le ofrezca a la humanidad rumbos acordes con los principios rectores de un humanismo crítico que coloque en el centro de sus reflexiones un nuevo contrato social y ambiental.

Si siempre es difícil contar el presente, Boaventura de Sousa Santos lee este tiempo histórico bajo el signo de un interregno. Entre la caída del Muro de Berlín treinta años atrás y la crisis financiera que se desató entre 2008 y 2011 tuvo lugar un tiempo que no ha terminado de configurarse y para el cual no ha aparecido aún su relevo. Una certeza: las ideas e intereses asociados a la “nueva normalidad” más

que nombrar un “tiempo nuevo” buscan naturalizar las desigualdades preexistentes, agudizadas por la crisis desatada por la pandemia. Se sabe: la palabra “nueva” es la más vieja del diccionario.

Analizar coyunturas es mucho más que atisbar lo efímero. Es un ejercicio de interpretación de los tiempos y ritmos políticos, de las palpaciones y de las oportunidades que abren las crisis y de cómo puede ser más apropiado y potente orientar los esfuerzos. Frente a realidades que cambian vertiginosa y permanentemente, leer entre coyunturas es construir oportunidades para la generación de alternativas. Al mismo tiempo, y lejos de ser un libro que lanza advertencias e identifica peligros, *Izquierdas del mundo* es una cantera de aprendizajes basados en acontecimientos que han tenido lugar en la historia reciente.

Las experiencias que aborda este volumen –a los casos de Brasil, Colombia, México, Portugal y España, hemos incorporado en esta nueva edición los de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela– cifran también una expectativa que podríamos pensar bajo el signo de un aura pedagógica: incrementar el interconocimiento de las fuerzas progresistas para desarrollar aprendizajes globales que permitan construir alternativas políticas plurales frente al modelo del pensamiento único reaccionario desplegado a escala global.

Partamos de la tesis que hace de andamio de este potente conjunto de ensayos: la principal fuerza histórica que recorre nuestro tiempo es el discurso neoliberal configurado como una fuerza transnacional poderosa y profundamente antidemocrática. Si una imagen caracteriza este tiempo es el de las democracias secuestradas por fuerzas antidemocráticas. Sutiles a veces, extremadamente alevosas en otros casos, nuestro tiempo se caracteriza por la enorme fragilidad y la amenaza permanente de la democracia como forma de vida.

Frente a ello, uno de los modos de leer este tiempo que nos propone Boaventura de Sousa Santos es la tensión entre articulaciones y fracturas dentro de los partidos y grupos progresistas y de izquierda. Dos notas, complementarias: los primeros cinco capítulos hacen referencia a procesos de crisis: las fracturas de las izquierdas en

España, Colombia, México y Brasil, del que solo queda exceptuada la articulación del caso portugués. Pero Boaventura de Sousa Santos no piensa las fracturas como quiebres irreversibles sino como oportunidades para pensar nuestros puntos flacos, una vía de interpretación que habilita modos de leer las dinámicas como tramas abiertas, en permanente construcción.

Es indispensable identificar esos puntos débiles de las alternativas progresistas para trabajar allí donde se evidencian las dificultades. La tensión creativa y las divergencias constructivas son siempre bienvenidas y necesarias sobre todo cuando estamos frente a un tiempo y una crisis que nos demanda construir fuerzas y políticas de izquierda que desbordan la idea tradicional de partido.

Al mismo tiempo, Boaventura señala que estas grandes orientaciones deben ir acompañadas de una “sabiduría pragmática” que sepa construir alternativas reales para gobernar. La otra cuestión indispensable es partir de la identificación de una irreversible contradicción entre democracia y capitalismo. Si –como estamos convencidos y convencidas– el horizonte emancipador es la democracia, los derechos humanos y la dignidad, tres lecciones se desprenden de este nuevo libro de Boa (como afectuosamente lo llamamos sus amigos y amigas): el futuro es público; sin el Estado no se puede pero solo con el Estado no alcanza, y el papel de los movimientos sociales es cada vez más vital.

Izquierdas del mundo, ¡únanse! invita –finalmente– a un modo de lectura no coyuntural de la coyuntura en estado de actualización permanente. Tal es así que, por primera vez, se incorporan a este libro un conjunto de ensayos que actualizan y amplían los problemas abordados en la primera edición. Un libro –nos atrevemos a decir– escrito para lectores y lectoras interesados en participar de las luchas por sociedades más justas y equitativas; sociedades que deberán ser –por definición–, anticoloniales, antipatriarcales, antineoliberales. No importan tanto los nombres de las tradiciones políticas en las que se inscriban para alcanzar ese fin; su diversidad hablará de la riqueza que el campo progresista tiene para alcanzar esas metas,

su capacidad de articularse dará cuenta de la inteligencia con la que sepan moverse en un escenario reaccionario global.

Ensanchar la convocatoria a todas y todos los que deseen contribuir con una democracia que debe encolumnarse en la defensa de la humanidad y del ambiente a través de la radicalización de la democracia es el propósito fundamental de este volumen. Revolucionar la democracia y democratizar las revoluciones precisa de mapas que nos ayuden a armar los recorridos, a establecer prioridades, a identificar los problemas que no pueden esperar. Este libro nos habla de cómo alcanzar la indispensable convivencia dentro de la divergencia, la imprescindible construcción de equilibrios, el diálogo como ejercicio permanente, señales irrefutables no solo de que los partidos progresistas y de izquierdas tienen la capacidad de gobernar, sino de que son la única alternativa viable frente a la crisis terminal que atravesamos.

Entre Buenos Aires y Montevideo,
noviembre de 2020

Bibliografía

Williams, Raymond (2001), *El campo y la ciudad*, Buenos Aires, Paidós.

Siglas

AAP	Partido del Hombre Común (India)
AMLO	Andrés Manuel López Obrador
ANC	Congreso Nacional Africano
APIB	Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil
BE	Bloque de Izquierda (Portugal)
BJP	Partido Popular Indio (India)
BRICS	Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
CC	Coalición Canaria
CIA	Agencia Central de Inteligencia (en inglés, Central Intelligence Agency)
CIG	Concejo Indígena de Gobierno
CNI	Congreso Nacional Indígena
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DEA	Fiscal General y la Administración para el Control de Drogas (sigla en inglés)
DEM	Demócratas, antiguo Pfl Partido del Frente Liberal (Brasil)
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPN	Enrique Peña Nieto
ERC	Izquierda Republicana de Cataluña
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FMI	Fondo Monetario Internacional
FSM	Foro Social Mundial
GIEI	Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales
INE	Instituto Nacional Electoral
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz
LGTBI	Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales
MBL	Movimiento Brasil Libre
MDB	Movimiento Democrático Brasileño
Morena	Movimiento Regeneración Nacional
MTST	Movimiento de los Trabajadores Sin Techo
OAS	Conglomerado Empresarial Brasileño
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEA	Organización de los Estados Americanos
ONG	Organización No Gubernamental
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
PAN	Partido Acción Nacional
PCDOB	Partido Comunista de Brasil
PCP	Partido Comunista Portugués
PDECAT	Partit Demòcrata Europeu Català
PDT	Partido Democrático Laborista
PES	Partido del Encuentro Social
PMDB	Partido del Movimiento Democrático Brasileño
PNV	Partido Nacionalista Vasco
PP	Partido Popular
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PS	Partido Socialista (Portugal)
PSB	Partido Socialista Brasileño
PSD	Partido Social Demócrata (Portugal)
PSDB	Partido de la Social Democracia Brasileña
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
PSOL	Partido Socialismo y Libertad

- PT Partido de los Trabajadores
- RTVE Radiotelevisión Española
- UE Unión Europea
- UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
- UPN Unión del Pueblo Navarro
- USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(en inglés, United States Agency for International Development)

Prefacio del autor

He escrito mucho sobre las izquierdas, sobre su pasado y su futuro.¹

Tengo preferencia por las cuestiones de fondo; siempre me sitúo en una perspectiva de mediano y largo plazo y evito entrar en las coyunturas del momento. En este texto sigo una perspectiva diferente: me centro en el análisis de la coyuntura de algunos países y es a partir de ahí que planteo cuestiones de fondo y me muevo a escalas temporales de mediano y largo plazo.

Esto significa que mucho de lo que está escrito en este texto no tendrá ninguna actualidad dentro de meses o incluso semanas. Su utilidad puede estar precisamente en eso: en el hecho de proporcionar un análisis retrospectivo de la actualidad política y del modo en el que ella nos confronta cuando no sabemos cómo se va a

¹ Véase Boaventura de Sousa Santos, “Una izquierda con futuro”, en C. Rodríguez Garavito et al., *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura* (Bogotá: Norma, 2005), 437-457; *Democracia al borde del caos. Ensayo contra la autoflagelación* (Bogotá: Siglo del Hombre y Siglo XXI, 2014); *A difícil democracia. Reinventar as esquerdas* (São Paulo: Boitempo, 2016); *La difícil democracia: una mirada desde la periferia europea* (Madrid: Akal, 2016); *Democracia y transformación social* (Bogotá/Ciudad de México: Siglo del Hombre Editores/Siglo XXI Editores, 2017); *Pneumatóforo: Escritos políticos (1981-2018)* (Coímbra: Almedina, 2018); con José Manuel Mendes, *Demodiversidad. Imaginar nuevas posibilidades democráticas* (Madrid: Akal, 2017); *Demodiversidade. Imaginar novas possibilidades democráticas* (Coímbra: Almedina/Edições 70, 2017).

desarrollar. Asimismo, puede contribuir a ilustrar la humildad con la que los análisis deben realizarse y la distancia crítica con la que uno debe recibirlos. Este texto tal vez puede leerse como un análisis no coyuntural de la coyuntura. Para empezar, debo aclarar lo que entiendo por izquierda.

Izquierda significa el conjunto de teorías y prácticas transformadoras que, a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, han resistido a la expansión del capitalismo y al tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales que genera, y que surgieron con la convicción de que puede existir un futuro poscapitalista, una sociedad alternativa, más justa por estar orientada a la satisfacción de las necesidades reales de los pueblos, y más libre, por estar centrada en la realización de las condiciones del efectivo ejercicio de la libertad.

En un mundo cada vez más interdependiente llevo tiempo insistiendo en la necesidad de aprendizajes globales. Ningún país, cultura o continente puede arrogarse hoy el privilegio de haber encontrado la mejor solución para los problemas a los que el mundo se enfrenta y mucho menos el derecho de imponerla a otros países, culturas o continentes. La alternativa está en los aprendizajes globales, sin perder de vista los contextos y las necesidades específicas de cada uno. Llevo tiempo defendiendo las epistemologías del Sur como una de las vías para promover tales aprendizajes y la necesidad de hacerlo partiendo de las experiencias de los grupos sociales que sufren en los diferentes países la exclusión y la discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Así, pues, las necesidades y aspiraciones de tales grupos sociales deben ser la referencia privilegiada de las fuerzas de izquierda en todo el mundo, y los aprendizajes globales una herramienta valiosa en ese sentido. Lo que sucede es que las fuerzas de izquierda tienen una enorme dificultad para conocer las experiencias de otras fuerzas de izquierda en otros países y estar dispuestas a aprender de ellas. No están interesadas en conocer profundamente las realidades políticas de otros países ni tampoco les dan la atención debida al contexto internacional y a las fuerzas económicas y políticas que lo dominan. La desaparición analítica de

las múltiples caras del imperialismo es una prueba de ello. Además, tienden a ser poco sensibles ante la diversidad cultural y política del mundo.

Que las fuerzas de izquierda del Norte global (Europa y América del Norte) sean eurocéntricas no es ninguna novedad. Lo que quizá sea menos conocido es que la mayor parte de las fuerzas de izquierda del Sur global también son eurocéntricas en las referencias culturales subyacentes a sus análisis. Basta tener en cuenta las actitudes racistas de muchas fuerzas de izquierda de América Latina con relación a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Con el objetivo muy limitado de analizar la coyuntura de las fuerzas de izquierda en algunos países, este texto pretende aumentar el interconocimiento entre ellas y sugerir posibilidades de articulación tanto nacional como internacionalmente.

Este libro despertó un gran interés entre el público. Tal vez las condiciones políticas en algunos países invitasen al tipo de reflexión que aquí propongo. Por otro lado, la solución portuguesa de articulación entre las fuerzas de izquierda se fue conociendo gradualmente a escala internacional y sus resultados fueron mostrando que no se trataba solo de una novedad fugaz e inconsecuente, sino de una innovación política consistente y portadora de esperanza, que abría brechas en las paredes aparentemente estancas en las que el neoliberalismo quiso encerrar la política, la economía y, en definitiva, las justas aspiraciones de los ciudadanos y las ciudadanas a una sociedad mejor. Al éxito del libro en Brasil contribuyó también el saberse que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lo estaba leyendo en la cárcel a la que un sistema judicial políticamente manipulado lo condenó injustamente, transformándolo en el preso político tal vez más famoso del mundo.

Para esta edición, así como para las que se están preparando en otros países, procedí a una ampliación y actualización. Como dije, este libro pretende ser un libro no coyuntural de la coyuntura. No coyuntural porque responde al momento estructural que atravesamos y que caracterizo como un momento reaccionario global con

diferentes matices en diferentes países y regiones del globo. Hay ciertamente muchas respuestas progresistas a este momento. La que he seleccionado consiste en la exigencia de una nueva convivencia entre diferentes fuerzas de izquierda. No se trata de una propuesta utópica. Procuro más bien valorar y ampliar simbólicamente el significado de la experiencia portuguesa desde 2016: una experiencia de gobierno basada en una articulación entre fuerzas de izquierda que tradicionalmente estuvieron siempre separadas y que, de hecho, se hostilizaron prácticamente sin interrupción.

Para esta edición conté con la participación de un grupo de generosos colaboradores amigos que acompañan mi trabajo desde hace tiempo. Ellos actualizaron el texto, teniendo en cuenta los principales cambios que se han venido produciendo en cada uno de los países tratados entre marzo de 2018 (cuando cerré el análisis de la primera edición) y agosto de 2018. La presente edición reconstruye sus contribuciones en función de mis perspectivas sobre los temas abordados que, como es natural, no siempre coinciden con las suyas. Con mucho gusto menciono el nombre de todos. Para el caso de España, Antoni Aguiló actualizó el texto en vista de varios acontecimientos, muy especialmente la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy. Para el caso de México, Gustavo Esteva, Orlando Aragón, Jorge Alonso y Germán Sandoval respondieron positiva y generosamente a mi invitación. La manera como discutimos nuestras convergencias y divergencias es un ejemplo de la mentalidad que debe presidir los esfuerzos para articular las izquierdas.

Las diferencias analíticas entre mis colaboradores son bien reveladoras de la complejidad del contexto político mexicano. En Colombia, Bryan Vargas Reyes analiza con profundidad el proceso electoral y las dificultades en la articulación entre las fuerzas de izquierda, de las cuales resultó la victoria presidencial de Iván Duque (derecha uribista). Todos ellos se preocuparon de analizar los acontecimientos teniendo en mente el argumento principal del libro: los desafíos, las vicisitudes, las limitaciones y posibilidades de articulaciones entre las fuerzas de izquierda para enfrentar el ciclo reaccionario en el que

nos encontramos. Desde luego, va un agradecimiento muy especial para todos ellos. Para la actualización de los casos portugués y brasileño me he beneficiado de discusiones con tantos compañeros y compañeras a quienes prefiero no mencionar individualmente para no incurrir en omisiones injustas.

Capítulo 1

El nuevo interregno

Estamos en un interregno. El mundo que creó el neoliberalismo en 1989 con la caída del Muro de Berlín terminó con la primera fase de la crisis financiera (2008-2011) y todavía no se ha definido el nuevo mundo que tomará el relevo. El mundo posterior a 1989 tuvo dos agendas con un impacto decisivo en las políticas de izquierda un poco en todo el mundo. La agenda explícita fue el fin definitivo del socialismo como sistema social, económico y político liderado por el Estado. La agenda implícita constituyó el fin de cualquier sistema social, económico y político liderado por el Estado. Esta agenda implícita fue mucho más importante que la explícita porque el socialismo de Estado ya estaba en fase agonizante y desde 1978 procuraba reconstruirse en China como capitalismo de Estado a raíz de las reformas promovidas por Deng Xiaoping. El efecto más directo del fin del socialismo de tipo soviético en la izquierda fue el hecho de haber desarmado momentáneamente los partidos comunistas, algunos de ellos distanciados desde hacía mucho tiempo de la experiencia soviética. La agenda implícita fue la que verdaderamente contó y por eso tuvo que ocurrir de manera silenciosa e insidiosa, sin que cayeran muros. En la fase que hasta entonces había caracterizado el capitalismo dominante, la alternativa social al socialismo de tipo soviético eran los derechos económicos y sociales universales, de los que se beneficiaban sobre todo quienes, al no tener privilegios, solo tenían

el derecho y los derechos para defenderse del despotismo económico y político al que tendía el capitalismo sujeto exclusivamente a la lógica del mercado. La forma más avanzada de esta alternativa había sido la socialdemocracia europea de la posguerra, que de hecho en sus inicios, a principios del siglo XX, también había desplegado una agenda explícita (socialismo democrático) y una agenda implícita (capitalismo con alguna compatibilidad con la democracia y la inclusión social mínima que esta suponía). Después de 1945 quedó claro rápidamente que la única agenda era la agenda implícita. Desde entonces las izquierdas se dividieron entre las que seguían defendiendo una solución socialista (más o menos distante del modelo soviético) y las que, por más que se proclamaran socialistas, solo querían regular el capitalismo y controlar sus “excesos”.

Después de 1989, y tal como había sucedido a principios de siglo, la agenda implícita continuó durante algún tiempo siendo implícita, pese a ser ya la única en vigor. Se fue volviendo evidente que las dos izquierdas del periodo anterior habían salido derrotadas. Es por ello que, en el periodo posterior a 1989, se asistió a la difusión sin precedentes de la idea de la crisis de la socialdemocracia, muchas veces articulada con la idea de la imposibilidad o inviabilidad de la socialdemocracia. Al secundarla, la ortodoxia neoliberal adoctrinaba sobre el carácter depredador o por lo menos ineficiente del Estado y de la regulación estatal, sin los cuales no se podía garantizar la efectividad de los derechos económicos y sociales.

El desarme de la izquierda socialdemócrata se disimuló durante algún tiempo a través de la nueva articulación de las formas de dominación que dominaron el mundo desde el siglo XVII: el capitalismo, el colonialismo (racismo, monoculturalismo, etcétera) y el patriarcado (sexismo, división arbitraria entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, es decir, entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado). Las reivindicaciones sociales se orientaron a las agendas llamadas posmateriales, los derechos culturales o de cuarta generación. Estas reivindicaciones eran genuinas y denunciaban modos de opresión y discriminación repugnantes. Sin embargo, la manera en

la que se orientaron hizo creer a los agentes políticos que las habían movilizado (movimientos sociales, ONG, nuevos partidos) que las podían llevar a cabo con éxito sin tocar el tercer eje de la dominación: el capitalismo. Incluso hubo una negligencia de lo que se fue llamando política de clase (distribución) a favor de las políticas de raza y sexo (reconocimiento). Esa convicción demostró ser fatal cuando cayó el régimen posterior a 1989. La dominación capitalista, reforzada por la legitimidad que ha ido creando durante estos años, se ha manifestado con facilidad contra las conquistas antirracistas y antisexistas en la búsqueda incesante de mayor acumulación y explotación. Y estas, desprovistas de la voluntad anticapitalista o separadas de las luchas anticapitalistas, están sintiendo muchas dificultades para resistir.

En estos años de interregno resulta evidente que la agenda implícita pretendía darle toda la prioridad al principio del mercado en la regulación de las sociedades modernas en detrimento del principio del Estado y del principio de la comunidad. A comienzos del siglo XX el principio de la comunidad había sido dejado en segundo plano en favor de la rivalidad que se instaló entonces entre los principios del Estado y del mercado. La relación entre ambos siempre fue muy tensa y contradictoria. La socialdemocracia y los derechos económicos y sociales significaron momentos de tregua en los conflictos más agudos entre los dos principios. Dichos conflictos no derivaban de meras oposiciones teóricas. Derivaban de las luchas sociales de las clases trabajadoras que intentaban encontrar en el Estado el refugio mínimo contra las desigualdades y el despotismo generados por el principio del mercado. A partir de 1989, el neoliberalismo encontró el clima político adecuado para imponer el principio del mercado, contraponiendo su lógica a la lógica del principio del Estado, hasta entonces protegido.

La globalización neoliberal, la desregulación, la privatización, los tratados de libre comercio, el papel inflacionario del Banco Mundial y del FMI se fueron desarrollando paulatinamente para erosionar el principio del Estado, tanto retirándolo de la regulación social como convirtiendo esta última en otra forma de regulación mercantil.

Para ello fue necesaria una desnaturalización radical pero silenciosa de la democracia. Esta, que en el mejor de los casos había sido la encargada de gestionar las tensiones entre el principio del Estado y el principio del mercado, pasó a «usarse» para legitimar la superioridad del principio del mercado y, en el proceso, transformarse ella misma en un mercado (corrupción endémica, *lobbies*, financiación de partidos, etcétera). El objetivo fue que el Estado pasara de Estado capitalista con contradicciones a Estado capitalista sin contradicciones. Las contradicciones pasarían a manifestarse en la sociedad como crisis sociales que serían resueltas como cuestiones policiales y no como cuestiones políticas.

La gran mayoría de las fuerzas de izquierda aceptaron este giro; no opusieron mucha resistencia o incluso se volvieron cómplices activas del mismo, lo que sucedió sobre todo en Europa. En la última fase de este periodo, algunos países de América Latina protagonizaron una resistencia significativa, tan significativa que no se pudo neutralizar por la monotonía de las relaciones económicas promovidas por el neoliberalismo global, ni fue tan solo el resultado de los errores propios cometidos por los gobiernos progresistas. Supuso la fuerte intervención del imperialismo estadounidense, que en la primera década de 2000 había aliviado la presión sobre los países latinoamericanos por estar profundamente implicado en Oriente Medio. Venezuela, Brasil y Argentina son quizá los casos más emblemáticos de esta situación. El imperialismo estadounidense ha cambiado entretanto su imagen y táctica. En vez de imponer dictaduras mediante la CIA y fuerzas militares, promueve y financia iniciativas de “democracia amiga del mercado” a través de organizaciones no gubernamentales libertarias y evangélicas y de desarrollo local; de protestas en la medida de lo posible pacíficas, pero con lemas ofensivos dirigidos contra las personalidades, los principios y las políticas de izquierda. En situaciones más tensas puede financiar acciones violentas que después, con la complicidad de los medios de comunicación nacionales e internacionales, se atribuyen a los gobiernos hostiles, o sea, a gobiernos hostiles a los intereses estadounidenses.

Todo esto tutelado y financiado por la CIA, la embajada estadounidense en el país y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Así pues, vivimos un periodo de interregno. No sé si este interregno genera fenómenos mórbidos como el interregno famosamente analizado por Gramsci. Sin embargo, es seguro que ha asumido características profundamente discordantes entre sí. En los últimos cinco años, la actividad política en diferentes países y regiones del mundo ha adquirido nuevos contornos y se ha traducido en manifestaciones sorprendentes o desconcertantes. He aquí una selección posible: el agravamiento sin precedentes de la desigualdad social; la intensificación de la dominación capitalista, colonialista (racismo, xenofobia, islamofobia) y heteropatriarcal (sexismo) traducida en lo que llamo fascismo social en sus diferentes formas (fascismo del *apartheid* social, fascismo contractual, fascismo territorial, fascismo financiero, fascismo de la inseguridad); el resurgimiento del colonialismo interno en Europa con un país dominante, Alemania, aprovechándose de la crisis financiera para transformar los países del Sur en una especie de protectorado informal, especialmente flagrante en el caso de Grecia; el golpe judicial-parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, un golpe continuado con el impedimento de la candidatura de Lula da Silva a las elecciones presidenciales de 2018; la salida unilateral del Reino Unido de la Unión Europea (UE); la renuncia a las armas por parte de la guerrilla colombiana y el conturbado inicio del proceso de paz; el colapso o crisis grave del bipartidismo centrista en varios países, como Francia, España, Italia y Alemania; el surgimiento de partidos de nuevo tipo a partir de movimientos sociales o movilizaciones antipolíticas, como Podemos en España, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y el Partido del Hombre Común (AAP) en la India; la constitución de un gobierno de izquierda en Portugal, basada en un entendimiento sin precedentes entre diferentes partidos de izquierda; la elección presidencial de hombres de negocios multimillonarios con muy poca o nula experiencia política, resueltos a destruir la protección social que los Estados les han garantizado a las clases sociales más vulnerables,

independientemente de si es Macri en Argentina o Trump en Estados Unidos; el resurgimiento de la extrema derecha en Europa, con su tradicional nacionalismo de derecha, pero sorprendentemente portadora de la agenda de las políticas sociales que la socialdemocracia había abandonado, con la reserva de que ahora solo valen para “nosotros” y no para “ellos” (inmigrantes, refugiados); la infiltración de comportamientos fascizantes en gobiernos democráticamente elegidos, como, por ejemplo, en la India del Partido Popular Indio (BJP) y el presidente Modi, en las Filipinas de Duterte, en los Estados Unidos de Trump, en la Polonia de Kaczynski, en la Hungría de Orbán, en la Rusia de Putin, en la Turquía de Erdogan y en el México de Peña Nieto; la intensificación del terrorismo yihadista, que se proclama islámico; la mayor visibilidad de manifestaciones de identidad nacional, de pueblos sin Estado, de nacionalismos de derecha en Suiza y Austria, de nacionalismos con fuertes componentes de izquierda en España (Cataluña, pero también en el País Vasco, Galicia y Andalucía) y Nueva Zelanda, y de nacionalismos de los pueblos indígenas de las Américas que se niegan a encajar en la dicotomía izquierda/derecha; el colapso, debido a una combinación de errores propios e interferencia grave del imperialismo estadounidense, de gobiernos progresistas que procuraban combinar el desarrollo capitalista con la mejora del nivel de vida de las clases populares, en Brasil, Argentina y Venezuela; la agresividad sin parangón en la gravedad y la impunidad de la ocupación de Palestina por el Estado colonial de Israel; las profundas transformaciones internas combinadas con la estabilidad (por lo menos aparente) en países que durante mucho tiempo habían simbolizado las más avanzadas conquistas de las políticas de izquierda, como China, Vietnam y Cuba.

El significado histórico de este interregno

Esta lista deja fuera los problemas sociales, económicos y ecológicos que quizá más preocupen a los demócratas en todo el mundo. Al

mismo tiempo, no menciona la violencia familiar, urbana y rural o la proliferación de las guerras no declaradas, embargos no declarados, el terrorismo y el terrorismo de Estado que están destruyendo a pueblos enteros (Palestina, Libia, Siria, Afganistán, Yemen) y la convivencia pacífica en general; la transformación del trabajo en una mercancía como otra cualquiera, los llamamientos al consumismo, al individualismo y a la competitividad sin límites, ideologías con las que muchas fuerzas de izquierda han sido muy complacientes o aceptan como algo inevitable, lo que acaba por significar lo mismo.

En este sentido, esta es una lista de síntomas y no de causas. Aun así, me sirve para mostrar las características principales del interregno en el que nos encontramos.

Si bien el capitalismo es un sistema globalizado desde su inicio, el ámbito y las características internas de la globalización han variado a lo largo de los siglos. Para referirme tan solo al mundo contemporáneo, podemos decir que desde 1860 el mundo se encuentra en un proceso particularmente acelerado de interdependencia global, un proceso atravesado por contradicciones internas, como es propio del capitalismo, muy desigual y con discontinuidades significativas. El concepto de interregno pretende precisamente dar cuenta de los procesos de ruptura y de transición. Los periodos de más intensa globalización tienden a coincidir con periodos de gran rentabilidad del capital (ligada a grandes innovaciones tecnológicas) y con la hegemonía inequívoca (sobre todo económica, pero también política y militar) de un país. Estos periodos han sido seguidos por etapas de gran inestabilidad política y económica y de creciente rivalidad entre los países centrales.

El primer periodo de globalización contemporánea ocurrió entre 1860 y 1914. Reino Unido fue el país hegemónico y la segunda Revolución Industrial y el colonialismo fueron sus principales características. A este le siguió un periodo de más acentuada rivalidad entre los países centrales, del que resultaron dos guerras mundiales en las que murieron 78 millones de personas. El segundo periodo ocurrió entre 1944 y 1971. Estados Unidos fue el país hegemónico y sus principales

características fueron la tercera Revolución Industrial (informática), la Guerra Fría, la coexistencia de dos modelos de desarrollo (el modelo capitalista y el socialista, ambos con varias versiones), el fin del colonialismo y una nueva fase de imperialismo y neocolonialismo. Siguió un periodo de creciente rivalidad, del que resultó el colapso del socialismo soviético y el fin de la Guerra Fría. A partir de 1989 entramos en un tercer periodo de globalización, cuya crisis está dando lugar al interregno en el que nos encontramos. Fue un periodo de dominación más multilateral, con la Unión Europea y China disputándose la hegemonía de Estados Unidos conquistada en el periodo anterior. Se caracterizó por la cuarta Revolución Industrial (la microelectrónica y, de manera creciente, la genética y la robotización) y sus características más innovadoras fueron, por un lado, someter por primera vez virtualmente el mundo entero al mismo modelo de desarrollo hegemónico (el capitalismo en su versión neoliberal) y, por otro, transformar la democracia liberal en el único sistema político legítimo e imponerlo en todo el mundo.

La fase de interregno en la que nos encontramos está relacionada con la evolución más reciente de estas características. Todas las facetas de esta fase están vigentes, pero dan muestras de gran desestabilización. Una mayor rivalidad entre dos potencias imperiales, Estados Unidos y China, apoyándose en satélites importantes, la UE en el caso de Estados Unidos y Rusia en el caso de China; un desequilibrio cada vez más evidente entre el poderío militar de Estados Unidos y su poder económico con nuevas amenazas de guerra, que incluyen la guerra nuclear y una carrera armamentista; la imposibilidad de revertir la globalización, dada la profunda interdependencia (bien evidente en la crisis del proceso Brexit) combinada con la lucha por nuevas condiciones del llamado comercio libre en el caso de Estados Unidos; una crisis de rentabilidad del capital que provoca una larga depresión (no resuelta tras la crisis financiera de 2008 aún en curso) y que se manifiesta de dos formas principales: la degradación de los ingresos salariales en los países centrales y en los semiperiféricos, combinada con un ataque global a las clases medias (una realidad

que sociológicamente varía mucho de país a país) y una carrera sin precedentes por los llamados recursos naturales, con las consecuencias fatales que esto crea para las poblaciones campesinas y los pueblos indígenas, así como para los ya precarios equilibrios ecológicos.

Entre las características de este interregno dos son particularmente decisivas para las fuerzas de izquierda y revelan bien la tensión en la que se encuentran entre la necesidad cada vez más urgente de unirse y las dificultades nuevas y sin precedentes con respecto a la satisfacción sostenida de tal necesidad. Se trata de dos pulsiones contradictorias que van en sentido contrario y que a mi entender solo pueden gestionarse a través de un cuidadoso manejo de las escalas de tiempo. Veamos cada una de ellas:

1. En lo que se refiere a la universalización de la democracia liberal, las fuerzas de izquierda deben partir de la siguiente comprobación. La democracia liberal nunca ha tenido la capacidad de defenderse de los antidemócratas y de los fascistas bajo sus innumerables disfraces; pero actualmente lo que más sorprende no es esa incapacidad, sino más bien los procesos de incapacitación impulsados por una fuerza transnacional altamente poderosa e intrínsecamente antidemocrática: el neoliberalismo (capitalismo como civilización de mercado, de concentración y de ostentación de la riqueza), cada vez más hermanado con el predominio del capital financiero global, al que he llamado “fascismo financiero”, y acompañado por un cortejo impresionante de intuiciones transnacionales, grupos de presión y medios de comunicación. Estos nuevos (de hecho, viejos) enemigos de la democracia no quieren sustituirla por una dictadura; más bien buscan hacer que pierda su carácter hasta tal punto que se transforme en la reproductora más dócil y en la mejor voz legitimadora de sus intereses.

Esta verificación convoca con urgencia la necesidad de que las izquierdas se unan para salvaguardar el único campo político en el que hoy admiten luchar por el poder: el campo democrático.

2. A su vez, nos encontramos ante el ataque generalizado a los ingresos salariales, a las organizaciones obreras y a las formas de concertación social con la consiguiente transformación de las reivindicaciones sociales en una cuestión policial; ante la crisis ambiental cada vez más grave e irreversible agravada por la lucha desesperada por el acceso al petróleo, que implica la destrucción de países como Irak, Siria, Libia, y mañana tal vez Irán y Venezuela; y ante el recrudescimiento –para muchos y muchas sorprendente– del racismo, el sexismo y el heterosexismo. Todas estas características apuntan a una condición de irreversible contradicción entre el capitalismo y la democracia, incluso la democracia de baja intensidad que la democracia liberal siempre ha sido.

Ahora bien, siendo cierto que las izquierdas están desde hace mucho tiempo divididas entre las que creen en la regeneración del capitalismo, de un capitalismo de rostro humano, y las izquierdas que están convencidas de que el capitalismo es intrínsecamente inhumano y por tanto irreformable, no será fácil imaginar que se unan de forma sostenida. Pienso que una sabiduría pragmática que sepa distinguir entre el corto y el largo plazo, pero manteniéndolos en el debate, puede ayudar a resolver esta tensión. Este texto se centra en el corto plazo, pero no quiere perder de vista el mediano y el largo plazo.

Las fuerzas de izquierda ante el nuevo interregno

La lista de fenómenos, en apariencia anómalos, que he mencionado anteriormente ilustra cómo el movimiento dominante de erosión de la democracia se está viendo contrariado por fuerzas sociales de señal política opuesta, aunque con frecuencia apoyadas sobre las mismas bases sociales de clase. Bajo la forma del populismo, nuevas y viejas fuerzas de derecha y de extrema derecha buscan crear refugios en donde poder defender “su” democracia y sus derechos de los apetitos de extraños, sean estos inmigrantes, refugiados o grupos

sociales “inferiores”, declarados así debido a la raza, la etnia, el sexo, la sexualidad o la religión. No defienden la dictadura; al contrario, declaran defender la democracia al poner de relieve el valor moral de la voluntad del pueblo, reservando para ellos, como es obvio, el derecho de definir quién forma parte del “pueblo”. Como la voluntad del pueblo es un imperativo ético que no se discute, la supuesta defensa de la democracia opera a través de prácticas autoritarias y antidemocráticas. Esta es la esencia del populismo. Hablar de populismo de izquierda es uno de los errores más perniciosos de cierta teoría política crítica de los últimos años.

A su vez, nuevas y viejas fuerzas políticas de izquierda se proponen defender la democracia contra los límites y las perversiones de la democracia representativa, liberal. En este texto me centro en ellas. Dichas fuerzas intentan democratizar la democracia, reforzándola para poder resistir a los instintos más agresivos del neoliberalismo y del capital financiero. Esa defensa ha asumido varias formas en diferentes contextos y regiones del mundo. Las principales son las siguientes: nacimiento de nuevos partidos de izquierda y a veces de partidos de nuevo tipo, con una relación con la ciudadanía o con movimientos populares diferente y más intensa de la que ha sido característica de los viejos partidos de izquierda; rupturas profundas en el seno de los viejos partidos de izquierda, tanto en lo que respecta a programas como a liderazgos; surgimiento de movimientos de ciudadanía o de grupos sociales excluidos, algunos que perduran y otros efímeros, que se posicionan fuera de la lógica de la política partidaria y, por tanto, del marco de la democracia liberal; protestas, marchas, huelgas en defensa de los derechos económicos y sociales; adopción de procesos de articulación entre la democracia representativa y la democracia participativa en el interior de los partidos o en los campos de gestión política en los que intervienen, sobre todo a escala municipal; reivindicación de revisiones constitucionales o de asambleas constituyentes originarias para fortalecer las instituciones democráticas y blindarlas contra las acciones de sus enemigos; llamamiento a la necesidad de romper con las divisiones del pasado

y buscar articulaciones entre las diferentes familias de izquierda con el fin de volver más unitaria y eficaz la lucha contra las fuerzas antidemocráticas.

Tras apreciar esta lista es fácil concluir que este periodo de interregno está provocando un fuerte cuestionamiento de las teorías y las prácticas de izquierda que han predominado durante los últimos cincuenta años. El cuestionamiento asume las formas más diversas, pero, pese a ello, se pueden identificar algunos rasgos comunes.

El primero es que el horizonte emancipador ha dejado de ser el socialismo para ser la democracia, los derechos humanos, la dignidad, el posneoliberalismo, el poscapitalismo: un horizonte simultáneamente más impreciso y más diverso. Lo que pasa es que, treinta años después de la caída del Muro de Berlín, este horizonte está tan desacreditado como el horizonte socialista. La democracia liberal es hoy en muchos países una imposición del imperialismo y los derechos humanos solo se invocan para liquidar gobiernos que resisten al imperialismo. En segundo lugar, el carácter de las luchas y las reivindicaciones es, en general, un carácter defensivo, es decir, que pretende defender lo que se ha conquistado, por poco que haya sido, en vez de luchar por reivindicaciones más avanzadas en la confrontación con el orden capitalista, colonialista y patriarcal vigente. En vez de las guerras de movimiento y de las guerras de posición, como caracterizó Gramsci las principales estrategias obreras, prevalecen las guerras de trincheras, de líneas rojas que no se pueden traspasar. Las fuerzas que no aceptan esa lógica defensiva corren el riesgo de cargar con la marginación y la autonomía, que, cuanto más circunscrita se presenta a escala territorial o social, mayores.

En tercer lugar, al no haber sido totalmente proscrita, la democracia obliga a que las fuerzas de izquierda se posicionen en el marco democrático, por más que el régimen democrático esté desacreditado. Este posicionamiento podría implicar el rechazo a participar en el juego democrático, pero el costo es alto tanto si se participa (ninguna posibilidad de ganar) como si no se participa (marginación). Este dilema se siente especialmente en los periodos preelectorales.

Entre las varias estrategias que he mencionado antes, las que al mismo tiempo ilustran mejor las dificultades a la hora de actuar políticamente en un contexto defensivo y de transformar tales dificultades en una oportunidad para formular proyectos alternativos de lucha política son las propuestas de articulación o unidad entre las diferentes fuerzas de izquierda. Cabe añadir que estas propuestas están siendo discutidas en varios países en los que en 2018 se realizarán elecciones. Precisamente, los procesos electorales son la máxima prueba de viabilidad para este tipo de propuestas. Por todos estos motivos, me voy a centrar en ellas y voy a empezar por referir un caso concreto a modo de ejemplo.

Dos notas previas. La primera se puede formular en dos preguntas. ¿Realmente son de izquierda todas las fuerzas políticas que se consideran de izquierda? La respuesta a esta pregunta no es fácil, puesto que, más allá de ciertos principios generales (identificados en los libros que he mencionado en la nota 1), la caracterización de una determinada fuerza política depende de los contextos específicos en los que esta actúa. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera de izquierda o de centro-izquierda el Partido Demócrata, pero dudo que lo sea en cualquier otro país. Históricamente, uno de los debates más encendidos en el seno de la izquierda ha sido precisamente la definición de lo que se considera ser de izquierda. La segunda pregunta se puede formular así: ¿cómo distinguir entre fuerzas de izquierda y políticas de izquierda? En principio, se debería pensar que lo que hace que una fuerza política sea de izquierda es el hecho de defender y aplicar políticas de izquierda. Sin embargo, sabemos que la realidad es otra. Por ejemplo, considero el partido griego Syriza un partido de izquierda, pero con el mismo grado de convicción pienso que las políticas que ha venido aplicando en Grecia son de derecha. Por tanto, la segunda pregunta induce a una tercera: ¿durante cuánto tiempo y con qué consistencia se puede mantener tal incongruencia sin que deje de ser legítimo pensar que la fuerza de izquierda en cuestión ha dejado de serlo?

La segunda nota previa está relacionada con la necesidad de analizar el nuevo impulso de articulación o unidad entre las fuerzas de izquierda a la luz de otros impulsos del pasado. ¿El impulso actual debe interpretarse como algo que indica la voluntad de renovación de las fuerzas de izquierda o al contrario? La verdad es que la renovación de la izquierda siempre se ha pensado, por lo menos desde 1914, desde la falta de unión de las izquierdas. A su vez, la unidad siempre se ha tratado desde el encubrimiento o incluso el rechazo de la renovación de la izquierda; y la justificación para ello ha estado siempre relacionada con el peligro de la dictadura. ¿Acaso el impulso de articulación o unidad actual, aunque motivado por el peligro inminente del colapso de la democracia, puede significar, al contrario que en los casos anteriores, una voluntad de renovación?

Capítulo 2

La articulación entre fuerzas de izquierda: el caso portugués

El Gobierno que inició su andadura en Portugal a finales de 2015 es pionero en cuanto a la articulación entre varios partidos de izquierda, un gobierno del Partido Socialista (PS) con el apoyo parlamentario de dos partidos de izquierda, el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP). Es poco conocido internacionalmente, no solo porque Portugal es un país pequeño, cuyos procesos políticos pocas veces forman parte de la actualidad política internacional, sino porque, sobre todo, representa una solución política que va contra los intereses de los dos grandes enemigos globales de la democracia que hoy dominan los medios de comunicación –el neoliberalismo y el capital financiero global–.

Conviene recapitular. Desde la Revolución del 25 de abril de 1974, los portugueses han votado con frecuencia mayoritariamente partidos de izquierda, pero han sido gobernados por partidos de derecha o por el Partido Socialista a solas o en coalición con partidos de derecha. Los partidos de derecha se presentaban a las elecciones solos o en coalición, mientras que los partidos de izquierda, en la lógica de una larga trayectoria histórica, se presentaban divididos por diferencias aparentemente insuperables. En octubre de 2015 ocurrió lo mismo. Solo que en esa ocasión, en un gesto de innovación política que quedará en los anales de la democracia europea, los tres partidos de izquierda (Partido Socialista, Bloco de Esquerda y Partido Comunista Portugués)

resolvieron entrar en negociaciones para buscar una articulación de incidencia parlamentaria que viabilizara un gobierno de izquierda liderado por uno de esos partidos, el que tuvo más votos, el Partido Socialista. Con negociaciones separadas entre este partido y los otros (debido a las desconfianzas recíprocas iniciales), fue posible llegar a acuerdos de gobierno que viabilizaron un gobierno de izquierda sin precedentes en la Europa de las últimas décadas. La innovación de estos acuerdos se basó en varias premisas: 1) los acuerdos eran limitados y pragmáticos, se centraban en pequeños denominadores comunes con el objetivo de hacer posible un gobierno que frenara la continuación de las políticas de empobrecimiento de los portugueses que los partidos de la derecha neoliberal habían aplicado en el país; 2) los partidos mantenían celosamente su identidad programática, sus banderas, y aclaraban que los acuerdos no las ponían en riesgo, porque la respuesta a la coyuntura política no exigía reconsiderarlas, y mucho menos abandonarlas; 3) el gobierno debería ser coherente y, para ello, debería ser responsabilidad de un solo partido, y el apoyo parlamentario garantizaría su estabilidad; 4) los acuerdos se celebrarían de buena fe y tendrían un seguimiento, en el que las partes los comprobarían de manera regular. Los textos de los acuerdos constituyen modelos de contención política y detallan hasta en lo mínimo los términos acordados. Las medidas acordadas tenían, básicamente, dos grandes objetivos políticos: parar el empobrecimiento de los portugueses, reponiendo los ingresos de los trabajadores y los pensionados según la escala de ingresos; y frenar las privatizaciones que, como todas las que ocurren bajo los auspicios del neoliberalismo y del capital financiero global, son actos de “privatería”.¹ Los acuerdos se negociaron con éxito y el Gobierno tomó posesión en un ambiente políticamente hostil por parte del presidente de la República de entonces, de la Comisión Europea y de las agencias financieras, todos fieles servidores de la ortodoxia neoliberal. Poco a poco, la política desarrollada en cumplimiento

¹ Neologismo creado por el periodista Elio Gaspari que combina los términos “privatización” y “piratería”. (N. de los T.)

de los acuerdos fue dando resultados, para muchos sorprendentes, y pasado algún tiempo muchos de los detractores del gobierno no tuvieron más remedio que admitir su equivocación ante los datos de crecimiento de la economía, la disminución de la tasa de desocupación, la mejora general de la imagen del país, finalmente ratificada por las agencias de calificación de crédito, y los títulos portugueses que pasaron del nivel bono basura al nivel inversión. El significado de todo esto podría resumirse en lo siguiente: realizando políticas opuestas a las recetas neoliberales se obtienen los resultados que tales recetas siempre anuncian y nunca consiguen, y eso es posible sin aumentar el sufrimiento y el empobrecimiento de los portugueses; más bien al contrario, reduciéndolos. De una manera mucho más directa, el significado de esta innovación política es mostrar que el neoliberalismo es una mentira, y que su único y verdadero objetivo es acelerar como sea la concentración de la riqueza bajo los auspicios del capital financiero global.

Es evidente que la derecha neoliberal nacional e internacional está en desacuerdo con este propósito e intentará acabar con esta solución política, en lo que, por ahora, tiene como aliada a la derecha más liberal, que nunca se ha vuelto a identificar con los “excesos” del neoliberalismo y que quiere volver al poder. Ahora, la forma más benevolente del inconformismo surge como un aparente elogio, que se formula así: “Esta solución política durará toda la presente administración”. Para los más perspicaces, esto significa estabilidad a plazos, como si se dijera a las izquierdas (y a los portugueses que se vuelven a identificar con ellas): “Estuvo bien, pero se acabó”. A esas fuerzas y a los portugueses les compete contraponer a lo expresado un “queremos más”, y actuar en conformidad.

Actualización de diciembre de 2018

En apariencia, la articulación entre las fuerzas de izquierda en el actual gobierno portugués sigue siendo estable y los resultados de

las políticas siguen siendo alentadores. Por ejemplo, la tasa de desempleo es hoy del 6,9 %, la más baja de los últimos dieciséis años, y con tendencia a descender según las estimaciones de la OCDE. La innovación política portuguesa, inicialmente vista con gran recelo por la “comentocracia” nacional e internacional, se considera ahora con simpatía, cuando no se celebra. Buen ejemplo es el informe del *New York Times* del pasado 23 de julio, titulado “Portugal Dared to Cast Aside Austerity. It’s having a Major Revival”. Curiosamente el análisis no se restringe a los datos económicos. Habla de un punto de inflexión positivo en la “psique colectiva de los portugueses”, en contraste con lo que ocurre, por ejemplo, en Grecia.

El éxito de esta política no podía dejar de mostrar sus limitaciones, derivadas en gran medida de las restricciones en la inversión pública impuestas por Bruselas, con un impacto social particularmente significativo en los ámbitos de la salud y la educación, pero también en las infraestructuras, en el sistema judicial y penitenciario, en la cultura, etcétera. Como era de esperar, en los últimos meses aumentó la protesta social por parte de los sindicatos, sobre todo de los sindicatos de profesores. A su vez, el giro político de 2016 devolvió a los portugueses la esperanza realista en que llegarán días mejores. A medida que el tiempo pasa, quieren ver pasar las mejoras del discurso a la realidad. Algo especialmente visible en el área de la salud.

En los últimos meses, el principal punto de fricción entre el PS y sus aliados fue la reforma de la legislación laboral. El proyecto de ley presentado por el Gobierno al Parlamento se aparta de lo acordado en las negociaciones con el BE y el PCP y fue aprobado en su conjunto con los votos del Partido Social Demócrata (PSD), el partido de derecha que estuvo en el poder entre 2011 y 2015. Este hecho ha venido a mostrar que el PS puede estar tentado de recurrir al partido de derecha para superar los bloqueos que le puedan crear sus socios de coalición, mientras estos se mantienen en ella porque entienden que, a pesar de todo, lo esencial de los objetivos de la coalición se está manteniendo.

Al final de 2018 hay que considerar varios hechos nuevos que, lejos de prefigurar el fin próximo de la coalición, pueden ser característicos de su crisis de crecimiento. El primer hecho fue la elección en febrero de 2018 del nuevo secretario general del PSD, Rui Rio, un político respetado que fue la oposición interna más visible contra el vértigo neoliberal que asoló al partido bajo el mando de Pedro Passos Coelho. Con Rio, el partido mostró voluntad de volver a su origen de derecha moderada o centro-derecha, siempre disponible para llegar a acuerdos de gobierno con la también moderada centro-izquierda: el PS. Estos acuerdos fueron responsables de varios periodos de gobierno del “bloque central” en los últimos cuarenta años. Recuérdese que la centro-derecha es también la ideología del actual presidente de la República. A diferencia de su antecesor, el presidente ha sido sutil y prudente a la hora de enmarcarse políticamente. Sin embargo, su insistencia en los “pactos de régimen” (en ámbitos como salud, educación, justicia), sin referencia específica al impacto de la innovación política de los últimos años, no puede dejar de recordar el viejo “arco de gobierno” (PS y PSD).

La elección de Rio amplió las opciones del PS. Mientras que con el liderazgo y la orientación anteriores por parte del PSD cualquier convergencia con ese partido sería improbable, ahora tales coaliciones son posibles –como, por cierto, sucedió en el pasado–. El segundo hecho es que, con este nuevo campo de maniobra abierto para el PS, no sorprende que en el interior del partido hayan surgido voces influyentes en el sentido de que el PS vuelva a su tradición de coaligarse con la derecha y no con la izquierda. Estas voces cuentan con el apoyo de los intereses neoliberales internacionales –incluidas las instituciones de la Unión Europea–, temerosos de que la articulación de las izquierdas se reproduzca en otros países, eventualmente con agendas más amplias que la portuguesa. Una variante de esta posición es la de aquellos que prevén que el éxito de las políticas del gobierno puede llevar al PS a conquistar la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales de finales de 2019, en cuyo caso el partido podría prescindir de coaliciones tanto con la izquierda como

con la derecha. Este último escenario no es probable. Tal vez por eso la actual dirigencia del PS no parece apostar por él.

De cualquier modo, estos hechos ponen a las fuerzas de izquierda bajo nuevas presiones. Si se rompiera la coalición en caso de reiteradas violaciones a lo acordado por el PS, las fuerzas de izquierda temen ser culpadas por los votantes de poner fin a una solución política que había devuelto cierta esperanza y un mayor bienestar a la mayoría empobrecida de los portugueses. Si, por el contrario, mantienen la coalición, podrían ser consideradas responsables por parte de sus militantes y simpatizantes de haber pactado la entrada de la austeridad por la ventana después de haberla expulsado por la puerta. Las alianzas pragmáticas habrán repercutido en la pérdida de identidad.

Los partidos de izquierda han revelado una enorme madurez política en este contexto político. El debate interno en el Bloco de Esquerda es más conocido y por eso le dedico particular atención. Las corrientes mayoritarias del BE hacen un balance globalmente positivo de la articulación política con el resto de los partidos de la coalición y reclaman –como parte de su iniciativa política– muchas de las medidas que han mejorado la vida de los portugueses. Y lo hacen con razón. Destacan, en especial, que en la abrumadora mayoría de las cuestiones hubo una gran consonancia con el PCP. Son especialmente críticos con la posición del PS en los ámbitos de la legislación laboral, por su concesión casi total a las exigencias de las confederaciones patronales –en las que resuenan las presiones europeas–, y en el ámbito de la salud con el sostenimiento de las asociaciones público-privadas que alimentan al sector privado de la salud e impiden que el servicio nacional de salud vuelva a los niveles que en el pasado hicieron de Portugal ejemplo de una historia de éxito internacional en el campo de la promoción de la salud como bien público.

Por encima de todo, las corrientes mayoritarias del BE entienden que el saldo positivo de la experiencia de los últimos dos años y las expectativas positivas que generaron en la mayoría de los portugueses le crearon una nueva responsabilidad al conjunto de los partidos de izquierda en el sentido de no decepcionar estas expectativas. Sin

embargo, entienden que para que esto sea posible es necesario que la articulación entre las fuerzas de izquierda se profundice y supere al menos algunas de las limitaciones que tuvo en su primera fase. Estas limitaciones eran comprensibles en el difícil contexto de 2015, pero no lo son hoy o, al menos, deben ser objeto de un debate que puede implicar la reformulación y el alcance de los acuerdos. El éxito de la innovación portuguesa es la otra cara de sus objetivos extremadamente modestos, que ni siquiera han conseguido devolverle a la sociedad portuguesa el bienestar relativo que tenía antes de la crisis. Para el BE, tales limitaciones se derivan en última instancia de los tratados que gobiernan la política europea –sobre todo el Pacto fiscal europeo–; tratados que impiden la inversión pública, el fortalecimiento del Estado social y el control público de sectores estratégicos. Y se derivan también de la enorme deuda pública, que es insostenible y debería reestructurarse. Para el BE, el éxito internacional de la política portuguesa de los últimos dos años –no siempre elogiado por buenas razones– confiere cierta autoridad para presionar a las instituciones europeas, especialmente a través de alianzas con otros países que tienen intereses convergentes con los de Portugal.

Como puede imaginarse, esta posición choca frontalmente con la del Gobierno del PS, cuyo ministro de Finanzas, Mário Centeno, fue elegido para presidir el Eurogrupo y sellar así el alineamiento total de Portugal con el Pacto fiscal europeo. En mi opinión, a menos que se produzca una mayor turbulencia financiera internacional –siempre posible debido a la impenitente opacidad de los mercados financieros–, los próximos tiempos traerán grandes desafíos a la articulación de las izquierdas y nada indica que esos desafíos no puedan enfrentarse con éxito. Bajo mi punto de vista, esto depende de los siguientes factores. Es esencial dejar claro a la opinión pública portuguesa que el éxito de las políticas de los últimos años se debe por igual a los tres partidos de la coalición. Solo eso permitirá que todos ellos crezcan electoralmente y todos a costa del electorado tradicionalmente indeciso o de derecha. La lucha mediática va a ser en este ámbito muy fuerte y la izquierda no tiene en principio muchas bazas dado el predominio

de los comentaristas de derecha en los medios de comunicación. Para compensar esto es necesario que los portugueses se movilicen socialmente para que las mejoras de los últimos años se consoliden y profundicen. La movilización social es, pues, decisiva. Pienso, además, que las fuerzas de izquierda, sobre todo el BE y el PCP, deben ser particularmente conscientes de los riesgos que corren la democracia y el bienestar de las clases trabajadoras y medias en una Europa xenófoba crecientemente dominada por fuerzas de extrema derecha. Un análisis profundo de este contexto debe ser un incentivo para atreverse a tener más imaginación política. Se debe considerar la posibilidad de una coalición entre el BE y el PCP a fin de poder beneficiarse de la lógica del método D'Hondt en el sistema electoral portugués –que beneficia a los grandes partidos y a las coaliciones en detrimento de los partidos más pequeños–. Esto permitiría hacer crecer la presión de izquierda sobre el PS, sin la cual los automatismos antiguos y los intereses de siempre inclinarán el partido a la derecha, una derecha más disponible que nunca para construir la alianza alternativa.

Todos conocemos las divergencias ideológicas entre el BE y el PCP y las razones que las produjeron. Pero también sabemos que en los últimos años ambos casi siempre han convergido en las principales políticas del gobierno de izquierda. Muchos hallarán esta idea utópica, pero, como decía Sartre, antes de realizarse todas las ideas son utópicas.

Las vicisitudes por las que pueda pasar la innovación política portuguesa en los próximos tiempos no afectan su significado global para las políticas progresistas de las próximas décadas.

¿Cuál es el significado más global de esta innovación? Once tesis para articulaciones limitadas entre fuerzas de izquierda

En este ámbito, como en muchos otros, no hay lugar para copias mecánicas de soluciones. Las izquierdas pueden y deben aprender de las

experiencias globales, pero tienen que encontrar las soluciones que se adapten a sus condiciones y su contexto. De hecho, hay factores que son únicos y facilitan soluciones que en otros contextos son inevitables o, por lo menos, mucho más difíciles. Daré algunos ejemplos más adelante. Con estas cautelas, la experiencia portuguesa tiene un significado que trasciende al país, independientemente de lo que ocurra en el futuro. Ese significado puede resumirse en las siguientes tesis:

1) Las articulaciones entre partidos de izquierda pueden ser de varios tipos. Sobre todo, pueden derivar de acuerdos preelectorales o acuerdos parlamentarios. Pueden implicar participación en el gobierno o solo apoyo parlamentario. Dado que los partidos parten de posiciones ideológicas muy diferentes, y si no hay otros factores que recomienden lo contrario, es preferible optar por acuerdos poselectorales (porque se dan después de medir pesos relativos) y acuerdos de incidencia parlamentaria (porque minimizan los riesgos de los socios minoritarios y permiten que las divergencias sean más visibles y dispongan de sistemas de alerta conocidos por los ciudadanos).

2) Las soluciones políticas de riesgo presuponen liderazgos con visión política y capacidad para negociar. En el caso portugués, todos los líderes implicados tienen esa característica. De hecho, el primer ministro había intentado puntualmente políticas de articulación de izquierda en los años en los que fue alcalde del Ayuntamiento de Lisboa. Sin embargo, la articulación más consistente entre fuerzas de izquierda la protagonizó Jorge Sampaio, también del Partido Socialista, como alcalde de Lisboa, quien acabaría por ser presidente de la República entre 1996 y 2006. Y no podemos olvidarnos de que el fundador del Partido Socialista portugués, Mário Soares, en la fase final de su vida política había abogado por este tipo de políticas; algo que, por ejemplo, es difícil de imaginar en España, donde el que fuera líder histórico del PSOE, Felipe González, se ha ido inclinando hacia la derecha con el paso de los años y se ha manifestado siempre contra cualquier entendimiento entre las izquierdas.

3) Las soluciones innovadoras y de riesgo no pueden salir solo de las cabezas de los líderes políticos. Es necesario consultar a las “bases” del partido y dejarse movilizar por las inquietudes y aspiraciones que manifiestan.

4) La articulación entre fuerzas de izquierda solo es posible cuando se comparte la voluntad de no articularse con fuerzas de derecha o de centro-derecha. Sin una fuerte identidad de izquierda, el partido o fuerza de izquierda en que dicha identidad sea débil siempre será un socio vacilante, capaz de abandonar la coalición en cualquier momento. Hoy en día, la idea de centro es particularmente peligrosa para la izquierda, porque, como espectro político, se ha desplazado a la derecha por presión del neoliberalismo y del capital financiero. El centro tiende a ser centro-derecha, incluso cuando afirma ser centro-izquierda. Es crucial distinguir entre una política moderada de izquierda y una política de centro-izquierda. La primera puede ser el resultado de un acuerdo coyuntural entre fuerzas de izquierda, mientras que la segunda es el resultado de articulaciones con la derecha que suponen complicidades mayores que hacen que pierda su carácter de política de izquierda.

En este campo, la solución portuguesa invita a una reflexión más profunda: aunque sea una articulación entre fuerzas de izquierda y yo considere que configura una política moderada de izquierda, la verdad es que contiene, por acción u omisión, algunas opciones que implican ceder gravemente a los intereses que normalmente defiende la derecha; por ejemplo, en los campos del derecho al trabajo y de la política sanitaria. Todo lleva a creer que la prueba para comprobar la voluntad real de garantizar la sostenibilidad de la unidad de las izquierdas está en lo que se decida en estas áreas en un futuro cercano.

5) No hay articulación o unidad sin programa y sin sistemas de consultas y de alerta que evalúen regularmente su cumplimiento. Pasar cheques en blanco a cualquier líder político en el interior de una coalición de izquierda es una invitación al desastre.

6) Cuanto más compartido sea el diagnóstico de que estamos en un periodo de luchas defensivas, un periodo en el que la democracia, incluso la de baja intensidad, corre un serio riesgo de ser duramente secuestrada por fuerzas antidemocráticas y fascistizantes, más viable será la articulación. Aunque la democracia no se colapse totalmente, la actividad política opositora de las fuerzas de izquierda en su conjunto puede correr serios riesgos de sufrir fuertes limitaciones, e incluso ser ilegalizada.

7) La disputa electoral tiene que tener un mínimo de credibilidad. Para ello se debe basar en un sistema electoral que garantice la certeza de los procesos electorales para que los resultados de la disputa electoral no sean inciertos.

8) La voluntad de converger nunca puede neutralizar la posibilidad de divergir. Según los contextos y las condiciones, puede ser tan fundamental converger como divergir. Incluso durante la vigencia de las coaliciones, las diferentes fuerzas de izquierda deben mantener canales de divergencia constructiva. Cuando esta deje de ser constructiva, significará que se aproxima el fin de la coalición.

9) En un contexto mediático y comunicacional hostil a las políticas de izquierda, en un contexto en el que proliferan las noticias falsas, las redes sociales pueden potenciar la intriga y la desconfianza y los *soundbites* [piezas de audio] pueden contar más que los contenidos y las argumentaciones, es decisivo que haya canales de comunicación constantes y eficaces entre los socios de la coalición y que se aclaren pronto los malentendidos.

10) No hay que olvidar los límites de los acuerdos, tanto para no crear expectativas exageradas como para saber avanzar hacia otros acuerdos o para romper los existentes cuando las condiciones permitan políticas más avanzadas. En el caso portugués, los detallados acuerdos entre los tres partidos revelan bien el carácter defensivo y

limitado de las políticas acordadas. En el día a día, la Unión Europea, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo transmiten las imposiciones del neoliberalismo global. La respuesta de los partidos de izquierda portugueses se debe valorar a la luz de la violenta respuesta de estas instituciones europeas a las políticas iniciales del partido Syriza en Grecia. La solución portuguesa pretendió crear un espacio de maniobra mínimo en un contexto que constituía una ventana de oportunidad. Recurriendo a una metáfora, la solución portuguesa permitió a la sociedad portuguesa respirar. Ahora bien, respirar no es lo mismo que florecer; tan solo es lo mismo que sobrevivir.

11) En el contexto actual de asfixiante adoctrinamiento neoliberal, la construcción y la implementación de alternativas, por más limitadas que sean, tienen, cuando se realizan con éxito, además del impacto concreto y beneficioso en la vida de los ciudadanos, un efecto simbólico decisivo que consiste en deshacer el mito de que los partidos de izquierda-izquierda solo sirven para protestar y no saben negociar y mucho menos asumir las complejas responsabilidades de gobernar. Las fuerzas conservadoras han alimentado este mito a lo largo de décadas con la complicidad de grandes medios de comunicación y actualmente cuentan también con el apoyo del poder disciplinario global que el neoliberalismo ha adquirido en las últimas décadas.

Algunos escenarios inciertos para la articulación de las fuerzas de izquierda

En los últimos tiempos, la cuestión de la articulación entre fuerzas de izquierda se ha discutido en diferentes países y los contextos en los que se ha dado esta discusión son reveladores de los numerosos obstáculos que habría que superar para que dicha articulación fuera posible o deseable. En algunos casos resulta muy claro que tales obstáculos son a corto o mediano plazo infranqueables. Las discusiones tienden a tener lugar sobre todo en periodos preelectorales.

Me limitaré a ilustrar los diferentes obstáculos y los bloqueos que los diferentes contextos revelan y, a la luz de ellos, lo que tendría que cambiar para que esa articulación fuera posible y deseable.

A continuación, voy a analizar brevemente cuatro de esos contextos: Brasil, Colombia, México y España. En los tres primeros países ha habido o habrá elecciones en 2018. Cada uno de estos países ilustra un obstáculo específico para la construcción de coaliciones que hagan posibles gobiernos de izquierda con programas de izquierda. De hecho, este ejercicio puede hacerse con otros países, tanto para ilustrar estos obstáculos como para ilustrar otros que, en ese caso, deberán definirse. Si este ejercicio por fuerza colectivo se hace en un número suficientemente grande de países en diferentes regiones del mundo, será posible tener una idea de conjunto de los obstáculos que se deben superar y de los caminos para hacerlo. Con esta base sería posible imaginar una nueva internacional de izquierdas. Es evidente que, en muchos países, los debates políticos no se formulan como debates entre izquierda y derecha y, en otros, los propios debates están prohibidos por regímenes autoritarios. En el primer caso, las fuerzas políticas que luchan democráticamente contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, sin preocuparse por las etiquetas, podrían estar interesadas en la nueva internacional. Los nombres con los que se designan las diferencias son menos importantes que las diferencias en sí y las maneras de debatir sobre ellas. En el segundo caso, las fuerzas que clandestinamente luchan por la democracia también podrían estar interesadas en la nueva internacional.

Capítulo 3

Brasil: la fractura del desgaste de gobernar

Introducción: la democracia brasileña en la encrucijada

Un fantasma aterra a Brasil. Las conquistas sociales y democráticas de los últimos quince años, que parecían tan sólidas, ahora se diluyen, y las organizaciones sociales y políticas que las promovieron parecen estar tan desarmadas que resulta difícil imaginar que en su momento tuvieran tanta fuerza. ¿Ante quién se lograron esas conquistas? ¿Quiénes eran sus opositores o enemigos? Aparentemente, esas conquistas no debilitaron los poderes económicos, sociales y políticos conservadores, desde siempre dominantes, a los que se oponían, ya que de otro modo no se comprende la renovada agresividad y la avasalladora devastación con que estos poderes pretenden borrar de la memoria de los brasileños y brasileñas ese pasado que acaba por ser tan reciente. ¿En una sociedad tan desigual y tan discriminatoria como la brasileña, serán posibles medidas que aumenten la inclusión social y la participación democrática de las mayorías sin afectar negativamente los intereses de las clases dominantes que siempre han promovido la exclusión, la discriminación y el autoritarismo?

La perplejidad es enorme y amenaza con ser paralizadora durante algún tiempo por cuatro razones principales.

La coyuntura electoral

La primera es el golpe institucional con el que comenzó ese retroceso social y político. La destitución de la presidenta Dilma Rousseff abrió un proceso doblemente hostil y una reflexión profunda sobre lo que ocurrió y acerca de la recomposición de las fuerzas que podían resistir al retroceso. Por un lado, abrió un proceso electoral que, como cualquier proceso electoral, obliga a privilegiar el pensamiento táctico de la conquista del poder y deja de lado una problematización de la naturaleza de ese poder; una problematización que, en este caso concreto, debería incluir preguntarse por qué se perdió el poder en el periodo anterior al golpe. Por otro lado, se trató de un golpe continuado que se transmutó en una persecución judicial al principal arquitecto y símbolo de las conquistas sociales y políticas del periodo anterior: el expresidente Lula da Silva. Dadas las grotescas irregularidades procesales y la selectividad política de la saña persecutoria, las energías democráticas, antigolpistas, se centraron, y de manera acertada, en la defensa de la dignidad ciudadana de Lula da Silva y, más recientemente, en la defensa de su derecho a ser candidato en las próximas elecciones. También por esta razón, el hecho de que el tiempo apremiara provocó que se dispensaran otras problematizaciones del pasado y del presente.

El Brasil profundo

La segunda razón para esta perplejidad potencialmente paralizadora tiene que ver con la invisibilidad –e incluso ausencia–, en el actual contexto, del Brasil profundo: de la gran mayoría pobre, negra, indígena, joven, que vive en las favelas, que se pudre en los calabozos; una mayoría que no tiene acceso ni al discurso político y mediático hegemónico ni al discurso paralelo de las redes sociales. Como mucho, tiene acceso al discurso de las iglesias, que la acoge solo para ratificar y legitimar su ausencia. Esta mayoría vivió con mucha más ambivalencia el periodo anterior al golpe que la que la

clase política que lo protagonizó se puede imaginar. Muchas veces esta mayoría se sintió víctima de la negligencia, la falta de consideración, la displicencia e incluso la arrogancia de quienes se proclamaban sus defensores en nombre de los megaproyectos hidroeléctricos y mineros, el agronegocio, los eventos deportivos megalómanos que la expulsaban de sus tierras ancestrales, contaminaban sus aguas, destruían sus bosques, asesinaban a sus líderes y jóvenes, víctimas del odio racial, y echaban a las familias de sus humildes viviendas para mandarlas a distantes periferias. Esa mayoría sentía que los beneficios reales recibidos a través de las políticas sociales se lograban con enormes costos humanos y medioambientales que no se reconocían oficialmente. Sobre todo, sentía que no se incluía su voz en los números que hacían referencia a ella y a su progreso. Quién sabe si debido a esto tendrá dificultades en darse cuenta de que, de ahora en adelante, será mucho peor.

La intervención imperial

La tercera razón de la perplejidad tiene que ver con la resistencia de los demócratas brasileños, y sobre todo de las fuerzas de izquierda, a prestar la debida atención a la injerencia del imperialismo estadounidense. Hoy en día, la injerencia de los Estados Unidos en el continente a lo largo del siglo XX está bien documentada: esta siempre tuvo el objetivo de eliminar gobiernos y gobernadores elegidos democráticamente, y que los dirigentes estadounidenses consideraran potencialmente hostiles a los intereses de las empresas estadounidenses. La lucha contra el comunismo, el narcotráfico, el terrorismo y el izquierdismo fueron los sucesivos pretextos usados para justificar las intervenciones, pero el objetivo siempre fue el mismo. Las intervenciones corresponden a una opción estratégica de larga duración y, por tanto, no dependen de quién ocupa la Casa Blanca. Al fin y al cabo, no fue Donald Trump sino Barack Obama quien emitió la desconcertante orden ejecutiva que declaraba a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional” de

los Estados Unidos. Tradicionalmente, las intervenciones adoptaron varias formas. Sin embargo, en el pasado, cuando incluso fue necesario el cambio de régimen, casi siempre conllevaron la intervención militar y la instalación de dictaduras militares o gobiernos títere.

De manera trágica, los brasileños aprendieron (cuando lo aprendieron) que sin esa intervención no habría sido posible la dictadura militar de 1964. Fue un aprendizaje que les salió caro. Surgió la resistencia, fue un éxito y, en los últimos treinta y tantos años, Brasil vivió un periodo de relativo florecimiento democrático, aunque conservando muchas de las exclusiones causadas por la combinación fatal entre capitalismo (desigualdad social), colonialismo (discriminación racial) y patriarcado (discriminación sexual). Una combinación compleja de factores, entre los cuales la aparente reorientación del imperialismo hacia Oriente Medio, el surgimiento en la primera década del nuevo milenio de varios gobiernos progresistas con más o menos vehementes discursos antimperialistas (Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador) y la promoción de la democracia hecha por las agencias internacionales dominadas por los Estados Unidos (por ejemplo, el Banco Mundial), creó la ilusión de que los gobiernos del subcontinente podían de ahora en adelante gobernarse por cuenta propia sin prestar demasiada atención al *Big Brother* del Norte. Esta ilusión está creando una peligrosa zona de invisibilidad y desatención que es más grave si tenemos en cuenta que los medios de intervención imperial con el tiempo han cambiado y actualmente están mucho más diversificados y son más insidiosos. En vez de promover dictaduras, se presentan como “promotores de la democracia”, una democracia vacía de cualquier potencial popular, de inclusión social o de prioridad del interés nacional. Se trata de una democracia que se autoproclama libertaria, enemiga de la intervención del Estado, obediente a las exigencias del mercado, es decir, del capital, a través de los sectores dirigentes del capital (hoy en día, el sector financiero) y, sobre todo, abierta al pillaje de las riquezas naturales del país perpetrado por las empresas estadounidenses, el mismo objetivo de siempre.

Más concretamente, la intervención tiene tres pilares principales. Por un lado, la intervención en la opinión pública y en las protestas sociales a través de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, bien articuladas con las redes sociales, financiadas por los Estados Unidos, tanto mediante las agencias del Estado (Congreso, Departamento de Estado, CIA, USAID) como mediante las fundaciones creadas por los grandes multimillonarios estadounidenses, entre los que destacan especialmente los hermanos Koch, dos auténticos potentados económicos. Lee Fang explica bien los enredos creados por estas instituciones en un trabajo de periodismo de investigación publicado en *The Intercept* el 11 de agosto de 2017.¹

Lee Fang describe la extensión de la Red Atlas y su relación con el Movimiento Brasil Libre que promovió activamente el *impeachment* de la presidenta Dilma Rouseff. “La red es extensa y, actualmente, cuenta con colaboraciones de 450 *think tanks* en todo el mundo. Atlas afirma haberse gastado más de 5 millones de dólares con sus colaboradores solo en 2016. A lo largo de los años, Atlas y sus fundaciones caritativas asociadas han realizado cientos de donaciones a *think tanks* conservadores y defensores del libre mercado en América Latina, incluso a la red que apoyó el Movimiento Brasil Libre (MBL)”. Y, más adelante, añade: “El escenario político en el que surgió el MBL es una novedad en Brasil. Según Hélio Beltrão –un ejecutivo de un fondo de inversión de alto riesgo que ahora dirige el Instituto Mises, una organización sin ánimo de lucro que recibió su nombre del filósofo libertario Ludwig von Mises–, hace diez años como mucho había tres *think tanks* libertarios en actividad en el país. Beltrão indica que, con el apoyo de Atlas, ahora existen cerca de 30 institutos que actúan y colaboran entre ellos en Brasil, como Estudiantes por la Libertad y el MBL”.

“Es como un equipo de fútbol; la defensa es la academia y los políticos son los delanteros. Y ya hemos marcado algunos goles”, dice

¹ Disponible en <https://theintercept.com/2017/08/11/esfera-de-influencia-como-os-libertarios-americanos-estao-reinventando-a-politica-latino-americana>

Beltrão al referirse al *impeachment* de Dilma. “Los centrocampistas serían ‘el personal de la cultura’, aquellos que forman la opinión pública”. “Beltrão explica que la red de *think tanks* está presionando debido a la privatización de Correos, que describe como ‘un fruto maduro para ser recogido’ y que puede conllevar una ola de reformas más amplias a favor del libre mercado. Muchos partidos conservadores brasileños acogieron a los activistas libertarios cuando estos demostraron que eran capaces de movilizar a cientos de miles de personas en las protestas contra Dilma, pero aún no han adoptado las teorías de la ‘economía del lado de la oferta’”. “Fernando Schüller, académico y columnista asociado al Instituto Millenium –otro *think tank* de Atlas en Brasil– tiene otra visión del asunto: ‘Brasil tiene 17 mil sindicatos pagados con dinero público. Un día de salario al año se destina a los sindicatos, que están completamente controlados por la izquierda’, indica. La única manera de revertir la tendencia socialista sería superarla en el juego de maniobras políticas. ‘Con la tecnología, la gente podría participar directamente, organizando – en WhatsApp, Facebook y YouTube– una especie de manifestación pública de bajo costo’, añade, describiendo la forma de movilización de protestas de los libertarios contra políticos de izquierda”. Quien esté atento a las redes sociales sabe bien qué significa esto.

Como ya he mencionado, este solo es uno de los pilares de la intervención imperial. El segundo pilar es la intromisión en el proceso político, mediante la financiación de partidos que sirven de vehículo a los intereses económicos del capital en general y de las multinacionales en especial. A veces las iglesias, sobre todo las evangélicas, se movilizan con ahínco para conseguir financiación.

El tercer pilar es la intervención en el sistema judicial. Antes de nada, debo aclarar que esta intervención no explica del todo el comportamiento reciente del Poder Judicial en Brasil en los últimos tiempos. Hay muchos otros factores que se deben tener en cuenta, desde la formación en las facultades de Derecho hasta su origen de clase y la organización institucional y organizativa (carreras, disciplina interna, salarios, etcétera). La intervención imperial en el sector solo es

un factor, aunque cada vez es un factor de más importancia en algunos países. La inversión estadounidense en el sistema judicial como instrumento de intervención imperial se intensificó dramáticamente tras la caída del Muro de Berlín y Rusia fue la gran “beneficiaria” de tal intervención, aparentemente sin mucho éxito. En el subcontinente, la intervención se centró en Colombia,² pero se llevaron a cabo inversiones significativas en algunos países como, por ejemplo, el Brasil de los últimos diez años. Se trata de una intervención que pretende crear estructuras de acusación agresivas, bien equipadas e impregnadas de una ideología de independencia judicial orientada a la defensa prioritaria del principio de la libertad (en detrimento del principio de la igualdad) y de la defensa absoluta de la propiedad privada. De este modo, se pretende infundir la idea de que esta es la única ideología judicial legítima porque es la única no política (las afinidades con la ideología de la “escuela sin partido” son evidentes).

Queda bien patente en lo expresado por su portavoz tal vez más fiable, *The Wall Street Journal*, en un artículo de la columnista habitual para el continente, que el imperialismo no se equivoca sobre lo que está en juego en el actual drama judicial. El 4 de febrero de 2018, en un artículo titulado “La condena de Lula es una victoria para Brasil”, la autora escribe: “El mercado financiero de Brasil se disparó en enero cuando un tribunal de apelación confirmó la condena por soborno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La euforia de los inversionistas llevó al máximo el índice bursátil Ibovespa, que llegó al 5,3 % la semana que acabó el 26 de enero. El mercado deliró, puesto que la decisión hizo aumentar las hipótesis de que Lula da Silva no sería candidato a las elecciones presidenciales fijadas para el 7 de octubre y, por tanto, no regresaría al Palacio Presidencial con su

² Véase Boaventura de Sousa Santos y M. García Villegas (orgs.), *El caleidoscopio de las justicias en Colombia*, vol. I (Bogotá: Ediciones Uniandes, Siglo del Hombre, 2001), cap. 3: “Derecho y democracia: la reforma global de la justicia”, 179-184. Véase también Boaventura de Sousa Santos, *Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho* (Madrid: Trotta, 2009), cap. 7: “Derecho y democracia: la reforma global de la justicia”, 454-505. A pesar de que los títulos de los dos capítulos son iguales, se trata de dos textos muy diferentes, como lo indica la extensión de cada uno.

pernicioso populismo. Sin embargo, hay otra razón, mucho más profunda, por la que la decisión es una buena noticia para Brasil, pues esto significa que el sistema judicial se está volviendo más independiente y el Estado de derecho más maduro. Se trata de un desarrollo para la economía mucho mayor que cualquier hallazgo de petróleo o un fenomenal cultivo de soja”. Después de mencionar la comunicación del abogado brasileño Geanluca Lorenzon, no por coincidencia miembro del Instituto Mises de Brasil, un texto presentado en el Cato Institute, *think tank* conservador estadounidense, aún menos por coincidencia, el artículo concluye: “El Estado de derecho en Brasil todavía necesita trabajarse mucho. Sin embargo, si el Supremo Tribunal Federal se ciñe a los hechos en este caso, esto será señal de un nuevo modelo de independencia y profesionalismo judicial que no se debe ignorar”.

En el caso de la intervención imperial, la perplejidad paralizadora de la actualidad radica en la dificultad de las fuerzas democráticas, sobre todo de izquierda, para valorar como es debido el poder de esta intervención. Cuando lo hacen (pocas veces), tienden a caer en el polo opuesto y a atribuirle una importancia tan determinante que puede llevarlas al desánimo o incluso a desistir, una de las formas (la más económica) de las que el imperialismo dispone para realizar sus objetivos.

Resistencia y alternativa

Finalmente, la cuarta razón de la perplejidad potencialmente paralizadora del momento, la que se aproxima más a los objetivos de este libro, consiste en la dificultad de las fuerzas democráticas, sobre todo de izquierda, para organizar una estrategia de resistencia y de alternativa eficaz y que sea creíble, teniendo en mente el contexto dominado por los tres factores mencionados antes. En términos generales, en este contexto también debería hablar de las fuerzas democráticas de derecha; es decir, fuerzas que reconocen el campo democrático como el único legítimo para dirimir conflictos políticos.

La tragedia actual de Brasil es que hoy esas fuerzas no se pueden considerar colaboradoras fiables de una lucha por una democracia mínimamente creíble, una democracia que se sepa defender de los sucesivos golpes institucionales, que, debido a su frecuencia, configuran la idea de golpe continuado, por analogía con el concepto de crimen continuado. Y no pueden ser colaboradoras fiables debido a todas las connivencias, por acción y omisión, que revelaron con las fuerzas golpistas, tanto nacionales como internacionales. Ante esto, pienso que el destino de la democracia brasileña actualmente está en manos de las izquierdas brasileñas.

Los desafíos

Hay dos desafíos. El primero es algo problemático porque implica actuar como si la democracia estuviera funcionando con un mínimo de consistencia, sabiendo de antemano que no lo está haciendo. La democracia funciona según la lógica de procesos ciertos para la obtención de resultados inciertos. La constitución reglamentaria de partidos, los sistemas y las leyes electorales, el funcionamiento de instancias de control de los procesos de disputa política, la libertad de expresión, el acceso a la información y a la comunicación; todo esto, son procesos que deben funcionar con gran regularidad y certeza para que los resultados de la disputa electoral sean inciertos, en otras palabras, para que pueda ganar A o B, para que no se sepa de antemano el resultado, independientemente del comportamiento de los electores; en fin, para que no se pueda ganar siempre ni perder siempre. En los últimos tiempos hemos presenciado, no solo en Brasil sino también en otros países, no solo en el Sur global sino también en el Norte global, la creciente incertidumbre de los procesos democráticos, debido a la manipulación a la que se ven sometidos por parte de los monopolios mediáticos, mediante la financiación extremadamente desigual de las campañas electorales y la corrupción en general. Esta incertidumbre de los procesos se promueve para

conseguir resultados seguros, es decir, la victoria de los candidatos apoyados. Esta inversión de la relación entre procesos y resultados es fatal para el futuro de la democracia.

El problema más grave de Brasil en este momento es que esta inversión está ocurriendo en otras instituciones del régimen democrático, principalmente en el sistema judicial. El desarrollo concreto de la Operación Lava Jato y de las operaciones satélite está revelando que la certeza de los procesos, garantizada por el respeto de buena fe por las reglas procesales (criminales, civiles, administrativas, etcétera), está siendo comprometida por procedimientos discrecionales que no se corrigen ni en las instancias de apelación ni en las instancias disciplinarias. El objetivo de esta creciente incertidumbre de los procesos pretende, tal como en la democracia, conseguir la certeza de los resultados, en este caso, la condena de un acusado de alto perfil que el imperio y las élites conservadoras nacionales quieren borrar de la lucha política y borrar de la memoria democrática del país.

La gravedad de esta doble inversión entre la certeza de los procesos y la incertidumbre de los resultados es especialmente grave por la siguiente razón: en periodos de más intensa disputa política, la lucha institucional se transforma con frecuencia en una lucha entre instituciones. Por ejemplo, entre decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo o entre cualquiera de ellos y las decisiones del poder judicial. En esas situaciones, tanto las instancias moderadoras como las formas de acomodación tienden a darse para permitir la continuidad de los procesos democráticos. ¿Qué pasa cuando todas las instituciones del poder democrático se embarcan en la misma inversión entre procesos y resultados y coinciden en la búsqueda de los mismos resultados? ¿También habrá espacio para hablar de democracia, o esta se habrá transformado en una inercia grotesca en el formato y fatal en los resultados? Pienso que todas las fuerzas genuinamente democráticas deben meditar sobre estas preguntas y responder colectivamente.

Las fuerzas de izquierda tendrán que luchar por la democracia en este contexto adverso. En estas condiciones, puede ser difícil confiar

exclusivamente en la lucha institucional. Probablemente, esta tendrá que recurrir a la lucha extrainstitucional pacífica como estrategia complementaria. De hecho, la estrategia de la derecha golpista ha sido esta, solo que, en este caso, no hay un compromiso con la no violencia. Más aun, la violencia está en los manuales de la provocación contrarrevolucionaria. Para las fuerzas de izquierda, el recurso a la lucha extrainstitucional exige una articulación permanente con los movimientos sociales y todas las organizaciones populares. En este contexto, descuidar esta articulación permanente o mantenerla solo instrumentalmente y de manera oportunista para fines y momentos electorales será una estrategia suicida. Este desafío es suficientemente exigente, pero aún hay otro, no menos exigente: las fuerzas de izquierda por tradición han estado fragmentadas, divididas por múltiples diferencias, a veces tan profundas que implican transformar fuerzas de izquierda rivales en enemigos principales. Por razones que se explican en el pasado, pero que serán suicidas en un futuro caracterizado por el peligro de la supervivencia de la democracia, las izquierdas no han sabido distinguir entre diferencias reales y pragmáticas, susceptibles de acomodación y negociación, y diferencias ideológicas que, a veces, adoptan la forma de cismas dogmáticos muy cercanos a los que en el pasado dividieron las religiones y conllevaron luchas fratricidas.

Este libro es una modesta contribución para que se enfrente con éxito este último desafío, estando seguro de que, si no es así, la democracia acabará por zozobrar. En ese caso, las fuerzas de izquierda serán las primeras víctimas: todas por igual, independientemente de las divisiones que ahora las hacen tan diferentes.

La fractura del desgaste de gobernar

El golpe judicial-parlamentario de la destitución de la presidenta Rousseff y la operación Lava Jato, con el apoyo activo del imperialismo estadounidense, tuvieron como objetivo debilitar las fuerzas de

izquierda que habían gobernado el país en los últimos trece años; y lo lograron. Y lo lograron con tanto empeño que Brasil está retrocediendo a mucho antes de 2003, cuando comenzó el primer gobierno del presidente Lula da Silva. La caricatura del Brasil real en la que se ha transformado el Congreso con el actual sistema electoral y la cada vez más abusiva judicialización de la política han provocado que el sistema político brasileño haya entrado en tal desequilibrio que configura una situación de bifurcación: los próximos pasos pueden reestablecer la normalidad democrática o, por el contrario, profundizar de modo irreversible el vértigo fascitizante en el que se encuentra.³

Las principales fuerzas de la izquierda partidaria en Brasil son el PT (Partido de los Trabajadores), el PDT (Partido Democrático Laborista), el PSB (Partido Socialista Brasileño), el PCDOB (Partido Comunista de Brasil) y el PSOL (Partido Socialismo y Libertad). La agresividad con la que el Gobierno ilegítimo de Michel Temer ha desmantelado los logros de la inclusión social de los últimos trece años parece indicar que este vértigo conservador solo se puede parar con el rápido regreso de la izquierda al poder. Ni siquiera se puede confiar en que una fuerza de centroderecha, con alguna conciencia social, pueda invertir ese proceso y rescatar algunos de los logros de la inclusión social recientes. Dicha fuerza o no existe o no tiene el poder político suficiente como para imponer tal agenda. Entre muchas otras cuestiones que la coyuntura brasileña suscita en este momento, me refiero a la que es relevante para el análisis que me propongo hacer en este texto. ¿Puede la izquierda volver al poder en Brasil a corto plazo y, si es posible, en qué condiciones es deseable que lo haga? ¿Para que la izquierda regrese al poder, es necesaria la unidad o la articulación entre varios partidos de izquierda?

Una cuestión previa a la respuesta a estas cuestiones es la de saber cómo evolucionará el entendimiento entre las diferentes fuerzas

³ Se puede ver al respecto mi artículo “Brasil: la democracia al borde del caos y los peligros del desorden jurídico”, *Público.es*, 24 de marzo de 2016. Disponible en <http://blogs.publico.es/espejos-extranos/2016/03/24/brasil-la-democracia-al-borde-del-caos-y-los-peligros-del-desorden-juridico/> [consultado el 10 de agosto de 2018].

de derecha. En este campo, lo que distingue a Brasil de otros países analizados en este texto es la división entre las diferentes fuerzas de derecha. Es posible que su instinto de poder las lleve a un entendimiento a corto plazo. En cualquier caso, lo que suceda con las fuerzas de derecha seguro que tendrá un impacto en las fuerzas de izquierda. Para responder a las cuestiones de la unidad o la articulación entre las diferentes fuerzas de izquierda, el primer factor a tener en cuenta es que la izquierda, a través del PT, estuvo en el poder durante los últimos trece años, algo que no pasó en ninguno de los otros países. No pongo en duda aquí que el PT sea un partido de izquierda ni que muchas de las políticas que ha llevado a cabo sean políticas de izquierda. Como sabemos, fue un Gobierno formado gracias a la alianza del PT con partidos de la derecha, sobre todo con el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), al que pertenece el actual presidente, Michel Temer.

Para el tema tratado aquí son particularmente relevantes los siguientes factores. El primero es que el gobierno del PT fue cuestionado por otros partidos de izquierda, precisamente por ser un gobierno de alianzas con la derecha. El segundo es que en Brasil es particularmente importante considerar la fuerza de movimientos populares, no formalmente afiliados a ningún partido de izquierda. Tras la crisis política de 2015, se formaron dos grandes frentes de movimientos populares, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, con sensibilidades de izquierda distintas; el primero coincide más con el PT, mientras que el segundo está más abierto a la idea de alianzas entre diferentes partidos de izquierda. El tercer factor es que las fuerzas de derecha (el Gobierno ilegítimo, los grandes medios de comunicación, la fracción dominante del poder judicial y el imperialismo estadounidense) están resueltos a impedir por todos los medios (ya hemos visto que tales medios no tienen por qué ser democráticos) que la izquierda vuelva al poder, por lo menos antes de que el proceso de contrarreforma se haya consolidado. Por ejemplo, la reforma

de la previsión social⁴ parece un objetivo difícil de alcanzar, pero esto puede ser una de las ilusiones en las que los periodos preelectorales son fértiles.

Para la derecha, el mayor obstáculo al que se enfrenta ese designio es la candidatura del expresidente Lula, puesto que está convencida de que no hay otros candidatos de izquierda que puedan protagonizar una candidatura ganadora. El cuarto factor es el hecho de que las políticas que los gobiernos del PT llevaron a cabo entre 2003 y 2016 permitieron crear la ilusión de que eran generadoras de una gran conciliación nacional en una sociedad atravesada por profundas divisiones de clase, raza y sexo. Esto fue posible porque el contexto internacional permitió un crecimiento económico que hizo que 50 millones de brasileños se volvieran menos pobres sin que los ricos dejaran de enriquecerse. De hecho, en esos años, la desigualdad social se agravó. Cuando el contexto internacional cambió (la trayectoria descendente del ciclo de las *commodities*), este modelo entró en crisis. La manera de gestionarse mostró trágicamente que no había habido conciliación. Las clases dominantes y las fuerzas políticas a su servicio solo habían aumentado sus expectativas de enriquecimiento durante el periodo y tuvieron suficiente poder como para no verlas frustradas en el nuevo contexto. En un entorno más contrario a sus intereses pasaron al enfrentamiento más radical, la situación presente. Esto significa que las políticas que fueron la marca del gobierno del PT, sobre todo en los primeros diez años, han dejado de tener viabilidad alguna en el nuevo contexto. De hecho, los últimos años del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ya fueron años pos-Lula. Con o sin el presidente Lula, si la izquierda vuelve al poder, el gobierno será característicamente un gobierno pos-Lula.

A mi entender, estos son los principales factores que nos ayudan a contextualizar el eventual deseo de articulación entre fuerzas de izquierda (entre partidos y entre movimientos) y las dificultades a

⁴ En Brasil, la previsión social se refiere a la parte del sistema de seguridad social responsable de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. (N. de los T.)

las que esta última se puede enfrentar. En este momento, se pueden identificar dos posiciones: la primera, defendida por los líderes del PT, preconiza la unidad de la izquierda bajo la hegemonía del PT. La segunda, defendida por otras fuerzas de izquierda y por sectores del PT situados más a la izquierda, aboga por el hecho de que la unidad se debe basar en un acuerdo entre diferentes fuerzas de izquierda sin la hegemonía de ninguna de ellas. Una variante de esta posición defiende que las diferentes fuerzas de izquierda deben, en un primer momento, expresar libremente su pluralidad y diversidad (medir fuerzas) y pactar la unidad o la articulación en un segundo momento (segunda vuelta de las elecciones presidenciales o alianzas poselectorales en el nuevo Congreso).

La primera posición cuenta con un candidato de lujo, Lula da Silva, que no para de subir en las encuestas. Sin embargo, mientras escribo estas líneas (enero de 2018) su futuro político es incierto. Por otro lado, esta posición puede, en el mejor de los casos, garantizar que una fuerza de izquierda llegue al poder; pero no puede garantizar que, una vez en el poder, le dé seguimiento a una política de izquierda, es decir, a una política que, incluso siendo moderada, no sea rehén de alianzas con la derecha que hagan que pierda su carácter. De hecho, dada la extraña naturaleza del sistema de partidos brasileño, puede darse la posibilidad de que una fracción de centro-derecha del PMDB se transfiera al PT y se presente con el candidato Lula a las elecciones presidenciales, conquistando así, por ejemplo, la vicepresidencia. En este caso, una lista electoral del PT aparentemente homogénea contendría un componente significativo de centro-derecha.

La segunda posición ha sido defendida dentro y fuera del PT. Dentro del PT, el portavoz más importante de esta posición es Tarso Genro, que fue uno de los ministros más importantes del Gobierno de Lula da Silva. Fue gobernador del estado de Rio Grande do Sul y alcalde de Porto Alegre en la época dorada de la articulación entre democracia representativa y democracia participativa (el presupuesto participativo). En declaraciones a la prensa del 14 de enero afirmó:

“Defiendo que los demás partidos de izquierda presenten a sus candidatos y que Guilherme Boulos y Manuela D’Ávila [candidata del PCDOB] sean nuevos cuadros políticos, importantes para la reconfiguración de un nuevo frente político en el futuro, capaz de hegemonizar un gobierno de centro-izquierda, de reformismo fuerte, como está ocurriendo o tendiendo a ocurrir en algunos países. No se sabe hasta dónde puede ir, por ejemplo, la experiencia portuguesa, e incluso cuánto puede durar, pero si no nos atrevemos a componer una izquierda plural, creativa y democrática, con un claro programa de transición de una economía liberal rentista a una economía con elevados índices de crecimiento, nuevas formas de inclusión social y a la vez productiva, el futuro de la izquierda será cada vez más incierto y defensivo”. Curiosamente, si no me equivoco, esta es la primera vez que un líder político importante de Brasil se refiere a la articulación entre las fuerzas de izquierda en Portugal como un camino a tener en cuenta.

Esta segunda posición es, sin lugar a duda, la más prometedora. Lo es tanto que permite dar visibilidad al único líder popular y de izquierda, sin contar con Lula da Silva, que Brasil ha conocido en los últimos cuarenta años. Se trata de Guilherme Boulos, joven líder del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo) y del Frente Pueblo Sin Miedo.

La segunda posición, al contrario que la primera, excluye cualquier tipo de alianza con las fuerzas de derecha debido al desgaste del gobierno del PT en los últimos años y al golpe institucional que acabó por bloquear el proceso democrático. Ante esto, parece que las izquierdas brasileñas están condenadas a articularse si quieren llegar al poder para realizar un programa de izquierda. Para que esto suceda, puede ser necesario que las izquierdas estén fuera del poder más tiempo de lo que uno se puede imaginar.

Actualización de agosto de 2018

Seis meses después del análisis realizado, las izquierdas brasileñas están dominadas por las urgencias típicas del inicio de un ciclo electoral, que se prolongará entre finales de agosto y finales de octubre. Estas urgencias ocurren en un ambiente caótico porque se combinan con un nivel de imprevisibilidad sin precedentes en el periodo democrático más reciente, iniciado con la Constitución de 1988. Esta imprevisibilidad deriva de varios factores, entre los cuales distingo tres: la prisión del expresidente Lula da Silva y la manera grotescamente irregular en que fue juzgado y encarcelado; el endurecimiento general del régimen político y el aumento de la violencia política; dificultades de construcción de hegemonía tanto a la derecha como a la izquierda. Analizaré brevemente cada uno de ellos.

Lula: ¿el preso político más famoso del mundo?

La manera en la que Lula da Silva fue juzgado y encarcelado tiene implicaciones para el régimen jurídico-político de Brasil que trascienden en mucho el caso concreto. Por eso merece un análisis más detallado.

Los casos de lo que designamos como justicia dramática, a pesar de representar una ínfima parte del trabajo de los tribunales, son, por su hipermediatización, una buena ventana para analizar la legitimidad social, la autonomía y la independencia de los tribunales, así como la calidad y el carácter democrático de la justicia administrada. El proceso a Lula da Silva pone descaradamente de manifiesto que algo está podrido en el sistema judicial brasileño, evidenciando procedimientos y prácticas incompatibles con principios y garantías fundamentales de un Estado de derecho democrático, los cuales deben denunciarse y combatirse democráticamente. Destaco los siguientes.

Excepción que moldea los procesos judiciales-penales

El principio de independencia de los tribunales constituye uno de los principios básicos del constitucionalismo moderno, reforzado en varios instrumentos de derecho internacional, sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como garantía del derecho de los ciudadanos a una justicia libre de presiones e interferencias, ya sea de la jerarquía del propio Poder Judicial, del poder político o de poderes fácticos, nacionales o internacionales. El refuerzo de las condiciones de ejecución de esos principios, particularmente a través de modelos de gobierno del Poder Judicial con amplia autonomía administrativa y financiera, está en el centro de muchas agendas de reforma sobre el Poder Judicial.

Sin embargo, en una sociedad democrática, ese refuerzo no puede deslizarse hacia un poder selectivo y totalitario, sin fiscalización y sin que exista un sistema de contrapesos. El proceso a Lula evidencia un poder judicial en el que tal deslizamiento está en curso. He aquí dos ejemplos: el primero es la clara disyunción entre el activismo judicial contra Lula da Silva –de forma rápida, eficaz e implacable en la acción (Sérgio Moro decretó la detención de Lula escasos minutos después de notificársele la decisión de desestimar el *habeas corpus*, que aún era posible recurrir, y desde la denuncia a la ejecución de la pena transcurrieron menos de 2 años)– y la lentitud de la acción judicial contra Michel Temer y otros políticos de la derecha brasileña. Y no puede invocarse el argumento de que esa inacción fue bloqueada por maniobras del poder político, en particular por el Congreso, porque no se conoce igual activismo del Poder Judicial en la denuncia de esas maniobras y en procurar superarlas.

El segundo es la restricción moldeada por la idea de excepción de los derechos y las libertades constitucionalmente consagrados. En un Estado democrático de derecho, los tribunales tienen que ser espacios de profundización de derechos. Lo que sucede en Brasil es precisamente lo contrario. La Constitución brasileña determina que

nadie se considerará culpable si no es en virtud de una sentencia condenatoria firme, es decir, hasta que se agoten todas las posibilidades de recurso nadie puede ser declarado culpable y, en consecuencia, no puede cumplir pena. La Constitución portuguesa tiene una norma similar. Es inimaginable que el Tribunal Constitucional portugués determinara, de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución, que una persona fuera encarcelada con un proceso de apelación en el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, es eso lo que la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal brasileño decidió: restringió derechos y libertades constitucionales al determinar que, no teniendo aún sentencia para el caso, Lula da Silva podía comenzar a cumplir pena. ¿Cuál es la legitimidad social y política del Poder Judicial para restringir derechos y libertades fundamentales constitucionalmente consagrados? ¿Cómo puede un ciudadano o una sociedad quedar a merced de un poder que dice tener razones legales que la propia ley desconoce? ¿Cuál es la legitimidad de un juez que evoca la ineficiencia y la dilación procesal –como lo hizo uno de los jueces del Tribunal–, para arrestar a una persona que según la Constitución no puede ser considerada culpable?

¿Qué confianza puede merecer un sistema judicial que cede a presiones militares y en el que una jueza reconoce que existe una contradicción entre los principios constitucionales que personalmente defiende y la posición de una parte del colectivo de jueces, pero decide a favor de esta última, dando a entender que lo hace contra su convicción?

Falta de garantías del proceso criminal

El debate mediático en torno a la prisión de Lula destaca el hecho de que el proceso fue apreciado y juzgado por un tribunal de segunda instancia, que no solamente confirmó su condena, sino que además agravó la pena. En condiciones normales, este recrudecimiento obligaría a una justificación adicional de culpabilidad. Desgraciadamente, la hegemonía ideológica de derecha que domina el espacio

mediático no permite un debate jurídicamente serio al respecto. Si fuese posible, se comprendería cuán importante es cuestionar las pruebas materiales y las pruebas directas de los hechos en los que se basó la acusación y la condena. Por lo que se sabe, esas pruebas no existen en el proceso o son muy sutiles. La acusación y la condena a doce años de prisión de Lula da Silva se fundan, sobre todo, en informaciones obtenidas mediante acuerdos de delación premiada (determinado investigado denuncia y proporciona información sobre otras personas a cambio de un “beneficio” que puede ir desde la total inmunidad penal hasta la reducción sustancial de la pena que se le aplicaría) y en presunciones. Además, en el sistema judicial brasileño las condiciones de recolección y validación de la prueba difícilmente pueden examinarse, dado que quien preside la investigación y valida las pruebas es quien juzga en primera instancia; al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Portugal, donde el juez que interviene en la fase de investigación no puede juzgar el caso, permitiendo así un verdadero escrutinio de la prueba en la que se basa la acusación. El dominio del proceso por parte de un solo juez, en la fase de investigación y de juzgamiento, le confiere un poder susceptible de manipulación y de instrumentalización política difícilmente escudriñable en el propio proceso. Se comprende con facilidad la magnitud del peligro para la sociedad y para el régimen político, en caso de que este poder no se autocontrole.

Instrumentalización de la lucha contra la corrupción

El debate sobre el caso Lula protagonizado por varios actores del órgano judicial, que utilizan hábilmente las redes sociales y que los medios de comunicación amplían, ha polarizado instrumentalmente el combate contra la corrupción, colocando de un lado a los actores judiciales del proceso Lava Jato, con Sérgio Moro a la cabeza, atribuyéndoles el combate intransigente contra la corrupción, y del otro a todos aquellos que cuestionan los métodos de investigación, los atropellos a los derechos y las garantías constitucionales, las deficiencias

de las pruebas, las actitudes totalitarias de los tribunales, la selectividad y la politización de la justicia. Es obvio que esa polarización es instrumental y busca ocultar precisamente varios atropellos del órgano judicial, tanto cuando actúa como cuando se rehúsa a hacerlo.

El guión mediático de la demonización del PT es tan obsesivo como grotesco. Consiste en la siguiente ecuación: corrupción=Lula=PT. Cuando se sabe que la corrupción es endémica, salpica a todo el Congreso e incluso supuestamente al actual presidente de la República. El *Estado de São Paulo* del 7 de abril es paradigmático al respecto. Concluye el guión con la siguiente diatriba: “Al igual que lo que sucedió con Al Capone, el célebre gángster americano que fue encarcelado no por sus innumerables actividades criminales, sino por evasión de impuestos, el caso del triplex,⁵ que provocó la orden de prisión contra Lula, está muy lejos de resumir el papel del expresidente en el *petrolão*”.⁶ Esta narrativa omite, como siempre, lo más decisivo: en el caso de Al Capone, los tribunales probaron de hecho la evasión de impuestos, mientras que en el caso de Lula da Silva los tribunales no probaron la adquisición del departamento. Por increíble que parezca, de la lectura de las sentencias se concluye que la supuesta prueba es mera presunción y convicción de los magistrados. La campaña de antipetismo de estos últimos meses recuerda las campañas de antisemitismo de los tiempos del nazismo. En ambos casos, la prueba para condenar consiste en la evidente no necesidad de probar.

Las irregularidades obvias de este proceso han tenido algunos efectos sorprendentes. La obsesión punitiva fue en este caso tan excesiva que el sistema judicial degradó su imagen y su legitimidad, tanto

⁵ Según el caso conocido como “triplex de Guarujá”, Lula supuestamente aceptó que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de São Paulo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. No hay ninguna evidencia al respecto, pues Lula nunca fue dueño ni residió en el departamento. (N. de los T.)

⁶ *Petrolão* es el nombre con el que se conoce un esquema de corrupción y desvío de fondos que ocurrió en Petrobras, la mayor empresa estatal brasileña. (N. de los T.)

nacional como internacionalmente, a un nivel y con consecuencias que, por ahora, son difíciles de evaluar. A su vez, la imagen política y humana de Lula salió de esta *hybris* político-judicial fuertemente fortalecida y mejorada. Víctima de una flagrante injusticia y, para muchos, un preso político, Lula da Silva vio aumentar exponencialmente su crédito político y su popularidad entre las clases populares. Paulatinamente, los errores o desaciertos de los gobiernos del PT por él hegemonizados en el periodo 2003-2016 fueron minimizados u olvidados –a lo que también contribuyeron la agudización de la crisis económica y la política de austeridad que entretanto recayó sobre las clases populares– y Lula da Silva se fue consolidando como el precandidato con diferencia mejor posicionado para ganar las próximas elecciones presidenciales. Ello a pesar de estar preso, no poder conceder entrevistas ni grabar videos y ser muy probablemente inelegible en los términos de la llamada ley Ficha Limpia, según la cual una persona condenada en segunda instancia no puede postularse a cargos políticos.

Si el objetivo político-judicial era destruir la imagen del expresidente, todo lleva a creer que la estrategia seguida por la élite conservadora falló y que incluso fue contraproducente. Sin embargo, ha alcanzado con éxito su objetivo principal: retirar a Lula da Silva de la próxima contienda electoral y hacerlo sin una alteración cualitativa del régimen político y sin niveles incontrolables de perturbación social. Aunque este objetivo podría haberse alcanzado tan solo parcialmente. En agosto de 2018 queda la duda sobre la influencia que el expresidente puede tener en la elección del próximo presidente de la República y en la conducción del país en el próximo ciclo político.

El endurecimiento general del régimen político

En los últimos meses el régimen político se ha endurecido considerablemente. Ha aumentado la violencia política, de la que la manifestación más visible fue el asesinato de la diputada municipal Marielle Franco, el 14 de marzo de este año [2018]. Además, han ocurrido otras

ejecuciones de líderes políticos locales, ha aumentado la violencia contra líderes sociales, sobre todo en el medio rural, se ha acentuado un verdadero genocidio de jóvenes negros y pobres de las periferias urbanas, se ha decretado la intervención militar en el Estado de Rio de Janeiro con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, se ha perseguido judicialmente a profesores e investigadores con acusaciones sorprendentes contra los resultados de su investigación científica (por ejemplo, en el ámbito de los efectos dañinos para la salud pública derivados del uso irregular de agro-tóxicos en la agricultura industrial).

El golpe institucional que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, a la prisión a Lula da Silva y a la gestión global de la operación Lava Jato ha consolidado un régimen de excepción que, de forma similar a lo sucedido en otros países, parece ocurrir en una supuesta normalidad democrática. Sin cambiar cualitativamente, el régimen político ha acentuado sus rasgos reaccionarios y autoritarios, hasta el punto de que es plausible considerar a Lula da Silva como un preso político a pesar de que esto ocurra en un régimen formalmente democrático. He defendido que la democracia brasileña, ya de por sí una democracia de baja intensidad, se ha transformado en una democracia de bajísima intensidad. Esto significa que el carácter socialmente excluyente y políticamente restrictivo de las libertades democráticas se ha acentuado en los últimos tiempos. Sin convertirse en un régimen dictatorial de tipo fascista, ha abierto espacio a fuerzas políticas neofascistas, fuerzas de extrema derecha que usan los instrumentos políticos que restan de la democracia para hacer apología de prácticas típicas de la dictadura (apología de la tortura, justificación de la violencia extrajudicial contra poblaciones pobres racializadas, retórica de violenta intolerancia contra líderes políticos de izquierda, etcétera). La cara más visible de esta pulsión neofascista es Jair Bolsonaro, militar en reserva, diputado federal. Después de Lula da Silva es el precandidato a presidente de la República mejor posicionado en las encuestas. Se trata de un populista de extrema derecha tan mal preparado para dirigir el

país y tan improbable vencedor de las elecciones como lo era Donald Trump pocos meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

Otros rasgos del endurecimiento del régimen político se refieren al modo en que se ha acentuado el protagonismo del sistema judicial en detrimento del Legislativo y del Ejecutivo y a la consiguiente judicialización de la política. El Poder Judicial es hoy en Brasil el principal factor de la inseguridad jurídica que afecta a todos y sobre todo a las grandes mayorías que más necesitan un sistema judicial accesible y comprometido con los objetivos constitucionales de defensa de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Este endurecimiento no se puede explicar sin considerar el papel de la crisis económica, una crisis de rentabilidad del capital que impuso el fin de la política de conciliación de clases que los gobiernos del PT, y muy particularmente Lula da Silva, habían defendido y practicado (el llamado “lulismo” o “lulapetismo”).

Las élites dominantes, con el apoyo activo del imperialismo estadounidense y del capital financiero global, estimularon (cuando no provocaron) la crisis financiera y política del Estado para imponer una versión más agresiva del capitalismo, socialmente más excluyente y más dependiente de la creación de poblaciones desechables, en la práctica, subhumanas, a través del recrudecimiento de la dominación colonialista (racismo, exterminio de jóvenes negros, colonialismo interno, violencia contra quienes luchan por la tierra y por el territorio, ya sean campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, poblaciones ribereñas y pesqueras) y de la dominación patriarcal (aumento de la violencia contra las mujeres, liquidación de las conquistas de las luchas por la igualdad y por el reconocimiento de la diferencia en los años recientes).

Esta fue la condición impuesta por las élites nacional e internacionalmente dominantes para no recurrir a un régimen explícitamente dictatorial. Cabe señalar que el contexto en el que se produjeron los fascismos en Europa era muy distinto. En ese momento se trataba de contener un movimiento obrero muy militante y muy organizado

o de neutralizar el “peligro” comunista. Las amenazas contra la dominación capitalista se percibían entonces como portadoras de una dimensión existencial que hoy no tienen. Por el contrario, la dominación capitalista, colonial y patriarcal parece hoy temer menos que nunca posibles enemigos. Consiguió, al menos aparentemente, una hegemonía a través de la cual el lema de las izquierdas de la década de 1920 –“socialismo o barbarie”– fue sustituido por el lema “capitalismo o barbarie”, al mismo tiempo que las barbaridades cometidas por el capitalismo se vuelven cada vez más evidentes y peligrosas, y atentan contra el más elemental derecho humano, el derecho a la vida, por no hablar siquiera del derecho a una vida digna.

Dificultades de construcción de hegemonía tanto a la derecha como a la izquierda

Históricamente, las fuerzas políticas de derecha siempre mostraron más unidad en los momentos decisivos que las de izquierda. A menudo, ni siquiera tuvieron que preocuparse por detallar las condiciones de su unidad porque siempre contaron con un apoyo sorprendente para la conquista o el mantenimiento del poder político: la división entre las fuerzas de izquierda. Esta asimetría no deriva de una deformación intrínseca que impida a las izquierdas realizar diagnósticos correctos en los “momentos decisivos” y tener en cuenta las perspectivas a mediano plazo en las urgencias de autopreservación a corto plazo. Deriva más bien de otra asimetría constitutiva de las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales en las que vivimos, puesto que la opción (consensual) por el régimen político democrático dejó de poder contemplar la opción por un régimen económico alternativo al capitalismo: el socialismo. A partir de entonces, la derecha, cuando gobierna, detenta el poder político, económico y social, mientras que la izquierda, cuando gobierna, detenta el poder político, pero no el poder económico ni el poder social. Esta asimetría permite a la derecha tener, en general, más certezas en los “momentos decisivos”; por ejemplo, la de mantener intacto el poder

económico y social incluso cuando pierde el poder político. Por el contrario, las fuerzas de izquierda tienden a sobrestimar su poder cuando están en el gobierno (como si el poder político, por sí mismo, conllevara el poder económico y social) y a subestimarlos cuando están en la oposición (la pérdida del poder político se ve como una pérdida total e invita a refugiarse en estrategias aislacionistas de supervivencia partidaria). Este desequilibrio es factor de confusión y miopía oportunista en los momentos en los que la clarividencia de objetivos estratégicos jerarquizados sería más importante.

En Brasil, esta asimetría es hoy más visible que nunca, aunque se deben tener presentes los antecedentes que llevaron al suicidio de Getúlio Vargas en 1954 y al golpe militar diez años después. En la crisis que se instauró tras las elecciones de 2014, la derecha estuvo siempre más unida que la izquierda. En el momento en el que, debido a la crisis internacional, tuvo claro que su poder económico estaba en peligro decidió que, para salvaguardarlo, era preciso reconquistar en pleno el poder político, es decir, poner fin a la política de alianzas con los gobiernos del Partido de los Trabajadores que había mantenido desde 2003. De ahí el golpe institucional que llevó al *impeachment* de la presidenta Dilma Rousseff, a la prisión injusta de Lula da Silva y al desmantelamiento rápido y agresivo de las políticas más emblemáticas del periodo anterior. La facilidad con la que la derecha quitó de en medio al petismo muestra que el periodo anterior se asentó en un equívoco. Lo que para el PT era una política de conciliación de clases más o menos duradera, para la derecha era una mera política coyuntural de alianzas. El odio clasista y racista que se propagó de inmediato como gasolina ardiendo es prueba de ello.

Enseguida se hizo evidente que la unidad de las fuerzas de derecha era sobre todo una unidad negativa, es decir, una unidad para eliminar la presencia del petismo de la escena política. La unidad para construir una alternativa positiva (la configuración específica de las relaciones entre el poder político, el poder económico y el poder social) tendría que tener otro ritmo, el ritmo del ciclo electoral de 2018.

Tomadas por sorpresa (lo que, en sí, ya es significativo), las fuerzas de izquierda tardaron cierto tiempo en reaccionar, sobre todo porque ya venían divididas en lo que respecta a la evaluación de las políticas y las prácticas de gobierno de los gobiernos petistas. Sin embargo, los “excesos” de la contrarreforma facilitaron la emergencia de una unidad entre las fuerzas de izquierda, que fue de igual forma una unidad negativa: el consenso de repudio al ritual sacrificial del que fue víctima Lula da Silva y, en consecuencia, el consenso en la campaña “Lula Libre” y en la reivindicación de su derecho a ser candidato en el ciclo electoral de 2018.

En agosto de 2018, el ciclo electoral está entrando en su fase decisiva y las asimetrías anteriormente anotadas están, de nuevo, bien presentes. En lo que se refiere a la derecha, muchos analistas subrayan la falta de una unidad positiva patente en la ausencia de un candidato obvio para el liderazgo político del próximo periodo político. En mi opinión este análisis está equivocado. La aparente falta de unidad es una trampa bien urdida para garantizar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se juegue entre dos candidatos de derecha. En el momento en que esto ocurra, la derecha dejará bien claras sus opciones. A menos que las condiciones económicas internacionales se deterioren acentuadamente, optará por una política conservadora sistémica en detrimento de una política de ultraderecha con una pulsión antisistémica. Obviamente, no está garantizado que esta estrategia resulte plenamente. Las dinámicas de la política del resentimiento en vigor pueden liberar los demonios del populismo de extrema derecha. En cualquier caso, esta solución garantizará lo principal, la congruencia mínima entre el poder político democrático de bajísima intensidad y el poder económico y social de carácter particularmente excluyente y represivo.

En lo que se refiere a las fuerzas de izquierda, a medida que se intensifica la lógica electoral, la falta de unidad positiva (para garantizar una alternativa política mínimamente de izquierda) se vuelve cada vez más patente. La lógica taticista de supervivencia partidaria a corto plazo parece dominar y la paradoja más chocante para

cualquier observador atento parece escapar a los líderes de los partidos: la paradoja de pregonar la unidad de las izquierdas en la segunda vuelta y, al mismo tiempo, hacer cualquier cosa para que no haya candidatos de izquierda en la segunda vuelta. En este ámbito, la responsabilidad del PT es particularmente fuerte por ser el principal partido de izquierda y tener como precandidato al político más aventajado en las encuestas, aunque esta precandidatura no pueda convertirse en candidatura. Las asimetrías entre izquierda y derecha que he señalado arriba son ahora particularmente dramáticas.

Si es cierto lo que afirmé arriba –que lo que el PT vio como conciliación de clases era, para la derecha, una mera alianza política coyuntural–, resulta particularmente incomprensible que se insista en políticas de alianza con las fuerzas de derecha que apoyaron el golpe institucional, cuando es evidente que ahora no hay ninguna condición para la conciliación de clases, ni siquiera como ilusión creíble. Es decir, las condiciones que le permitieron al PT ser la izquierda hegemónica en el periodo anterior dejaron de existir. Por tanto, tendría sentido que la hegemonía se reconstruyese sin alianzas con la derecha y, por el contrario, con alianzas construidas horizontalmente con otras fuerzas de izquierda y centro-izquierda. En cambio, impera el tacticismo de la supervivencia partidaria en el próximo ciclo político, aunque ello implique desperdiciar la oportunidad de elegir un presidente de la República que detenga el vértigo de la exclusión y la represión que se abate sobre las mayorías empobrecidas y racializadas. Sin embargo, esta posición es más compleja que el puro tacticismo. Constituye el núcleo de la identidad política que Lula da Silva forjó para el PT en las últimas décadas. El hecho de estar actualmente preso hace que Lula da Silva sea ahora más que nunca el garante de esa identidad. El poslulismo y el lulismo no pueden coexistir. De algún modo, el PT es rehén de Lula y Lula es rehén... de Lula. No obstante, cabe señalar que Lula da Silva es un líder con genio político. A través de una celda está influenciando de manera decisiva la conducción de la política brasileña. No es fácil encontrar en la historia contemporánea otro líder carismático que logre ampliar su aceptación

popular (subir de manera tan espectacular en las encuestas) a pesar de estar preso desde hace varios meses y tras sufrir una campaña de demonización mediática y judicial sin precedentes. Ciertamente eso dice mucho sobre Lula da Silva, pero también revela algunas complejidades insondables de la estructura social brasileña y del modo en que el público recibe los mensajes mediáticos que se difunden.

La apuesta de Lula da Silva es la más arriesgada de todas las que ha hecho hasta ahora. Consiste en permanecer en la disputa electoral el mayor tiempo posible y confiar en que, en caso de ser declarado inelegible, habrá una transferencia masiva de votos al candidato que él indique, ciertamente el candidato a vicepresidente en su lista electoral, Fernando Haddad. Probablemente solo así se garantizará la presencia de un candidato de izquierda en la segunda vuelta. La hipótesis más segura para que esto ocurriera habría sido un entendimiento entre Lula da Silva y Ciro Gomes (PDT), una hipótesis que se descartó (¿definitivamente?). Si la apuesta de Lula tiene éxito, la derecha tendrá que reevaluar la eficacia y los costos políticos del golpe institucional, ya que sin este tal vez asumiera el poder en estas elecciones de manera más segura y limpia. En caso de decidir no adulterar aún más el juego democrático, seguramente deberá invertir todo en agravar los costos políticos de la reversión de las leyes (la contrarreforma) que logró aprobar durante el interregno del golpe institucional.

Si la apuesta de Lula falla y un candidato de derecha resulta elegido, las clases populares van a ver aún más agravadas sus condiciones de vida y con ello el genio político de Lula no podrá dejar de cuestionarse. Se seguirán intensas disputas en el seno del PT y probablemente algunas escisiones. Se abrirá entonces el periodo pos-Lula.

A la luz de los acontecimientos, todo indica que, sobre la base del PT, no será posible, por ahora, pensar en una renovación de las fuerzas de izquierda a partir de una nueva política de construcción de hegemonía. Fuera de la izquierda hegemonizada por el PT, el PSOL está construyendo una alternativa junto con el movimiento Vamos, procedente del Frente Pueblo Sin Miedo, el MTST (Movimiento de

los Trabajadores Sin Techo), la APIB (Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil) y el Partido Comunista Brasileño (PCDOB). Los candidatos son Guilherme Boulos (presidente) y Sonia Guajajara (vicepresidenta). Esta candidatura apuesta por la renovación de las izquierdas con base en nuevas lógicas de alianza y articulación programática, con la excepción de alianzas con las fuerzas de derecha. Parece, pues, estar sacando las conclusiones correctas de todo lo sucedido en los últimos años. Sin embargo, debe ser cada vez más consciente de que tal renovación solo es pensable tras las elecciones de 2018 y su construcción es totalmente contingente, en la medida en que dependerá de los resultados electorales, por ahora imprevisibles, y de las consecuencias sociales que de ellos se deriven. En el plano de la contingencia, ciertamente debe estar incluida la posibilidad de la creación de un nuevo partido, que sea también un partido de nuevo tipo, un partido-movimiento, construido internamente por mecanismos de democracia participativa para ser verdaderamente nuevo e innovador en el ámbito de la democracia representativa. En la base de ese partido estarán eventualmente movimientos y organizaciones sociales, así como los sectores más movimentistas del PSOL y los sectores de izquierda del PT y de otros partidos. Para que esta apuesta tenga sentido es necesario que el trabajo político de base de las fuerzas sociales y políticas de izquierda siga siendo posible en el próximo ciclo político. La ausencia de las amenazas al capitalismo que existían hace cien años parece indicar que se mantendrá el régimen democrático de bajísima intensidad. Sin embargo, se debe considerar una incógnita perturbadora. Al fin y al cabo, el fascismo y el neofascismo tienen razones que la razón desconoce.

Actualización de enero de 2019

El 7 de octubre se celebró la primera vuelta de las elecciones generales. Como ninguno de los candidatos a la presidencia conquistó el 50 % de los votos, fue necesaria una segunda vuelta que se celebró el

28 de octubre. Venció el candidato de la ultraderecha neofascista, Jair Bolsonaro, con el 55 % de los votos, con una especial concentración de la votación en el sur y sureste del país, las regiones más desarrolladas, mientras que el candidato de la izquierda, Fernando Haddad, con el 45 % de los votos, obtuvo mayor apoyo electoral en el norte y el noreste, las regiones menos desarrolladas del país. A la vista de estos resultados, hay que agregar algunas reflexiones en relación con lo que se dijo anteriormente.

La derrota mitigada de la derecha tradicional

Fueron derrotadas todas las fuerzas políticas de derecha y de izquierda que habían apoyado el régimen democrático posterior a 1988. En el caso de la derecha tradicional (MDB, PSDB, DEM), ni Jair Bolsonaro ni su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, eran sus candidatos. Ante el fracaso de sus posibles candidatos, esa derecha se resignó a apoyar a Bolsonaro con la esperanza de obtener de su gobierno la radicalización del modelo de desarrollo neoliberal que los sucesivos gobiernos del PT habían proseguido de forma mitigada, o sea, con ciertas garantías de protección social y de salvaguardia de intereses nacionales. La radicalización consistirá en varias medidas, algunas de ellas ya en curso, lo que representa una ruptura con el pasado reciente, al igual que con el pacto fundador de la transición democrática de 1988: liberalización total de la economía y apertura irrestricta de los recursos naturales al capital extranjero; privatización de la seguridad social y de todas las prestaciones públicas potencialmente rentables; erosión de los derechos de los trabajadores y eliminación de la justicia laboral que les servía de apoyo; expansión sin límites de la frontera agrícola, con la implicación de ignorar las demarcaciones de tierras indígenas, abandonar cualquier vestigio de reforma agraria y reprimir toda la resistencia de los campesinos en su lucha por la tierra.

La derecha tradicional sabe que Bolsonaro representa un costo y un riesgo. Por un lado, su radicalismo ideológico de extrema derecha

obliga a silenciar el ala más moderada de la derecha. Por otro, la polarización social que las políticas de Bolsonaro eventualmente causarán puede acabar por rehabilitar a la izquierda.

La derrota de la izquierda

La victoria de Bolsonaro representa una derrota histórica de la izquierda y muy especialmente de la estrategia del expresidente Lula da Silva. Esta estrategia consistía en seguir hasta el límite las indicaciones de los sondeos que daban a Lula da Silva la preferencia del electorado y, en el último momento, confirmada su inelegibilidad, presentar un candidato indicado por él, confiando en una transferencia masiva de votos. El candidato elegido fue Fernando Haddad. Por la razón arriba indicada, entró demasiado tarde en la campaña electoral y, a pesar de haber hecho un esfuerzo notable (esfuerzo en el que no fue unánimemente acompañado por la dirección del partido), no logró vencer, ni mucho menos, a la avasalladora ola bolsonarista. Esta ola hizo que, en la primera vuelta, se impusiera entre las fuerzas de izquierda la lógica del voto útil, lo que resultó en una dura derrota del candidato del PSOL, Guilherme Boulos, sin duda el candidato más prometedor de una izquierda brasileña renovada.

Extremismo ideológico disfrazado de antideología

El extremismo ideológico tiene dos frentes aparentemente incompatibles. Por un lado, el extremismo económico de una política neoliberal radical, hasta hoy solo posible en un régimen dictatorial, como sucedió en el Chile de Pinochet. Esta política implica una aceptación incondicional de los imperativos capitalistas generados internacionalmente. Por otro lado, el extremismo de las ideas políticas ultraconservadoras o incluso reaccionarias (es decir, subsidiarias de los ideales que prevalecieron hasta la Revolución Francesa de 1789). Este extremismo incluye: elogio de la dictadura y de la tortura de los disidentes; retórica nacionalista contra supuestas ideologías extranjeras;

apología del racismo, del sexismo y de la xenofobia; eliminación física de los criminales comunes y de los opositores de izquierda, si es necesario con el recurso a milicias privadas; criminalización de los movimientos sociales; censura de autores no alineados con las ideas conservadoras; política de costumbres orientada por las vertientes más reaccionarias de las religiones cristianas, sobre todo por el evangelismo pentecostal radical, que implica la eliminación de los derechos de diversidad cultural, racial, sexual, religiosa, y muy particularmente de los derechos reproductivos de las mujeres y de la diversidad de orientación sexual, transformados en peligrosa “ideología de género”.

Esta vasta y sofocante prisión ideológica se presenta como antiideología, como pensamiento único, universalmente válido, frente al cual todo pensamiento divergente es inválido y, por eso, una ideología condenable. Esta inversión permite presentar el proyecto ultraconservador de control ideológico y político de la educación como “Escuela sin Partido”.

Militarización del poder civil o “civilización” del poder militar

Las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel preponderante en el éxito del fenómeno bolsonarista y ahora tienen una participación sin precedentes en el gobierno del nuevo presidente. Jugaron un papel decisivo en la neutralización política de Lula da Silva, presionando a las instituciones, especialmente a los tribunales, para mantenerlo preso y alejado de la disputa electoral. En vísperas de una decisión crucial del Supremo Tribunal Federal sobre la posibilidad de liberación del expresidente por no haber agotado aún los recursos de la sentencia judicial que lo condenó a 9 años de prisión, el por entonces comandante del ejército, el general Villas Boas, advirtió en un tuit del 18 de septiembre de 2018 que el ejército repudiaba la impunidad de los políticos y “estaba atento a sus misiones institucionales”. Lula da Silva permaneció en la cárcel y se le impidió definitivamente presentarse como candidato.

Una vez elegido presidente, Jair Bolsonaro agradeció al general Villas Boas la publicación del tuit, declarando: “Usted es uno de los responsables de que yo esté aquí”. Y añadía: “Lo que hablamos morirá entre nosotros”. Según Juan Arias: “Hoy el ejército está presente no solo en casi un tercio de los ministerios, donde ya superan los 45 miembros, entre ellos 18 generales y 11 coroneles, distribuidos en 21 áreas de infraestructura que lidiarán con miles de millones de presupuesto. Algo que ni siquiera ocurrió durante los gobiernos de la dictadura” (*El País*, 22 de enero de 2019). Esto significa que los militares han regresado al poder, esta vez en condición de participantes preponderantes de un gobierno civil democráticamente elegido. Además, no deja de ser enigmático que, en términos militares, el presidente sea un excapitán paracaidista, exonerado del ejército por insubordinación, y el vicepresidente, un general. Esta “inversión” de la jerarquía militar puede significar tanto la afirmación de la lógica civil en detrimento de la lógica militar como un seguro militar que por ahora funciona como tutela de reserva, pero que mañana puede activarse si las condiciones lo exigen o justifican.

El bonapartismo judicial

El nombramiento de Sérgio Moro como ministro de Justicia del nuevo Gobierno –el juez de primera instancia que coordinó la operación Lava Jato y protagonizó la emergencia del estado de excepción que garantizó la neutralización política de Lula da Silva– representa la culminación de una alteración dramática en el sistema de división de poderes propio de la matriz de la democracia liberal. Esta alteración se estaba construyendo en los últimos dos años con la hiperpolitización del Poder Judicial: un protagonismo sin precedentes en la vida política; selectividad flagrante en la persecución de agentes políticos sospechosos de corrupción; presencia mediática decisiva en los pasos más importantes del calendario político; manipulación arbitraria del proceso judicial, cambiando la certeza de los procedimientos por la certeza en la obtención de los resultados, en el caso de

la neutralización política de Lula da Silva y la demonización global del PT y sus aliados. Todo esto obligaba a concluir que la lógica de la intervención judicial ocurría fuera de los límites de la división de poderes, tanto más en la medida en que la dinámica de esta intervención ocurría con una extraña inversión de la jerarquía judicial, con un juez de primera instancia interfiriendo recurrentemente en las decisiones de los tribunales superiores sin ninguna incoación de procedimientos disciplinarios. El nombramiento ministerial del juez Sérgio Moro reveló que la manera como se condujo la operación Lava Jato tuvo como objetivo eliminar a un adversario político, abrir el camino a una carrera política y favorecer un nivel de intervención política permanente del Poder Judicial.

Estamos ante un bonapartismo de nuevo tipo. Con el bonapartismo tradicional comparte la atrofia fatal de la democracia por el protagonismo dado a los poderes menos dependientes del voto popular. Pero a diferencia del bonapartismo tradicional, el protagonismo no se transfiere del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial, el poder más inmune al control democrático. Se trata ahora de saber si esta nueva configuración política se va a mantener o si ha sido solo el arma que ha permitido una manipulación radical del juego político democrático para garantizar la imposición de medidas económicas neoliberales y la alineación incondicional con el imperialismo estadounidense, que no serían refrendadas en un proceso democrático “normal” y, en el caso de serlo, no se recurriría a la imposición de la dictadura.

El régimen de democracia blanca como proyecto de doble represión y doble contención

El incremento del autoritarismo político ha venido acentuándose desde el *impeachment* contra la presidenta Rousseff y alcanza ahora nuevos niveles. La continuación de la prisión política de Lula da Silva, la ejecución de la concejala Marielle Franco, la intervención militar en el estado de Rio de Janeiro, el aumento de la violencia contra

los pueblos indígenas, la población negra y quilombola, las mujeres y la población LGTBI, la invasión ilegal e impune de los territorios demarcados de los pueblos indígenas, las amenazas de muerte a agentes políticos elegidos democráticamente, de las que el ejemplo más dramático es el diputado federal Jean Wyllys, obligado a refugiarse en el extranjero; todo ello combinado con el bonapartismo judicial, configura el surgimiento de un régimen político de nuevo tipo. Lo designo como democracia blanca. Se trata de una democracia doblemente truncada. Blanca, porque busca la neutralización de los rojos, para usar una expresión de Jair Bolsonaro, es decir, de los partidos de izquierda –sobre todo del PT y el PSOL– y los movimientos sociales afines. Blanca, porque se funda en el racismo y el sexismo, enarbolados en políticas públicas ungidas por la bendición de las vertientes más conservadoras y más radicales del cristianismo político. La primera dimensión tiene en las Fuerzas Armadas el apoyo decisivo; y la segunda, en las iglesias evangélicas con fuerte presencia en el gobierno y en la sociedad. Ambas dimensiones de la blancura son fundamentales para imponer las políticas económicas antisociales exigidas por el neoliberalismo y la sumisión al imperia- lismo estadounidense.

La democracia blanca se basa en una doble represión que, para ser eficaz, tiene que operar mediante una combinación de medidas institucionales y extrainstitucionales, de medidas políticas o parapolíticas y actos de violencia sistemática. Se trata, por un lado, de la represión de las fuerzas políticas de izquierda y, por otro, de la represión de las clases populares en el probable caso de reaccionar frente a la agresión económica a la que van a ser sometidas. La represión de las fuerzas políticas se lleva a cabo a través de medidas institucionales que pueden consistir tanto en alteraciones del sistema político como en medidas parapolíticas, de las que el mejor ejemplo son las acusaciones de corrupción. Las medidas extrainstitucionales implican las amenazas de muerte y el asesinato. La represión de las clases populares se ejerce a través de medidas institucionales que pueden ser violentas (brutalidad policial, intervención militar en los

conflictos internos) o no violentas (degradación de los servicios públicos, eliminación de las prestaciones sociales en caso de pobreza extrema, adoctrinamiento religioso y mediático para la resignación). Las medidas extrainstitucionales son acciones de las milicias paramilitares y del crimen organizado. Hay que subrayar que en muchas situaciones la distinción entre medidas institucionales y medidas extrainstitucionales se desvanece, como por ejemplo cuando el crimen organizado y las milicias son el brazo armado de políticos electos.

Al mismo tiempo que se basa en la doble represión, que puede ser violenta o no, la democracia blanca se basa también en la necesidad de contención del ejercicio de la represión, sobre todo de la represión extrajudicial violenta. El nuevo régimen confiere a las Fuerzas Armadas un papel decisivo en la calibración de la contención. Por un lado, se trata de la contención de la estigmatización verbal de las fuerzas políticas de izquierda y de la violencia física contra sus agentes políticos y sociales. El objetivo de neutralizar esas fuerzas es compartido por el componente militar y el componente civil del régimen, pero los militares quieren evitar los “excesos” que pueden llevar el descrédito internacional del régimen a una polarización social descontrolada y desestabilizadora del mismo. La misma estrategia de contención confiada a los militares ocurre en el ámbito de la represión social. Aquí, las Fuerzas Armadas parecen querer evitar la situación colombiana, donde la violencia social –sobre todo en el campo– se ha dejado en manos de las milicias paramilitares, muchas veces en alianzas insondables con las fuerzas militares regulares. Al menos por ahora parece que el componente militar del régimen brasileño rechaza más firmemente el recurso a las milicias que el componente civil.

La alineación con el imperialismo estadounidense

He defendido que la rivalidad entre el imperio declinante de Estados Unidos y el imperio ascendente de China está condicionando cada vez más las opciones geoestratégicas de la gran mayoría de los países

del mundo. Esta rivalidad se traduce, por ahora, en la guerra comercial y en la disputa de zonas de influencia, sobre todo en las regiones del mundo en las que la presencia de China es más reciente, especialmente en América Latina y en Europa. Se trata de un nuevo tipo de guerra fría ahora centrada en las Américas. Pero el objetivo es el de siempre: crear cordones sanitarios que neutralicen a los rivales y delimiten zonas de alineación incondicional. En Europa, la alineación pasa por el debilitamiento de la Unión Europea y, si es posible, por su desaparición. Se ha documentado la interferencia de Estados Unidos en el Brexit y sus alianzas privilegiadas con los países gobernados por la ultraderecha euro-escéptica, como Polonia, Hungría e Italia. En la perspectiva de Estados Unidos, una vez reducida a un conjunto de países, que además históricamente siempre se distinguieron por mantener relaciones de hostilidad entre sí, el único país con alguna relevancia económica es Alemania, y ciertamente habrá que tenerlo en cuenta, bien sea para neutralizarlo, bien sea para exigir su alineación. En lo que respecta a América Latina, el desplazamiento de la guerra fría hacia esta región del mundo es aún más complejo y está asumiendo varias fases. En primer lugar, se trató de neutralizar a gobiernos populares que albergaban la pretensión de tener cierta autonomía en las relaciones internacionales y en la gestión de sus recursos naturales. Comenzó con el golpe institucional en Honduras en 2009 (los fugitivos hondureños camino de Estados Unidos son resultado de ello), que puso en práctica un nuevo mecanismo de intervención imperial que posteriormente se aplicó en Paraguay en 2012 y en Brasil en 2014. La segunda fase consistió en impedir cualquier participación de los países latinoamericanos en las iniciativas promovidas por China para desplazar hacia Oriente la dinámica del desarrollo del capitalismo global; lo que implicaba la creación de instrumentos financieros nuevos y relativamente independientes del control norteamericano (y de las instituciones de Bretton Woods). Así es como surgieron los BRICS, un conjunto de países de desarrollo intermedio y con grandes poblaciones: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por diferentes medios, todos estos países han sido

hostilizados, neutralizados o “invitados” a abandonar el proyecto. En Brasil, dada la existencia de una democracia funcional y con cierto pluralismo, la alineación incondicional no estaba garantizada con el *impeachment* contra la presidenta Rousseff. Era necesario que el nuevo proceso electoral generara un Congreso y un presidente inequívocamente alineados con Estados Unidos y dispuestos a entregar los recursos naturales a las empresas multinacionales. De ahí la interferencia decisiva de Estados Unidos en las elecciones de 2018. En parte ya documentada, esa interferencia fue directa, chocante, polifacética y tuvo en las Fuerzas Armadas, en Sérgio Moro y en las redes sociales sus tres principales vehículos.

La alineación lograda es tan excesiva que resultaría ridícula si no fuese trágica para la vida de las clases populares del continente. Incluye un estilo Trump de comunicación presidencial, la misma exorbitancia retórica en la estigmatización de los enemigos (es decir, de todos los que no concuerdan con las políticas propuestas); la prevista visita presidencial a Taiwán o el traslado de la embajada en Israel a Jerusalén; la alianza privilegiada con Israel en múltiples áreas, sobre todo en el ámbito de la seguridad; malbaratar los recursos naturales a las empresas multinacionales, incluso con discriminación negativa contra las empresas nacionales; una política continental orientada a la defensa de los intereses de Estados Unidos, dramáticamente patente en el protagonismo asumido en el “cambio de régimen” de Venezuela, dando cobijo a un gobierno paralelo y títere a pesar de tener relaciones diplomáticas con el gobierno bolivariano y considerando incluso una intervención militar –el mismo guión de la guerra por proxy usado en Oriente Medio con la terrible consecuencia de la destrucción de millones de vidas inocentes–. En esta alineación hay todavía una incógnita: el control de la Amazonia que Estados Unidos considera un territorio de su seguridad nacional. ¿Cuál será la reacción de los militares ante esta exigencia?

La difícil renovación y articulación de las fuerzas democráticas y de izquierda

La avalancha de radicalismo político conservador ha sido tan intensa y desbocada que las fuerzas políticas democráticas que no se reconocen en el proyecto bolsonarista y, en especial, las fuerzas políticas de izquierda, incluidos los movimientos sociales, están en estado de *shock*, incapaces de formular respuestas coherentes o, al menos, de promover articulaciones defensivas que reduzcan los daños del desvarío radical que se ha desatado sobre ellas. Este periodo no puede durar mucho, sobre todo en el caso de los partidos y los movimientos de izquierda, porque está en juego su supervivencia, como resulta claro del proyecto de democracia blanca que he descrito anteriormente. Además, la extrema derecha revela gran inseguridad en el caso de tener que entrar en cualquier disputa democrática con las izquierdas. De ahí las numerosas declaraciones en el sentido de que es necesario tomar medidas radicales lo más rápidamente posible pues, de lo contrario, “los rojos pueden regresar”.

En la recomposición política contra la extrema derecha, distingo dos tareas fundamentales y cualquiera de ellas con dos ritmos, el corto y el mediano plazo: reconstrucción de la democracia; reconstrucción de alternativas de gobierno de izquierda. Cualquiera de estas tareas presupone ejercicios de autocrítica y de disputa interna.

La reconstrucción de la democracia

Al comprometerse casi toda derecha con el *impeachment* contra la presidenta Rousseff, la derecha más tradicional perdió mucha de su legitimidad democrática. Reveló que su compromiso con la democracia está condicionado por la preservación de sus intereses, de tal manera que siempre que estos lo exijan está dispuesta a descartar la democracia. Como defiende en este texto, en las condiciones del mundo de hoy solo las fuerzas de izquierda defienden incondicionalmente la democracia, y es por eso que considero altamente

arriesgado, en el contexto brasileño, cualquier alianza entre fuerzas de izquierda y fuerzas de derecha con incidencia gubernamental. Sin embargo, el objetivo de reconstruir y preservar la democracia, el regreso a la “normalidad” democrática después de la manipulación masiva y grotesca de la opinión pública que tan fuertemente condicionó las preferencias electorales en 2018, es bastante más amplio que las soluciones gubernamentales. En mi opinión, debe guiarse por las siguientes ideas y plasmarse en un frente democrático amplio:

1. Se trata, ante todo, de contrarrestar activamente la ideología antidemocrática que se ha infiltrado en los procesos y discursos democráticos de los últimos años. Los estudios revelan que las estructuras de confianza política de los brasileños se asientan en instituciones poco o nada sujetas al control democrático: las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, las iglesias y la familia. Si se vehiculiza a través de estas instituciones, la cultura antidemocrática tiene un peso social muy fuerte. Por eso, la reposición de una cultura más democrática implica un vasto y diversificado conjunto de acciones ante la opinión pública y la sociedad civil, en especial, de la sociedad civil organizada. Es una operación pedagógica que obliga a los políticos y a los militantes demócratas a salir de su zona de confort. Esta operación debe incluir actores de diferentes orientaciones o familias políticas para inculcar los valores y las prácticas de argumentación y de convivencia democráticas.

2. Intervenciones concertadas entre las distintas fuerzas democráticas para combatir el estado de excepción en el que se encuentra el país en el plano jurídico-político. Fomentar una corriente de opinión contra el bonapartismo judicial y apoyo de la opinión pública a los profesionales del derecho contrarios al estado de excepción y que muchas veces se sienten impotentes o perseguidos. Movilizar, en la medida de lo posible, las facultades de derecho y las escuelas de la magistratura para esa lucha.

3. Acordar la condena particularmente vehemente de algunos retrocesos, especialmente en la educación, en el respeto de la diversidad, en el secularismo del Estado, en los derechos de los pueblos indígenas, en la denuncia del trabajo esclavo.
4. Defensa intransigente de la protesta social pacífica y de los movimientos sociales que la organizan.
5. Internacionalizar la lucha por la preservación de la democracia, articulando el Frente Democrático con frentes y movimientos similares en otros países.

Las disputas en el seno de cada una de las fuerzas políticas, tanto de izquierda como de derecha, deben despolarizarse, es decir, deben circunscribirse a las cuestiones que no pongan en cuestión las tareas de preservación y reconstrucción democráticas delineadas.

Reconstrucción de alternativas de gobierno de izquierda

Es de temer que el corto plazo sea largo. Por eso, el pensamiento a corto plazo tendrá que tener en cuenta las perspectivas a mediano y largo plazo. La diferencia entre los dos ritmos es básicamente la siguiente: el corto plazo es el plazo para desmentir el mantra de la extrema derecha de que “los rojos van a ser neutralizados para nunca volver al poder”. Es, pues, el plazo de recomposición interna y de articulación con otras fuerzas de izquierda para definir puntos de convergencia en las luchas que se trabarán en el Congreso con la derecha y la extrema derecha y en la preparación de la disputa política de las próximas elecciones. A corto plazo, la recomposición interna será ciertamente la tarea más difícil y por esa razón la articulación entre las diferentes fuerzas políticas de izquierda va a ser difícil o inestable.

La tarea de recomposición será particularmente difícil en el PT, el partido que apoyó los gobiernos progresistas entre 2003 y 2014. El

hecho de que la estrategia de Lula da Silva fallara facilitaría, en principio, una amplia autocrítica de los gobiernos del PT y la recomposición de su dirección. Sin embargo, el hecho de que el expresidente esté preso convierte al PT en rehén de su ilustre preso político e impide cualquier autocrítica, dado que esta, por tibia que pudiera ser, acabaría por cuestionar aspectos decisivos de la conducción política de Lula da Silva, lo que sin duda los adversarios interpretarían como justificación de su arresto. Los adversarios, desde la derecha hasta la extrema derecha, lo saben y pretenden mantener a Lula da Silva preso o neutralizado para que el PT se mantenga inmovilizado en un deseo imposible de renovación. Y, de hecho, Lula da Silva aparentemente sigue controlando desde la prisión los movimientos más importantes del partido. Se comprende el dilema de los militantes del PT que desean la autocrítica y una profunda remodelación de su estructura dirigente: ¿cómo honrar el pasado petista dirigido por Lula da Silva y proponer una ruptura total con muchos de sus métodos de gobierno, bien porque eran condenables o contenían fallos inherentes, bien porque las condiciones actuales hacen imposible cualquier repetición de la misma receta gubernamental? En esto consiste el *impasse* del PT. La demostración más obvia de ello es que el único dirigente que salió ileso de la crisis y conquistó el voto de más de 47 millones de brasileños en la segunda vuelta de las recientes elecciones presidenciales, Fernando Haddad, no se puede imponer como nuevo presidente del partido.

En el resto de los partidos de izquierda las tareas a corto plazo no son tan dramáticas y tal vez por eso tengan mayor disponibilidad para articular el corto con el mediano plazo. Esta reflexión debe guiarse por las siguientes ideas:

1. La izquierda solo tiene futuro si es la izquierda del futuro. ¿Qué debe ser la izquierda en las nuevas condiciones del ciclo reaccionario, caracterizado por el fortalecimiento de la extrema derecha, por el dominio descontrolado del capital financiero global, por el control salvaje de los recursos naturales, por la alarmante degradación del

medio ambiente y por la renovación agresiva del colonialismo y del heteropatriarcado?

2. Tal vez de manera más evidente que durante el siglo pasado, el sistema actual de dominación se compone de la acción articulada de tres modos principales de creación sistémica de poder extremadamente desigual: el capitalismo, el colonialismo (que no terminó con la independencia de las colonias, solo cambió de forma) y el heteropatriarcado. Más que nunca la resistencia contra la dominación tiene que articularse, lo que no sucedió en el pasado. ¿Cómo reorganizar los partidos de izquierda y los movimientos sociales que son sus aliados para responder a esta exigencia histórica?

3. La agresividad de este modo de dominación se ha venido acentuando en este inicio de siglo con innovaciones tecnológicas que desvalorizan aún más la fuerza de trabajo y crean poblaciones desechables. Esta desvalorización hace inviable la idea, nunca muy creíble, de un capitalismo con rostro humano. Incluso la democracia liberal es hoy incompatible con este modo de dominación. Esto queda patente en el modo en el que este tipo de democracia ha sido secuestrado por fuerzas antidemocráticas al servicio del sistema de dominación. Las democracias corren el riesgo de morir democráticamente. En estas condiciones, la izquierda del futuro o es anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal o será un engaño.

4. La izquierda del futuro tiene que asumir una nueva Declaración (verdaderamente) Universal de Derechos Humanos que estaría en vigor durante los próximos setenta años. A los derechos de la primera declaración se deben añadir los derechos de la naturaleza, los derechos a la memoria y a la historia, el derecho a vivir en una sociedad anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. La nueva declaración debe incluir entre los nuevos crímenes de lesa humanidad todas las actividades económicas que suponen (al menos, como daño colateral) la destrucción de la vida. Ejemplos de ello son la minería

de alta intensidad tecnológica, indiferente al sufrimiento de las poblaciones afectadas, a las potenciales catástrofes ambientales y a las actividades especulativas del capital financiero desregulado, que producen el colapso de las políticas sociales y de la atención médica en países injustamente endeudados, de lo que se derivan pérdidas de vidas e inabarcable sufrimiento humano.

5. Una fuerza de izquierda no puede transformar a otra fuerza de izquierda en su principal oponente. Las diferencias entre las varias familias de la izquierda se deben respetar e incluso alimentar en la medida en que no pongan en cuestión las articulaciones y las alianzas políticas centradas en los puntos de convergencia que puedan fortalecer la lucha por la emancipación social. ¿Consisten en esto las rivalidades despolarizadas?

6. No hay democracia sin partidos, pero hay partidos sin democracia. Una de las antinomias de la democracia liberal de nuestro tiempo reside en el hecho de basarse cada vez más en los partidos como forma exclusiva de agencia política, al mismo tiempo que los partidos son cada vez menos democráticos. Al igual que la democracia liberal, la forma partido tradicional ha agotado su tiempo histórico. Los sistemas políticos democráticos del futuro tienen que combinar la democracia representativa con la democracia participativa a todos los niveles de gobierno. La participación ciudadana tiene que ser multiforme y multicanal. Los propios partidos se deben constituir internamente por mecanismos de democracia participativa. En esto consiste el paso de la forma partido tradicional a la forma partido movimiento. No creamos, sin embargo, que la revolución de la información electrónica y las redes sociales constituyen, en sí, un instrumento incondicionalmente favorable al desarrollo de la democracia participativa. Por el contrario, como se vio en las recientes elecciones en Brasil, pueden contribuir a manipular hasta tal punto a la opinión pública que el proceso democrático puede ser fatalmente desfigurado. El ejercicio de la democracia participativa necesita hoy más

que nunca de reuniones presenciales y discusiones cara a cara. La tradición de las células partidarias, de los círculos de ciudadanos, de los círculos de cultura, de las comunidades eclesiales de base tiene que reinventarse. No hay democracia participativa sin interacción de proximidad.

Capítulo 4

Colombia: la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio

Colombia es otro país latinoamericano donde en 2018 se celebran elecciones presidenciales y donde la cuestión de la articulación entre fuerzas de izquierda se plantea con especial intensidad. Tal como podía suceder en Portugal y puede ocurrir en Brasil, la falta de unidad podría significar que el país, independientemente del sentido global del voto de los colombianos, acabase siendo gobernado por una derecha neoliberal, hostil al proceso de paz y totalmente subordinado a los intereses continentales del imperialismo estadounidense.

Entre los factores que pueden volver inviable o condicionar fuertemente la articulación entre las fuerzas de izquierda distingo cuatro: el proceso de paz, la injerencia del imperialismo estadounidense, las fuerzas de izquierda y el contexto electoral y, por último, la falta de entendimiento y comprensión, por parte de las distintas fuerzas de izquierda, del empoderamiento y el malestar ciudadanos.

El proceso de paz¹

Mientras escribo estas líneas (enero de 2018), el proceso de paz se encuentra en una perturbadora encrucijada. Después de que el

¹ En *Democracia y transformación social* dedico a este tema un capítulo, titulado “Colombia entre la paz neoliberal y la paz democrática”.

Congreso lo refrendara (con modificaciones significativas respecto al que se había acordado en La Habana tras cinco años de negociaciones), el acuerdo entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) empezó a aplicarse a lo largo de 2017, y lo que se puede decir de este periodo es que no hay muchas esperanzas de que este se cumpla. De hecho, la violencia paramilitar contra líderes sociales aumentó a lo largo del año y, en este momento, debemos sumar el asesinato de treinta exguerrilleros o sus familiares, además de más de un centenar de líderes sociales. Al mismo tiempo, se han iniciado las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

El Acuerdo de La Habana es un documento digno de atención porque en él se identifican en detalle las condiciones para una paz democrática; es decir, una paz basada en la eliminación de las causas sociales, económicas y políticas que conllevaron el conflicto armado. El acuerdo era particularmente detallado con relación a la reforma política y la justicia transicional. Se admitía que el posconflicto colombiano surgía en un periodo de crisis del neoliberalismo y que solo tendría alguna viabilidad de transformarse en un proceso de paz genuino si, a contracorriente, pusiera el foco en consolidar y ampliar la democracia, es decir, haciendo hincapié en la convivencia democrática de baja intensidad actualmente vigente. Tras la farsesca narrativa neoliberal –una farsa tan trágica para la mayoría de la población mundial– de que la democracia no tiene condiciones, el posconflicto se transformaría en un proceso de paz si aceptara discutir creativa y participativamente la cuestión de las condiciones sociales, económicas y culturales de la democracia.

Se puede decir que la paz democrática fue el proyecto explícito que orientó las negociaciones. Sin embargo, siempre estuvo subyacente a este un proyecto implícito al que he llamado paz neoliberal. Este proyecto no pretendía ninguna reforma política o económica y solo aspiraba al desarme de las fuerzas guerrilleras para garantizar que el capitalismo agrario y minero nacional y extranjero tuviera libre acceso a la tierra y los territorios. Todo parece indicar que este

proyecto implícito era a fin de cuentas el único proyecto para el Gobierno colombiano. A su vez, la derecha más conservadora siempre se había manifestado contra las negociaciones con la guerrilla, y su fuerza quedó demostrada en los resultados del referéndum sobre el Acuerdo de Paz. Durante un año asistimos a una creciente demonización de la guerrilla llevada a cabo por las fuerzas de derecha, ciertos sectores del Estado (la Fiscalía) y los principales medios de comunicación. Esta demonización tan bien orquestada pretendía quitarles a los exguerrilleros cualquier tipo de legitimidad para que la sociedad los viera como miembros de una organización política que no ha sido derrotada militarmente y que, como tal, debe ser acogida por la sociedad debido a su decisión de abandonar las armas y seguir su lucha por las vías políticas legales.

El imperialismo estadounidense

Colombia ocupa una posición estratégica en el continente. Al analizar la historia del conflicto armado en Colombia, se vuelve evidente la injerencia constante del imperialismo estadounidense, y siempre con el propósito de defender los intereses económicos de sus empresas (piénsese en la tristemente célebre United Fruit Company), los intereses geoestratégicos de su dominio continental y, evidentemente, los intereses de sus oligarquías aliadas colombianas, unas más dóciles que otras.

Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas para combatir al lado de los estadounidenses en la Guerra de Corea. Fue la nación que promovió la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, más recientemente, fue la que, en la misma organización, defendió más acérrimamente la expulsión de Venezuela. Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia, firmado por Bill Clinton en junio de 2000, transformó a Colombia en el tercer país del mundo con más ayuda militar de Estados Unidos (después de Israel y Egipto) y en el país con más

ayuda para entrenamiento militar directamente impartido por Estados Unidos.

Para Estados Unidos, ahora centrado en la asfixia del régimen bolivariano de Venezuela, es importante que Colombia siga siendo un aliado fiable para sus propósitos en el continente. Asimismo, es importante que las multinacionales estadounidenses acaben por tener acceso libre a los recursos naturales del país, un acceso que hasta ahora ha sido limitado debido al conflicto armado. Para Estados Unidos, el fin del conflicto armado es una buena oportunidad para que Colombia se entregue de una vez y sin limitaciones al neoliberalismo. Al fin y al cabo, para Estados Unidos es beneficioso que siga el conflicto armado, aunque sea bajo otras formas, para que las Fuerzas Armadas colombianas, el agente político más próximo del imperio, sigan teniendo un papel crucial en los procesos políticos internos.

Las fuerzas de izquierda y el contexto electoral

La izquierda o centro-izquierda colombiana está fragmentada en vísperas de elecciones legislativas y presidenciales. En estas últimas las fuerzas de izquierda presentan a los siguientes candidatos: Clara López, Gustavo Petro, Jorge Robledo, Claudia López –una candidata más bien de centro-izquierda–, Sergio Fajardo –un candidato de centro que algunos consideran de centro-izquierda– y dos candidatos de derecha, Germán Vargas Lleras e Iván Duque. Humberto de la Calle Lombana, que fue el negociador del Gobierno del proceso de paz, ha sido referido como posible candidato de izquierda. El nuevo partido de las FARC² se halla en un complejo proceso de consolidación interna, propio de la transformación de grupo guerrillero a partido político. A finales de enero presentó su programa y sus candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales. Para estas últimas el

² Conservando el mismo acrónimo para un nuevo contenido: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

candidato a presidente es el histórico líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, que lideró el proceso de las negociaciones de paz en La Habana.

En las condiciones actuales, se corre el riesgo de que las fuerzas de izquierda disminuyan o pierdan la representación parlamentaria y de que sean los dos candidatos de derecha los que se disputen la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Cualquiera de los dos, como máximo, acepta la paz neoliberal. Iván Duque, el representante de la derecha más reaccionaria, relacionada con el expresidente Álvaro Uribe, será el que servirá más fielmente a los intereses imperiales.

Por tradición, la izquierda colombiana ha estado muy fragmentada. En el pasado, la gran división fue entre la izquierda reformista (internamente dividida) y la izquierda revolucionaria, adepta a cambios radicales a través de la lucha armada (esta también dividida entre varios grupos armados). Podría pensarse que por fin ha llegado una oportunidad histórica para que la izquierda colombiana se una, puesto que esta división ha desaparecido. Por desgracia, este no parece ser el caso, porque la manera en la que se ha implementado el proceso de paz muestra que la división sigue existiendo de una forma perversa, en el estigma social y político con el que se está señalando a los exguerrilleros. En vez de ser acogidos por haber abandonado las armas, son demonizados por todos los crímenes que cometieron, como si los Acuerdos de Paz no hubieran ocurrido, como si contra ellos no se hubiera cometido ningún crimen y fueran criminales comunes. La derecha formula este estigma con el lema de que los exguerrilleros usurparán el campo democrático para imponer el “castrochavismo”. El posconflicto está siendo reconceptualizado como conflicto a través de otros medios solo aparentemente más democráticos.

Las diferentes fuerzas de izquierda reformistas temen cualquier asociación con las FARC, ahora partido político. Al hacerlo, corren el riesgo de situarse en el campo de la paz neoliberal y, por tanto, en el campo ideológico de la derecha. Sea de la forma que sea, las fuerzas

de izquierda corren el riesgo de rendirse a la lógica de los que claman contra el “castrochavismo”. Si interiorizan la idea de que tienen que “limpiar” la imagen de la izquierda, purificarla aunque para ello sea necesario retocarla con tintes de derecha, el camino al desastre estará asegurado. Para huir del “infierno venezolano” pueden caer en la más diluida versión de la socialdemocracia europea. Si no se unen, las diferentes fuerzas de izquierda no podrán realizar un programa de izquierda, aunque una de ellas conquiste el poder. Como ya sucedió en el pasado, incluso puede acabar aliándose con fuerzas de derecha.

Al caer en la trampa de tener que escoger entre “política como antes” o “castrochavismo”, las fuerzas de izquierda se autoexcluyen del campo en el que sería posible la unidad sobre la base de un programa unitario de izquierda. Ese campo incluiría temas como los siguientes: la defensa del proceso de paz entendida como paz democrática; la lucha contra la enorme desigualdad social y los fascismos sociales que esta crea; la defensa de los procesos populares de gestión de tierra, de formas de economía solidaria, sobre todo en las regiones más afectadas por el conflicto armado; una democratización de la democracia, profundizándola y ampliándola; una reforma del Estado para blindarlo contra la privatización de las políticas públicas a consecuencia de la corrupción y el abuso de poder; un distanciamiento, aunque sea gradual, de los propósitos del imperialismo. Para todo esto sería necesario que el corto plazo se viera como parte del largo plazo; en otras palabras, sería necesario un horizonte político y una visión de país que no se limitara a los cálculos electorales del momento.

Los candidatos y candidatas han venido destacando la necesidad de buscar entendimientos y alianzas entre las fuerzas de izquierda. Una de las candidatas, Clara López, en un comunicado público del 11 de enero de 2018, identificaba los puntos de convergencia y divergencia entre las diferentes fuerzas de izquierda y las exhortaba a articularse y a negociar una agenda común basada en las convergencias, a fin de construir “una gran coalición progresista”. Así pues, presentaba una ruta concreta a través del camino de la convergencia:

1) Dentro de la tradición pluralista de nuestras diversas perspectivas políticas y sin abandonar las diferencias que caracterizan nuestros idearios, acordamos convocar, de manera conjunta, a nuestros conciudadanos a volver a soñar una Colombia en paz, de prosperidad compartida, libre de corrupción y amigable con la naturaleza.

2) Al someternos a la consulta interpartidista el próximo mes de marzo, reconocemos la libertad de conducción de la candidatura triunfante, dentro del programa que apruebe una convención del partido o movimiento de dicha candidatura, con participación de los demás sectores de la consulta y sus aliados, que conformarán la coalición que se compromete a gobernar a Colombia dentro de un inquebrantable compromiso con las instituciones, la paz, la democracia, el respeto por la diferencia y el cambio social.

Y concluía que estaría dispuesta a aceptar la fórmula de convergencia que reuniera más consenso. En el caso de que no fuera posible, se presentaría como candidata. Al parecer, en una demostración de que el pasado pesa más que el futuro entre las izquierdas colombianas, en las próximas elecciones legislativas de marzo habrá tres listas de izquierda: la lista de las FARC, la lista de Gustavo Petro y Clara López, y la lista del Polo Democrático liderada por Jorge Robledo. Una vez más, la derrota se avecina, y esta vez puede ser fatal para la presencia de la izquierda en el Congreso. ¿Cuál será el impacto de esta división en las elecciones presidenciales que se celebrarán dos meses después?

Actualización de diciembre de 2018 *(con la colaboración de Bryan Vargas Reyes)*

La intensa dinámica de la vida política colombiana aconseja que actualicemos cada uno de los temas que tratamos atrás. Empezamos con los desarrollos más recientes de dos temas contextuales pero decisivos. Pasaremos después a analizar el reciente proceso electoral y los desafíos para las izquierdas.

El proceso de paz

A diciembre de 2018, el proceso de paz con las FARC enfrenta graves peligros que, de no ser superados, podrían llevar a Colombia a un nuevo conflicto armado, esta vez bajo otras lógicas y con otros actores. Hoy por hoy, la paz está en riesgo no solo por el incumplimiento de lo pactado por parte del Gobierno, sino también ante la incertidumbre que enfrentan todos los desmovilizados y comunidades rurales beneficiarias de lo pactado en La Habana. Es tal la incertidumbre que enfrentan los miembros de las FARC, que uno de sus líderes, Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”, no se posesionó en el Congreso argumentando tres razones para ello: 1) el montaje judicial emprendido por el Fiscal General y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en contra de “Jesús Santrich”, líder de las FARC acusado de seguir delinquiendo luego de la firma del acuerdo final; 2) el desdibujamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de las múltiples modificaciones hechas por el uribismo; y 3) la falta de determinación para cumplir con asuntos esenciales del acuerdo.

Con el proceso de paz debatiéndose entre la vida y la muerte, la desconfianza en torno al incumplimiento de los acuerdos ha propiciado el crecimiento de los grupos de disidencia de las FARC, debido a que muchos de los desmovilizados hoy por hoy están retornando a la selva para hacer parte de dichas disidencias. La falta de implementación de los acuerdos también ha causado la captura de aquellos territorios en los que antaño la guerrilla reemplazaba las funciones del Estado; captura que se ha dado por parte de grupos paramilitares, con el fin de controlar rutas y sitios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal.

Paralelo a todo esto, el incumplimiento también le está costando la vida a aquellos exguerrilleros que decidieron desmovilizarse y creer en la paz. Según el informe del 26 de julio de 2018 de la misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, han sido asesinadas 51 personas en proceso de reincorporación a la

sociedad civil, y otras 5 personas han sido sometidas a desaparición forzada.³

El proyecto de paz democrática cada vez se torna más un proyecto de paz neoliberal. Observamos cómo, por ejemplo, bajo la idea de implementación de la paz se expiden leyes que, según la narrativa oficial, permitirán solventar puntos esenciales de lo pactado en La Habana, pero que, en última instancia, benefician el proyecto del establecimiento y no intentan resolver los conflictos sociales existentes.

El tema de tierras, uno de los más centrales en las discusiones de La Habana y uno de los de mayor trascendencia política en el último siglo en el país,⁴ ha sido uno de los más afectados por el proyecto de paz neoliberal.⁵ Al cierre del gobierno de Santos, no solo quedó el sinsabor de su nula implementación de una reforma rural integral, sino que a su vez nos encontramos con la absoluta tergiversación de lo que significa hacer una reforma rural, y terminamos inmersos en proyectos de implementación en pro de los intereses de grandes empresas transnacionales. Un claro ejemplo de esto es la puesta en marcha de la política pública que terminará favoreciendo a la

³ Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General. Disponible en https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n1822622_sp.pdf [consultado el 26 de julio de 2018].

⁴ Al respecto, escribía Orlando Fals Borda en el año de 1960 lo siguiente: “Entre los grandes problemas que ha venido sufriendo el país, ninguno es tan importante como el de la tierra. Las masas campesinas de Colombia han venido soportando intenso malestar debido a la falta de equidad en la distribución de la tierra, los abusos de los propietarios con los aparceros, la baja productividad, y, por ende, la miseria y la ignorancia, que han servido para mantener explotados y subyugados a los hombres del surco y del azadón”. Ver “La reforma agraria”, en Orlando Fals Borda, *Campesinos de los Andes y otros escritos antológicos* (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2017), 321-335.

⁵ El punto 1 del Acuerdo de Paz, titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución de la pobreza en el campo, así como también la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad y el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Ver *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Acuerdo Final 12-11-16*.

agroindustria: las denominadas zonas de interés de desarrollo, rural, económico y social o Zidres.

Estas Zidres han sorteado, después de cuatro años, diversos debates y luchas jurídicas (demandas por inconstitucionalidad),⁶ en los que se ha argumentado que atentan contra el campesinado y fomentan la acumulación de baldíos en manos de grandes empresas (y, por supuesto, del gran capital transnacional). Según el Gobierno colombiano, dicha política pública fomenta la producción y los negocios agrícolas en zonas de difícil acceso y va de la mano con los acuerdos pactados en La Habana.

Uno de los muchos inconvenientes de este tipo de medidas es, en teoría, la necesaria alianza entre el campesinado sin tierra y las empresas con las que deben asociarse. Bajo esta alianza, los campesinos sin tierra y quienes deberían, en teoría, ser los primeros beneficiados, no serán quienes aporten en la creación y ejecución de proyectos, sino que serán las empresas quienes utilizarían las unidades agrícolas que se les titularían a los campesinos para la producción de alimentos (obviamente bajo la lógica neoliberal de la agroindustria).

Este hecho, tan grave en sí mismo y bajo la excusa de fortalecer la “confianza inversionista” y el “desarrollo rural”,⁷ evidencia una de las nuevas formas de articulación de la dominación colonial en el siglo XXI bajo la lógica del desarrollo agropecuario, de la productividad y de la seguridad jurídica. En esta nueva forma de dominación colonial, es el desarrollo agropecuario el que se impone sobre los usos y costumbres campesinas, dando paso no solo a la implementación forzosa de semillas transgénicas, sino también a la imposición

⁶ El 2 de mayo de 2018, la Corte Constitucional determinó que la política pública en las Zidres no vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales de los campesinos, en la medida en que se inscribe en el propósito de mejorar las condiciones de vida de esta población.

⁷ La Cámara de Comercio colombo-americana (AmCham) ha manifestado su interés en generar inversión en el campo colombiano. En una de sus asambleas generales de 2017, discutieron sobre la importancia de crear un comité especializado en agroindustria, el cual se sumaría a otros 13 que ya existían en esta organización.

de monocultivos en contravía de la seguridad alimentaria y al menosprecio por el conocimiento tradicional.⁸

Pero el tema de tierras no es la única deuda cuando de implementación del acuerdo estamos hablando. Cifras oficiales, así como no oficiales, manejan datos de menos de un 30% de implementación tras casi dos años de pactado el Acuerdo Final. La sustitución de cultivos ilícitos, la participación política y el capítulo de víctimas son también temas a los que no se les ha prestado atención y sobre los cuales se ciernen grandes dificultades con el Gobierno entrante de Duque, pues son los puntos centrales a los que el electo presidente plantea realizarles “modificaciones estructurales”; en otras palabras, “hacer trizas” lo acordado.

Teniendo en cuenta esto, es deber de las fuerzas de izquierda llegar al Congreso del periodo 2018-2022 con la firme intención de defender la paz democrática, su implementación real, y así enviar un mensaje en dos vías: 1) en primer lugar, un mensaje dirigido a la mesa de negociaciones con el ELN, que permita que esa guerrilla pueda confiar en una salida negociada al conflicto; 2) en segundo lugar, un mensaje positivo para esos miles de exguerrilleros, hoy en proceso de reinserción, para que no desistan de su idea de que la lucha armada no es el camino y se evite la reincidencia y el rearme de las disidencias.

El imperialismo estadounidense

En diciembre de 2018, distintos anuncios nos invitan a pensar aún más en la huella imperialista y su influencia en la situación actual de Colombia. En los últimos meses, llaman la atención los siguientes

⁸ Un claro ejemplo de esto es la denuncia que hacen distintas comunidades rurales en el país, sobre el cambio lento y silencioso de los alimentos cultivados debido a las políticas locales por parte de las distintas administraciones, así como también la presión por factores económicos que representa que ciertos cultivos tengan mayor rentabilidad en menosprecio de la diversidad productiva. Esto es, en última instancia, la imposición de monocultivos subsidiados por el Estado.

hechos: 1) el anuncio por parte del Gobierno colombiano sobre su entrada en la OTAN; 2) el más reciente informe sobre las declaraciones irresponsables por parte de Trump que sugieren una posible intervención militar en Venezuela;⁹ 3) las afirmaciones de Pedro Carreño (diputado de la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana).¹⁰ Estos hechos no se deben leer aisladamente, dado que la suma de los mismos permite la visualización de un terrible panorama para la región.

La derecha ganadora de las elecciones presidenciales y quienes gobernarán entre 2018 y 2022 jugarán un papel muy importante en favor de los intereses imperiales. El presidente electo, Iván Duque, usó la demonización de la situación venezolana a su favor para “no convertir al país en una segunda Venezuela”; así las cosas, es obvio que usará las declaraciones del Diputado de la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana para apoyar y participar en cualquier estrategia a favor de los propósitos imperiales en el continente.

Las fuerzas de izquierda y el contexto electoral

Las elecciones legislativas del 11 de marzo dejaron en Colombia dos claros mensajes: el primero, que las maquinarias electorales de los partidos tradicionales (de derecha o centro-derecha) aún se mantienen vivas; y el segundo, que también crece (con cierto aire de esperanza ante el inminente triunfo de la derecha) un apoyo ciudadano a las alternativas de cambio o de izquierda moderada.

En cuanto a lo primero, salta a la vista la victoria en la contienda electoral de un sector de la derecha que ha asegurado que el Acuerdo

⁹ Se puede consultar, entre otros, el reportaje hecho por *The Guardian*: “Trump repeatedly suggested Venezuela invasion, stunning top aides – report”. Disponible en <https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/04/trump-suggested-invading-venezuela-report> [consultado el 11 de julio de 2018].

¹⁰ “Exmilitar venezolano insiste en ataque a Colombia si EE.UU. invade a Venezuela”. Disponible en <https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/exmilitar-venezolano-insiste-en-ataque-colombia-si-eeuu-invade-venezuela-articulo-799446> [consultado el 11 de julio de 2018].

de La Habana debe sufrir ciertas modificaciones para poder ser implementado. El Centro Democrático (partido del expresidente Uribe y del presidente electo Iván Duque y abiertamente opuesto a la paz con las FARC)¹¹ pasó de tener 39 escaños en el Congreso de 2014 a un total de 51 escaños en 2018, convirtiéndose en la primera fuerza política del país. Otro ganador de esta contienda política fue el partido Cambio Radical (pese a ser el partido del ex vicepresidente y candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras, también hizo fuertes reparos al proceso de paz)¹² que, si bien ocupa el tercer lugar en cuanto a escaños, fue uno de los partidos que más creció pese a múltiples escándalos de corrupción asociados a distintos alcaldes y gobernadores pertenecientes a esta colectividad. Este partido pasó de tener 25 escaños en el Congreso de 2014 a un total de 46 escaños en 2018.

Los viejos partidos (Liberal y Conservador), que antaño se repartían el poder o se lo disputaban, ven reducidos sus números parcialmente. El Partido Conservador, que como su nombre lo sugiere representa a una buena parte de la derecha colombiana, pasó de tener 45 escaños en 2014 a un total de 35 escaños en el Congreso de 2018. Del otro lado, el Partido Liberal (que se autodefine de centro-izquierda, pero que, como ya se ha expuesto antes, como centro tiende a ser de centro-derecha incluso cuando afirma ser de centro-izquierda)¹³ pasó de tener 56 escaños en 2014 a un total de 49 escaños en el Congreso en 2018.

Ahora bien, el segundo aspecto que se refleja luego de las elecciones parlamentarias es el creciente apoyo ciudadano a las alternativas de cambio o de izquierda. Si bien el Polo Democrático Alternativo

¹¹ Entre otras cosas, fue uno de los movimientos políticos que promovió el No en el Plebiscito de 2016.

¹² Este partido no solo evitó que terceros financiadores del conflicto armado fueran llamados por parte de la Justicia Transicional, sino que también promovió modificaciones de los artículos que preveían la rendición de cuentas por parte de los militares en el tribunal especial creado a través del Acuerdo de Paz.

¹³ Pero que aun así se encuentra muy fragmentado, pues tiene entre sus dirigentes tanto políticos afines a la derecha como políticos afines a la izquierda moderada.

(partido de izquierda fundado en 2005) pasó de tener 8 escaños en 2014 a tan solo 7 escaños en 2018, nuevas fuerzas de izquierda entraron en el mapa político electoral y salieron victoriosas (desde un enfoque optimista). Es el caso, por ejemplo, de la denominada “Lista de la Decencia” o Decentes, como formalmente se les conoció, agrupación que conglomeró una parte de los partidos y movimientos de izquierda moderada,¹⁴ quienes lograron obtener 5 escaños en el Congreso; cifra nada despreciable si se compara, por ejemplo, con los resultados obtenidos por el Polo Democrático Alternativo. Por su parte, el Partido Alianza Verde, otro de los partidos de izquierda moderada y que pasivamente se opone al modelo de desarrollo actual,¹⁵ sorprendió con sus resultados: pasó de 11 escaños en el Congreso de 2014 a 18 escaños en 2018.

Las elecciones del 11 de marzo también decidían sobre quién sería el candidato presidencial tanto de la derecha como de un sector de la izquierda. Por la derecha, en la consulta acordada entre el Centro Democrático (Iván Duque), el ala del partido Conservador afín al expresidente Pastrana o pastranismo (Marta Lucía Ramírez) y Alejandro Ordoñez, quedó como ganador Iván Duque, quien obtuvo 4.032.736 votos de un total 5.954.118 votos. Por la izquierda, Gustavo Petro resultó ganador con 2 848 868 votos de un total de 3.363.673 votos.

Ante estos resultados, el panorama político de la izquierda, de cara a las elecciones presidenciales de 2018, quedó de la siguiente manera: Gustavo Petro,¹⁶ liderando una propuesta anti *establishment*;

¹⁴ Coalición política de izquierda integrada por la Unión Patriótica, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, la Alianza Social Independiente y el Movimiento Colombia Humana.

¹⁵ Dentro de su programa político se encuentra la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos, la justicia, la inclusión y la democracia. Disponible en <http://alianzaverde.org.co/pagina/index.php/nosotros/programa-politico> [consulta el 12 de julio de 2018].

¹⁶ Candidato presidencial por el Movimiento Colombia Humana, el cual agrupó a todos los partidos y movimientos de la Coalición Política “Decentes” y a ciertos sectores disidentes de otros partidos políticos (gente del Polo Democrático, del Partido Alianza Verde y del Partido Liberal).

Sergio Fajardo,¹⁷ un candidato de centro que algunos consideran de centro-izquierda;¹⁸ Clara López, como fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle Lombana, candidato del oficialista Partido Liberal; Piedad Córdoba, la candidata que trata de aparecer cercana a los movimientos sociales abandonó la contienda electoral por motivos personales; y, por último, las FARC, con la candidatura de Rodrigo “Timochenko” Londoño, vieron frustrada su aspiración electoral debido a fuertes complicaciones en el estado de salud de su candidato y al evidente rechazo social hacia su candidatura, lo cual, con miras políticas, hubiese significado la prematura muerte política del recién fundado partido de las FARC. Por el *establishment*, quedaron en la contienda dos candidatos: Germán Vargas Lleras¹⁹ e Iván Duque.²⁰

Tras los resultados en el Congreso y configurado el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de mayo, un grupo tanto de ciudadanos como de líderes políticos intentó promover la unidad entre los distintos sectores de izquierda. Bajo los eslóganes de “Nos unimos o nos hundimos” y “El País primero”, se intentó demostrar la necesidad de una alianza entre Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle.²¹

Dicha alianza jamás se vio materializada. En primer lugar, tanto Fajardo como De la Calle se intentaron alejar de Petro y su “mala imagen”. Para la opinión pública, gracias a la evidente persecución política de la que fue víctima durante su paso por la alcaldía de Bogotá²²

¹⁷ Candidato presidencial por la Coalición Colombia, que reunió a la Alianza Verde, al Polo Democrático Alternativo y al movimiento Compromiso Ciudadano.

¹⁸ Pese a que también, para muchos, Fajardo es el candidato de derecha que intenta mantener el *statu quo* desde una política neoliberal financiera.

¹⁹ Cuya fórmula se completó con el candidato a vicepresidente Juan Carlos Pinzón, quien abandonó sus aspiraciones a la presidencia.

²⁰ Completó su fórmula con la candidata a vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, representante del pastranismo y quien ocupó el segundo lugar en la consulta interna de la derecha.

²¹ Pese a que, desde finales de 2017, en etapa de precandidaturas, Gustavo Petro intentó hacer realidad una unidad entre las izquierdas, haciendo un llamado a conformar una gran coalición.

²² La cual, además, está probada, gracias a que la justicia lo ha absuelto de todos los procesos disciplinarios y fiscales que se han abierto en su contra y ha anulado los

y la propaganda negra de la que fue víctima por parte de los medios de comunicación, quedó en el imaginario que Petro había destruido a Bogotá y había sido un pésimo administrador. A esto se suma el hecho de que Petro durante su pasado militó en la extinta guerrilla M-19 y celebró algunas de las políticas del difunto Hugo Chávez; hecho que se veía como de extrema izquierda y que, por lo tanto, jugaba negativamente en el cálculo político.²³

En segundo lugar, una alternativa para Fajardo y De la Calle, al no contemplar la alianza con Petro, era materializar una alianza entre ellos. Pese a que existieron intentos para que dicha alianza saliera a la luz, el Partido Liberal, bajo el mando del expresidente César Gaviria, bloqueó toda posibilidad de alianza o coalición.

Finalmente, las fuerzas de izquierda llegaron fragmentadas a las elecciones presidenciales de mayo, dejando en evidencia la urgencia de una alianza en el futuro. Los resultados de la primera vuelta presidencial dejaron en el primer lugar a Iván Duque con 7.569.693 votos (39,14%); en segundo lugar se ubicó Gustavo Petro con 4.851.254 votos (25,08%); el tercer lugar lo ocupó Sergio Fajardo con 4.589.696 votos (23,73%); seguido de Germán Vargas Lleras con 1.407.840 votos (7,28%) y Humberto de la Calle con 399.180 votos (2,06%).²⁴ Teniendo en cuenta que ninguno de los candidatos logró obtener el número de votos necesarios para ganar las elecciones, los dos candidatos más votados pasaron a segunda vuelta, es decir, Duque y Petro. Para esta segunda vuelta era vital una unión de las fuerzas de izquierda que le hiciera frente al candidato del *establishment* y de la derecha en contra de los Acuerdos de Paz.

fallos condenatorios emitidos en su contra.

²³ A su vez, un sector de la Coalición Colombia, específicamente un sector del Polo Democrático encabezado por el senador Jorge Enrique Robledo, descartó cualquier tipo de alianza con Petro, argumentando que “solo Fajardo podría vencer al uribismo en segunda vuelta” y admitió profundas diferencias personales con el candidato Petro (quien fue miembro también del Polo Democrático).

²⁴ Datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Disponible en <https://presidente2018.registraduria.gov.co/resultados/html/resultados.html> [consultado el 12 de julio de 2018].

Pese a todo lo anterior, y teniendo en cuenta la conformación del Congreso, en donde predominan los partidos de derecha, la izquierda siguió fragmentada. Tanto Fajardo (y una parte del Polo Democrático) como De la Calle optaron por promover el voto en blanco, consideraron a ambos candidatos como extremistas y no tomaron partido en la segunda vuelta, ignorando así el clamor ciudadano para materializar una opción de cambio en el país. Aun así, Petro logró capturar buena parte del electorado que pedía un cambio real en la política del país, logrando una alianza a último minuto con el Partido Verde y la fórmula vicepresidencial de Fajardo, Claudia López. Del otro lado, la derecha, que muchas veces se vio enfrentada y “dividida”, perfectamente pudo aliarse y sumarse a la candidatura de Duque.²⁵ Tristemente, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales dejó como ganador a Iván Duque, con un total de 10.373.080 votos (53,98%) frente a los 8.043.189 votos (41,81%) que obtuvo Gustavo Petro.²⁶

Si bien el candidato del Centro Democrático ganó en 24 de los 32 departamentos del país, el mapa de los resultados electorales debe ser analizado para comprender y entender la oportunidad en la que hoy se encuentra Colombia para formular proyectos alternativos de lucha política que logren la articulación o unidad entre las diferentes fuerzas de izquierda. La propuesta de Petro, teniendo en cuenta el análisis aquí propuesto, ganó en los departamentos de Atlántico, Sucre, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Vaupés. Y disputó muy reñidamente, con un 5% máximo de diferencia, los departamentos de Córdoba, Bolívar, Magdalena, Guajira y Amazonas.²⁷ Estos departamentos constituyen buena parte de la periferia más olvidada por el

²⁵ Para la segunda vuelta, todos los partidos de derecha o centro-derecha manifestaron su apoyo a Duque.

²⁶ Datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Disponible en <https://presidente2018.registraduria.gov.co/resultados/2html/resultados.html> [consultado el 12 de julio de 2018].

²⁷ Los resultados fueron los siguientes: Córdoba: 50,16% (Duque) vs. 48,34% (Petro); Bolívar: 51,18% (Duque) vs. 46,92% (Petro); Magdalena: 51,83% (Duque) vs. 46,20% (Petro); Guajira: 49,89% (Duque) vs. 48,45% (Petro); Amazonas: 50,42% (Duque) vs. 47,19% (Petro).

Estado y donde este no tiene presencia efectiva. Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran a Chocó, Cauca, Córdoba y Magdalena como los cuatro departamentos más pobres del país. A su vez, Chocó y Cauca, por ejemplo, cuentan con un número considerable de víctimas del conflicto armado (467.493 en Chocó y 479.942 en Cauca).²⁸

Es importante mencionar aquí, por ejemplo, que los departamentos en donde Petro ganó coinciden a su vez con los departamentos en donde el Sí en el Plebiscito de 2016 obtuvo un amplio apoyo (ver tabla).²⁹

Departamento	% Apoyo al Sí
Chocó	79,76%
Vaupés	78,05%
Cauca	67,39%
Putumayo	65,50%
Nariño	64,81%
Sucre	61,88%
Atlántico	60,53%
Valle	52,44%

La falta de entendimiento de la izquierda sobre el empoderamiento y el malestar ciudadanos

Los resultados electorales de 2018, además de demostrar la urgencia de que las distintas fuerzas de izquierda se unan para luchar en contra del proyecto del establecimiento neoliberal, también demuestran cómo la izquierda colombiana no ha sido capaz de entender el

²⁸ Los resultados del plebiscito. Disponible en <http://pares.com.co/2016/10/06/el-mapa-de-los-resultados-del-plebiscito/> [consultado el 12 de julio de 2018].

²⁹ Elaborada con los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre los departamentos con mayor apoyo al Sí. Disponible en https://elecciones.registraduria.gov.co/pre_plebis_2016/99PL/DPLZZZZRD_L1.htm [consultado el 12 de julio de 2018].

panorama actual que atraviesa el país y que clama, desde distintos sectores, un cambio en la lógica de gobierno.

Con la firma del Acuerdo de Paz, múltiples procesos de empoderamiento y liderazgo social popular cobran mayor vigor para clamar la materialización del derecho a la paz. Hoy más que nunca se observa cómo distintos sectores sociales, populares, articulan su lucha para resistir el fascismo social en sus diferentes formas y plantear como alternativa una idea diferente a la ofrecida por el actual sistema político colombiano. Las organizaciones sociales de víctimas, hoy con mucho más vigor, exigen un cambio y una inclusión que, además, les permita conocer la verdad y saber por qué tuvieron que padecer las peores consecuencias de la guerra. Un ejemplo de esto, entre muchos, es el liderazgo llevado a cabo tanto por las mujeres de Montes de María, como por las Madres de Soacha,³⁰ que claman por un futuro con más opciones de participación política, pero también por un futuro con más justicia, con justicia social; por un futuro en donde la democracia esté democratizada.

Por su parte, el movimiento indígena, afrodescendiente y campesino intenta cada vez más lograr una articulación que resista el empuje de las nuevas formas de colonialismo y que logre reforzar cada vez más su lucha para poder resistir a los instintos más agresivos del neoliberalismo y del capital financiero. Por ejemplo, en el Norte del Cauca hoy por hoy indígenas, afros y campesinos trabajan articuladamente para poder concebir una nueva idea de territorio colectivo, que cobije la diversidad y que se pueda traducir interculturalmente para así lograr una protección legal que frene el despojo de tierras por parte de los ingenios azucareros, pero que también confronte el monocultivo, la minería ilegal y a los distintos actores armados que han surgido fruto de la desmovilización de las FARC.

Mientras esto pasa en el Norte del Cauca, en el Pacífico los afros en Buenaventura fueron protagonistas de uno de los mayores paros cívicos de la historia, y resisten el olvido de un Gobierno que solo ve

³⁰ Sobrevivientes de la violencia paramilitar y de la violencia estatal, respectivamente.

en la región la oportunidad de construir megaproyectos portuarios, pero al que la inversión social no le importa. Para el Gobierno, es preferible invertir millones de pesos en las distintas sociedades portuarias³¹ que en la reactivación de un hospital, la construcción de nuevos colegios o garantizar el servicio de acueducto las 24 horas del día.

Del otro lado, campesinos en Cajamarca articularon su lucha para defender no solo el territorio sino también para proteger las fuentes hídricas y, de paso, expulsar a la multinacional AngloGold Ashanti de la región. Así, por medio de una consulta popular, y valiéndose de la democracia, lograron que el municipio le dijera un rotundo no a la megaminería.

Finalmente, estos procesos de empoderamiento y liderazgo social y popular también han generado un costo innecesario para quienes creen en ellos. La violencia contra estos protagonistas de la resistencia no cesa; por el contrario, se incrementa de una manera increíble. Según cifras de la Defensoría del Pueblo,³² entre 2016 y el 25 de julio de 2018 son 329 los líderes que han sido asesinados en toda Colombia.³³ Esta tragedia que se vive actualmente goza de poca atención por parte del Estado, quien en muchas oportunidades ha desestimado el asesinato sistemático de líderes y lideresas, y lo ha relacionado con otros problemas, como crímenes pasionales o riñas personales. Es claro entonces que se necesita una respuesta política ante esta crisis social.³⁴

³¹ Compuestas por capital público y privado.

³² Institución creada con la Constitución de 1991 para velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.

³³ Disponible en <http://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/7399/Homicidios-de-1%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-DDHH.htm> [consultado el 25 de julio de 2018].

³⁴ Llama la atención ver que un sector de los paramilitares, denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, emitieron un comunicado el 12 de julio repudiando vehementemente los asesinatos de líderes sociales, mientras que el presidente electo, Iván Duque, dedicó al tema menos de 250 palabras en su red social Twitter. Esto solo para demostrar la complejidad del caso colombiano. Disponible en <http://autodefensasgaitanistasdecolombia.org/agc2/2018/11/27/comunicado-julio-12-de-2018/> [consultado el 25 de julio de 2018].

Dichas cuestiones políticas casi fueron ignoradas por las distintas fuerzas de izquierda en la contienda electoral, que no solo no lograron entender el malestar ciudadano en las regiones (de ahí que no lograran una articulación que respondiera ante dicho malestar), sino que tampoco supieron poner en el panorama político propio de los debates presidenciales estos temas tan importantes y tan centrales para los más excluidos del país.

Si las izquierdas en realidad quieren recoger el clamor popular de cambio, que muchas veces es capturado por la derecha a través de engaños y demás estrategias ya bien conocidas, deben pensar en otra forma de hacer política, no ya desde la capital del país, Bogotá, sino desde las regiones, comprender las necesidades de sus habitantes, haciendo política con el pueblo y no para el pueblo. En última instancia, las izquierdas deben tener, o procurar tener, un pie en el espectro político y tres en los movimientos sociales. Tal vez, y solo tal vez, con esta forma distinta de hacer política las izquierdas en Colombia por fin logren un entendimiento y una alianza que les permita, parafraseando al sacerdote Camilo Torres, insistir en todo lo que las une y prescindir de todo lo que las separa. Concluyo con las palabras de un gran líder indígena de quien tengo el privilegio de ser amigo, Feliciano Valencia, líder indígena de la Comunidad Nasa del Norte del Cauca:

¡Basta ya! Así como se globalizan los ricos y se unen para extraer lo que nosotros hemos cuidado, tenemos que globalizar esa resistencia civil y cultural para proteger los territorios, porque sea en Chile, sea en Canadá, los que usurpan el territorio son los mismos con las mismas estrategias y los métodos que vienen utilizando. Entonces, tenemos que unirnos a nivel continental para hacer ese ejercicio de resistencia.³⁵

³⁵ Ver el documental *Nos están matando*, dirigido por Emily Wright y Tom Laffay y producido por Daniel Bustos Echeverry.

Capítulo 5

México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad

Si hay un país en donde la democracia liberal está desacreditada, ese país es México. Hay muchos otros países en los que la democracia es de bajísima intensidad o incluso pura fachada, pero en los que, no obstante, esa democracia goza de un amplio reconocimiento. Sin embargo, quizá por su historia revolucionaria y por haber sido gobernada durante décadas por un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido Acción Nacional (PAN), un partido de derecha, entre 2000 y 2012, México es un caso muy específico a este respecto. Combina un exuberante drama democrático, sobre todo en periodos electorales, con el reconocimiento público y notorio de irregularidades, restricciones y exclusiones que lo distancian del país real. Las críticas a las prácticas democráticas vigentes quizá son la forma más genuina de experiencia democrática en México. El drama más democrático es el drama de la falta de democracia. Los recurrentes fraudes electorales, el altísimo índice de criminalidad violenta contra ciudadanos inocentes llevada a cabo por el crimen organizado asociado a sectores del Estado, el sistema electoral excluyente, la farsa de la soberanía nacional que entra en contradicción con el servilismo mostrado ante Estados Unidos, el abandono al que se somete a los pueblos indígenas y la represión militar a la que son sometidos siempre que se resisten, todo esto revela una democracia de bajísima

intensidad. Pese a ello, las instituciones constitucionales funcionan con la normalidad propia de un Estado de excepción normalizado.

Ante este panorama, y para limitarme al tema que me interesa aquí, el de la articulación o unidad entre fuerzas de izquierda, la primera cuestión es la de saber si hay varias fuerzas de izquierda en México. El hecho de que esta cuestión sea altamente controvertida forma parte del drama democrático de México. Se sabe que hay varias fuerzas de derecha con varios candidatos presidenciales. También se sabe que, como ocurre en otros países, las fuerzas de derecha han sido capaces de unirse siempre que se sienten amenazadas por fuerzas que consideran que son de izquierda. ¿Dónde están las fuerzas de izquierda?

De hecho, es necesario hacer una primera distinción, aceptada solo por algunos, entre la izquierda institucional y la izquierda extra-institucional. La izquierda institucional son los partidos. ¿Hay partidos de izquierda en México? El único partido con presencia nacional que se puede considerar de izquierda es el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), liderado por Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO), varias veces candidato a la presidencia de la República y que en las elecciones de 2012, así como en las de 2006, probablemente fue víctima de fraude electoral.

Si le damos alguna credibilidad al dicho frecuentemente oído de que México está lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos, conviene saber qué piensa al respecto el imperio. Y el imperio no tiene dudas de que AMLO es un peligroso demagogo de izquierda, líder de un partido socialista que se niega a ver los inmensos beneficios que el neoliberalismo trajo al país tras el Tratado de Libre Comercio. Uno de los principales portavoces del imperio, *The Wall Street Journal*, no tiene dudas al respecto y, en la edición del 8 de enero de 2018 considera poco convincente la posición política más moderada que AMLO ha venido defendiendo, destacando sobre todo la lucha contra la corrupción. Considera chocante que AMLO haya propuesto el pasado diciembre la amnistía para el crimen organizado, y concluye dudando que los electores mexicanos crean en la reciente moderación de este “demagogo izquierdista”.

Se esté o no de acuerdo con el diagnóstico del imperio, la verdad es que este último teme la elección de AMLO. Como el imperio no hace este diagnóstico preocupado por el bienestar de los mexicanos, sino más bien por la protección de sus intereses, y como considero que esos intereses son contrarios a los intereses de la gran mayoría de los mexicanos, pienso que todo esto es suficiente para asumir que AMLO representa una fuerza de izquierda. Para el argumento que defendiendo es importante sobre todo saber si, en caso de ser elegido, será capaz de llevar a cabo un programa de izquierda. He venido defendiendo que solo una amplia unidad entre fuerzas de izquierda puede garantizar tal objetivo. Esta misma posición ha sido defendida en México, aunque se reconozca que, como ocurre en otros países, las fuerzas de izquierda han tenido una fuerte tendencia a polarizar sus divergencias, que muchas veces expresan más choques de personalidades que choques programáticos. Por desgracia, realizar articulaciones con otras fuerzas de izquierda eventualmente existentes no parece estar en el horizonte de AMLO. En cambio, lo que parece más cerca es, entre otras cosas, una coalición con un partido conservador, el PES (Partido del Encuentro Social), un partido con un fuerte componente religioso evangélico, militantemente opuesto a la diversidad sexual, a la protección de minorías sexuales y a la despenalización del aborto. Algunas feministas se han sublevado contra la idea de que los fines justifican los medios y que lo importante es ganar las elecciones. Aceptan articulaciones, pero no ceder ante la pérdida de principios y conquistas sociales logradas como consecuencia de duras luchas.

Así pues, se puede concluir que no parece posible, por lo menos por ahora, una articulación entre fuerzas de izquierda institucionales en México. Sin embargo, como he dicho antes, una de las características más específicas del drama democrático mexicano es que este no se puede entender sin la distinción entre izquierda institucional e izquierda extrainstitucional. Por lo menos desde 1994, la izquierda institucional mexicana vive aterrada por el espectro del surgimiento de una izquierda insumisa e insurreccional, una izquierda que

se sitúa fuera del sistema de las instituciones democráticas precisamente por el hecho de no considerarlas democráticas. Me refiero al movimiento zapatista del EZLN y a su levantamiento en armas en enero de aquel año.

El alzamiento, que fue armado en un breve periodo inicial de doce días, se transformó rápidamente en un vibrante movimiento con una fuerte implantación en el sur de México, que progresivamente fue conquistando seguidores en todo el territorio mexicano y en diferentes países del mundo. Con una gran creatividad discursiva, en la que brilló el subcomandante Marcos, y con múltiples iniciativas que fueron dando cada vez más visibilidad al movimiento, los zapatistas llevan tiempo defendiendo una alternativa anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal, basada en la autorganización de los grupos sociales oprimidos: una organización construida de abajo hacia arriba y gobernada democráticamente según el principio de “mandar obedeciendo” de los pueblos indígenas de las montañas de Chiapas. A lo largo de los años, los zapatistas asumieron con consistencia estos principios y fueron sorprendiendo a México y a todo el mundo con nuevas formas de organización comunitaria, basadas en principios ancestrales, con iniciativas transformadoras de gobierno, economía, formación y educación. En ese proceso, las mujeres fueron asumiendo un protagonismo creciente.¹

A medida que fue conquistando adeptos, la izquierda institucional empezó a ver la postura extrainstitucional de los zapatistas como una amenaza. La izquierda consideró su rechazo a apoyar a candidatos o partidos de izquierda en los procesos electorales como una postura que favorecía a la derecha. A lo largo de los años, las relaciones de los zapatistas con las instituciones del Estado mexicano fueron complejas y no siempre hubo confrontación. Poco tiempo después de abandonar las armas, los zapatistas entraron en negociaciones con el Gobierno con el objetivo de ver reconocidas las reivindicaciones

¹ Hoy más que nunca es evidente que el EZLN no representa a todo el movimiento indígena.

de los pueblos indígenas. En febrero de 1996 se firmaron los acuerdos, conocidos como Acuerdos de San Andrés, por haberse firmado en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Chiapas. Dichos acuerdos nunca se cumplieron, y para los zapatistas esto pasó a ser una demostración más de la falta de credibilidad de las instituciones llamadas democráticas.

Recientemente, una nueva iniciativa de los zapatistas volvió a sorprender a los mexicanos: la decisión de presentar a una mujer indígena como candidata independiente a las elecciones presidenciales. Se trata de María de Jesús Patricio Martínez, también conocida como Marichuy, que fundó y dirige la Calli Tecolhucoateca Tochan, “Casa de los Antepasados”, en Tuxpan, Jalisco. En 2001 fue una de las mujeres indígenas que, junto a la comandante Esther del EZLN, tomó la palabra en el Congreso mexicano. Por iniciativa de los zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno hizo la propuesta. El 15 de octubre de 2017 Marichuy anunciaba oficialmente su candidatura. ¿Acaso esto significaba que la izquierda zapatista había abandonado la vía extrainstitucional y había pasado a adoptar la institucional? Si eso ocurriera, ¿la propuesta de los zapatistas sería una propuesta de izquierda que podría acabar articulándose o coaligándose con otras fuerzas de izquierda?

Estas preguntas tenían sentido en la fase inicial de la candidatura, cuando se inició el movimiento para recoger el número de firmas exigidas por el Instituto Nacional Electoral para poder presentar candidatos independientes. Dicho movimiento revelaba la seriedad institucional del proceso. Los zapatistas incluso llegaron a ser acusados de haberse rendido al “electoralismo” que tanto habían criticado. La verdad es que el proceso de recolección de firmas se inició con determinación. Era un esfuerzo gigantesco, ya que el número de firmas exigido era altísimo, más de 800.000. Rápidamente se demostró que las reglas y exigencias, aunque se hicieran de buena fe, algo que se cuestionó, estaban diseñadas para un México “oficial”, muy diferente del México “profundo”, donde la documentación y la infraestructura técnica (de fotocopadoras a móviles) o no existen o

no son de fácil acceso. De este modo, el proceso de recolección de firmas se transformó en una prueba más del carácter excluyente y discriminatorio del sistema electoral mexicano. Tras los Acuerdos de San Andrés, esta era la segunda vez que las instituciones del Estado mexicano revelaban su carácter no fiable, excluyente y discriminatorio. Asimismo, también se debe tener presente que la recolección de firmas puede verse afectada por dos razones añadidas. Por un lado, las bases sociales del zapatismo y sus simpatizantes fueron socializadas para distanciarse totalmente de los procesos electorales. La recolección de firmas implica para ellos alguna cesión. Por otro lado, algunos de los que simpatizan con la causa de los pueblos indígenas no están interesados en que la posición del candidato de izquierda al que apoyan se vea fragilizada por la presencia de una candidatura a su izquierda.

Mientras escribo estas líneas (marzo de 2018), Marichuy prosigue con su campaña, como campaña de denuncia del sistema político e institucional y de sensibilización para las causas de los “condenados de la Tierra”. Aprovechando un contexto político institucional por excelencia, el contexto electoral, Marichuy va haciendo pedagogía de los temas y los pueblos que están excluidos del drama democrático de México. Solo por esto, la candidatura de Marichuy no habrá sido un fracaso. De todo lo expresado sobre el asunto, se puede concluir que, por lo menos por ahora, no son posibles amplios acuerdos entre las izquierdas en México. La izquierda institucional seguirá dividida como antes y la fractura entre la izquierda institucional y la extrainstitucional no hace más que agravarse.

Actualización de agosto de 2018

(con la colaboración de Gustavo Esteva,

Orlando Aragón, Jorge Alonso y Germán Sandoval)

Resultados de la elección presidencial del 1° de julio

AMLO ganó la elección presidencial según el cómputo final de las actas con los siguientes resultados: AMLO 53,19% (30.113.483 sufragios); Ricardo Anaya 22,27% (12.610.120 votos); José Antonio Meade 16,41% (9.289.853 votos), y Jaime Rodríguez 5,23% (2.961.732).

AMLO obtuvo la votación más alta de cualquier candidato presidencial en la historia del país y ganó en casi todos los estados de México (31 de 32), únicamente no ganó en Guanajuato donde triunfó el PAN.

En relación con el Congreso de la Unión (el Poder Legislativo), las dos cámaras (diputados y senadores) fueron ganadas por Morena y los partidos que se aliaron a AMLO. Por tanto, cuentan con una mayoría que les permitirá eventualmente legislar con una orientación diferente a la de los gobiernos neoliberales o revertir varias de las reformas estructurales realizadas por los últimos gobiernos. La victoria electoral fue de tal dimensión que en las elecciones de gobernadores de los estados de México que coincidieron con la elección presidencial, Morena ganó 5 de 8 que estaban en disputa. El PRI sufrió la peor derrota de su historia.

Varios hechos nuevos y no tan nuevos

La violencia

México es una sociedad donde los asesinatos, las muertes extrajudiciales no cesan de aumentar. Pero este periodo electoral superó en mucho la violencia de periodos electorales recientes. Entre septiembre de 2017 y junio de 2018 fueron asesinados 48 aspirantes a cargos políticos y más de 130 militantes de partidos políticos. Los carteles

del crimen organizado buscarán marcar terreno para el próximo periodo presidencial.

Sobre María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”

La vocera del Congreso Nacional indígena (CNI) y del EZLN no alcanzó finalmente su registro como candidato independiente. Mientras que otros dos políticos provenientes del PRI y del PAN, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y Margarita Zavala –la esposa del expresidente Felipe Calderón, rival de AMLO en 2006– sí lo consiguieron, en medio de acusaciones de falsificaciones de firmas y manipulaciones del sistema destinado para el registro de apoyo a las candidaturas independientes.

Esta situación confirma la crítica de que el sistema del Instituto Nacional Electoral (INE) demuestra un carácter excluyente y racista: las firmas debían ser recabadas con una aplicación descargable en teléfonos de gama media que cuestan tres salarios mínimos... Así se reducía a la inviabilidad al México profundo. Asimismo, y al contrario de los otros candidatos “independientes”, las firmas recogidas por Marichuy resultaron válidas en un 94 por ciento.

Se debe también reconocer que esta iniciativa causó desde el inicio una división dentro del propio Congreso Nacional Indígena y se desarrolló dentro de alguna desorganización de los seguidores de Marichuy. Su gira en Michoacán, por ejemplo, fue muy problemática, y no fue recibida en Cherán, que es el principal referente en la actualidad de la lucha indígena en la región. En Guerrero fue cuestionada en una de las comunidades que visitó sobre su legitimidad para representar a los pueblos y las comunidades indígenas, “por no haber cumplido con los cargos comunitarios que la avalaran para ser la representante de los pueblos indígenas”. Probablemente, uno de los factores que explican el resultado de este intento del CNI-EZLN de reposicionarse en la arena política nacional fue que no tuvieron ningún discurso de articulación hacia los procesos de lucha indígena más nuevos (como Cherán, las comunidades y los municipios de

Guerrero movilizados por su derecho al autogobierno; incluso sus propios municipios vecinos en Chiapas, entre otros), que ejercen o luchan por modelos de autonomía no anarquista, como aparentemente es el planteamiento dominante dentro del zapatismo.

Lo cierto es que después de no conseguir su registro Marichuy y el EZLN fueron silenciados en la discusión pública, no fueron materia de debate entre el resto de los candidatos, ni ellos hicieron grandes pronunciamientos, salvo dos comunicados que pasaron un tanto desapercibidos. En uno llamaban a sus seguidores a que independientemente de que votaran o no, lo importante era que se organizaran. En el segundo, el subcomandante Galeano (antes Marcos) aseguraba que el sistema capitalista no permitiría que AMLO ganara la elección, decía que el sistema no estaba para “Lulas”.

*Intervención del presidente Enrique Peña Nieto (EPN)
durante la elección presidencial*

Una de las cuestiones con la que más se especuló durante las campañas fue la intervención de EPN en la elección presidencial, mediante el uso de la procuraduría para acusar de lavado de dinero al principal oponente electoral de AMLO, Ricardo Anaya. Por supuesto, esta cuestión no puede demostrarse como tal, porque como es natural no hay pruebas contundentes, pero los pasos y los tiempos bien medidos que se siguieron para hacer las acusaciones hacen difícil creer que se trate de una mera casualidad. Puede indicar que el triunfo de AMLO se da en el contexto de una división de la élite mexicana y transnacional por la disputa de los nuevos negocios derivados del proceso privatizador impulsado por EPN.

Esta hipótesis cobra fuerza por el respaldo que recibió AMLO de una importante fracción de hombres de negocios y empresarios en México. Algunos de ellos incluso en su círculo más cercano.

Lecciones del proceso electoral a partir de sus resultados

Una de las primeras cuestiones que quedó muy clara fue que en esta campaña no solo fueron derrotados el PRI, el PAN y el presidente EPN, sino los analistas políticos de los medios hegemónicos, pues ninguno pudo prever el resultado que se avecinaba. Por el contrario, su lectura sobre lo que estaba ocurriendo quedó evidenciada como anacrónica y distante del México real. El resultado demostró la eficacia de AMLO para conectar, comunicar y organizar la indignación ciudadana acumulada durante décadas.

Una alianza de izquierda, no necesariamente partidaria, que simpatiza con AMLO

Si bien en esta elección AMLO realizó una serie de alianzas pragmáticas con distintas fuerzas, la magnitud de la victoria no se puede entender sin el apoyo de varios movimientos sociales de izquierda que han surgido después del año 2000 y que no necesariamente son parte de Morena o de un partido político. Lo más problemático es la presencia en estas articulaciones de fuerzas de derecha, lo que comentaré al final.

Este apoyo no se hizo en un acto público ni representó la firma de un documento. Pero se sabe que parte de los activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de lo que fue el “Yo soy 132”, activistas del movimiento por la búsqueda de los “43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa”, e incluso municipios (especialmente Ayutla de los Libres en Guerrero y Oxchuc en Chiapas), que actualmente luchan por elegir y gobernarse a nivel municipal por un sistema jurídico indígena, votaron con reservas por AMLO. Una cosa que no hay que olvidar es que muchos de estos procesos de lucha social más puntuales surgieron durante un periodo en que de manera más amplia AMLO disputó con el PRI y el PAN la presidencia de la República y un modelo de país, por lo que hay articulaciones y vínculos entre una y otras. Quizás se trate del apoyo más crítico que AMLO

recibió, uno que ni siquiera sería explícito en la mayoría de los casos, en otros pocos sí. Pero creo que se trató del apoyo de la gente de la lucha social extrapartidaria electoral, consciente de que México ya no estaba para un gobierno más del PRI o del PAN.

Estos últimos hechos revelan que la caracterización de la izquierda institucional y extrainstitucional necesita de alguna adecuación: no todo es Morena y el EZLN, aunque evidentemente son los actores más visibles de cada una de aquellas.

Elección histórica y júbilo popular

Una cosa que no se puede menospreciar es que esta es la primera vez que la izquierda conquista el poder de la presidencia del país por la vía electoral. A pesar de lo fríos que puedan ser los análisis, lo que se vivió en la ciudad de México y otras ciudades la noche del 1° de julio, después de que se dieran a conocer los resultados, fue un auténtico júbilo popular, la gente salió a la calle a festejar. Las imágenes del Zócalo de la ciudad de México y el trayecto del recorrido que AMLO hizo para llegar allá son impresionantes, la gente se desbordó.

¿Refuncionalización de la desprestigiada democracia electoral en México?

Este es uno de los principales temores de algunos sectores organizados que están impulsando procesos y experiencias fuera y a veces en contra de la arena electoral: que la victoria de AMLO haga olvidar la decadencia y corrupción del sistema. La victoria institucional parece haber ganado territorio en la conciencia colectiva; sin embargo, la desigualdad social, la marginación, exclusión y violencia por la que atraviesa México, pueden ser un campo fértil para la emergencia de resistencias sociales que puedan constituir una izquierda extrainstitucional de mayor alcance político.

Recomposición de la izquierda institucional

Un asunto que no es menor es la recomposición de las fuerzas institucionales de la izquierda. El Partido de la Revolución Democrática, que había sido considerado el tradicional de la izquierda, después de su alianza con la derecha en esta última elección presidencial quedó al borde de la desaparición. Recibió menos del 3 % de la votación, por lo que es previsible que algunos de sus seguidores terminen por migrar a Morena.

Notas para pensar un programa común entre la izquierda institucional y la extrainstitucional

Desencuentro entre el CNI-EZLN y AMLO después del triunfo en la elección

Si se acepta que AMLO es la representación más importante de la izquierda institucional y que el EZLN es la representación más importante de la izquierda extrainstitucional, importan mucho los comunicados posteriores al triunfo electoral de AMLO firmados por el subcomandante Galeano y después por el subcomandante Moisés. En el primero, el EZLN se desmarca del triunfo de AMLO y lo descalifica diciendo que no cambiará nada y que va a defraudar a los mexicanos. En su prosa característica sentencia que “podrá cambiar el capataz, pero no el finquero”. Ante este comunicado, ni AMLO ni Morena han dado respuesta alguna. Lo que sí ha adelantado la persona que se encargará de la política de los pueblos indígenas, un abogado indígena de Oaxaca, es que AMLO sí cumplirá los Acuerdos de San Andrés.

Mediadores de izquierda extrainstitucional entre el EZLN y AMLO

Derivado del pronunciamiento del subcomandante Galeano, una reconocida figura de la izquierda extrainstitucional mexicana, el padre Alejandro Solalinde (reconocido defensor de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México), intentó generar un acercamiento entre el EZLN y AMLO; incluso habló de que un grupo de zapatistas le había expresado su voluntad de tener un encuentro y acercamiento con AMLO. Ante su llamado e intento de aproximación entre ambos grupos, recibió críticas durísimas de los seguidores del EZLN y un fuerte comunicado del subcomandante Moisés, en donde ratificaban su posición frente a la victoria de AMLO. Este nuevo comunicado sigue causando mucha polémica y encono entre los militantes de Morena, que comenzaron a descalificar al EZLN y entre los seguidores del EZLN, que descalificaron a AMLO y de paso a Solalinde. Tal vez más importante es subrayar que la izquierda extrainstitucional no zapatista también se ha pronunciado al respecto. Por ejemplo, Omar García, uno de los estudiantes y voceros de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, reprochó al EZLN su posición sectaria y la indolencia hacia la voluntad de los 30 millones de “peones” que votaron por AMLO.

El EZLN y la representación de los pueblos indígenas de México

Una de las cuestiones más importantes que se puede prever para el próximo periodo presidencial es la cuestión de saber hasta qué punto el EZLN representa la voz de los pueblos indígenas. Todo parece indicar que el diálogo entre AMLO y el EZLN es imposible. Pero quizás esto se vuelva menos relevante si se toma en cuenta que en los últimos 8 años han surgido nuevos procesos de lucha por la autonomía indígena, de inclinación no necesariamente zapatista. Por ejemplo, se debe resaltar el caso de Cherán, que desde 2011 hasta ahora realiza con éxito un modelo de autonomía basado en una relación de

coordinación y no de ruptura con el Estado. Este modelo se ha ido expandiendo de manera desigual pero sostenida en comunidades de Michoacán y en varios municipios de Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas. Solo por ejemplificar, en la actualidad hay tres municipios chiapanecos (Oxchuc, Sitalá y Chilón) que juntos agrupan unas 800 comunidades y están en vías de convertirse en municipios con gobiernos indígenas comunitarios y fuera del régimen de los partidos políticos.

El acercamiento, aunque muy desigual, que tiene la persona encargada por AMLO para los asuntos de los pueblos indígenas a estas experiencias municipales sí hace posible un diálogo con el nuevo gobierno. De hecho, en el marco del II Encuentro nacional por la libre determinación de los pueblos indígenas, celebrado el día 28 de agosto en Oxchuc y convocado por los municipios que ejercen o buscan el autogobierno indígenas, como Cherán (Michoacán), Ayutla de los Libres, Tecoanapa (Guerrero), Oxchuc, Sitalá y Chilón (Chiapas), se comprometió nuevamente ante miles de tseltales a cumplir los Acuerdos de San Andrés y a impulsar varias reformas constitucionales en favor de los pueblos indígenas, incluida la del Artículo 115 de la Constitución que permitiría el reconocimiento del municipio indígena, de los gobiernos comunales en ese nivel de gobierno y el establecimiento del cuarto nivel de gobierno para el espacio de la comunidad.

La posibilidad de un programa de izquierda desde el gobierno

Si se toma en cuenta que la izquierda extrainstitucional no es solamente el EZLN, a pesar de su mayor visibilidad, se puede pensar que el gobierno de AMLO tendrá actores sociales fuera de la izquierda institucional, con los cuales pueda llevar a cabo su programa de gobierno. Otro caso que se destaca y que hace prever estos interlocutores para el gobierno de AMLO son las agendas que está impulsando la persona que se encargará de la Secretaría de Gobernación. La exministra de la Suprema Corte que se encargará de esta agenda ha

dicho que impulsará la despenalización del aborto a nivel nacional; esto supondrá la búsqueda de una amplia articulación con los movimientos feministas.

El problema es saber si el programa de gobierno puede atender de manera eficaz y consistente las demandas y derechos de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y la autonomía en contra del despojo de sus riquezas llevado a cabo por las multinacionales. No sorprende que los zapatistas tengan una previsión muy negativa. En un texto que refleja bien la posición zapatista, Jorge Alonso concluye:

Conviene contrastar la táctica electoral del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) con la de AMLO. Hay que reconocer que hubo un masivo voto de protesta cargado de sentido de cambio. Aunque abrevó del descontento social se convirtió en una fuerza de gobierno donde el mensaje es que hay que dejar hacer al elegido que finalmente está acotado por las fuerzas capitalistas. [...] En ese sentido lo que propuso precisamente el CIG fue propiciar que el cambio se lograra desde abajo, sin jefes, con organización propia autónoma. Hay una clara contraposición de lo que viene de arriba y lo que surge desde abajo. La propuesta del CIG es eminentemente anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Se fue a los lugares más recónditos a donde no suelen llegar los candidatos electorales, se usó un lenguaje pensando y actuando la política de otra forma, defendiendo la vida contra la muerte, transformando el sentido común. Se trata también de dos tipos de movimientos muy diferentes y divergentes. Mientras uno es reductivamente electoral, y lo único que busca es el voto, el otro es potenciador de la fuerza de los de abajo organizadamente. Un movimiento subordina bajo un líder, y otro destraba luchas autónomas. Solo el voto masivo, así sea de 30 millones, no basta para transformar el país, se requiere la lucha social propia y no supeditada.²

² J. Alonso, "Notas marginales a la elección de 2018", *Rebelión.org*, 24 de julio de 2018. Disponible en <http://www.rebelion.org/docs/244455.pdf> [consultado el 12 de agosto de 2018]. Una contraposición se puede apreciar en el escrito de Massimo Modonesi, "Los movimientos sociales frente a la candidatura presidencial de AMLO", *Desinformémonos*, 30 de junio de 2018. Disponible en <https://desinformemonos.org/>

Otra contraposición es lo masivo y puntual de la influencia de AMLO y el paso lento y de larga duración de la movilización impulsada por el CIG. Como dice Zibechi, los grandes cambios inician con pequeños movimientos no perceptibles para los analistas. Antes de que irrumpen acciones masivas decisivas, hay una gran cantidad de procesos subterráneos que suceden en la vida cotidiana de la gente. Los verdaderos movimientos son los que modifican el lugar de las personas en el mundo, cuando se rasgan los tejidos de la dominación, y no cuando esta se reconstruye.³ Lo importante de este tipo de movimientos es que no domestican el enojo. Solo el enojo no basta, porque hay que desconectarse de la dominación y buscar creaciones nuevas. En periodos tormentosos, de confusiones y neblinas, Zibechi recomienda observar de frente el comportamiento de los poderosos para precisar con cierta lucidez qué se tiene enfrente y, en consecuencia, intentar salir airosos del embate que plantean. El objetivo no es sencillo porque los poderosos ocultan sigilosamente sus intenciones, pero adelantan acciones. A veces se tiene la sensación de un “respiro” cuando aparece un gobierno “menos peor”, que permite tomar aliento para seguir adelante. Zibechi reflexiona que se trata de una actitud humana defensiva que no debía ser condenada sino comprendida; porque los pueblos necesitan hacer sus procesos, equivocarse y volverse a equivocar para, algún día, tomar otros rumbos. Llama la atención sobre el hecho de que las culturas políticas cambian muy lentamente, mientras que las tormentas irrumpen deprisa. Considera que conviene mantener la calma y seguir fortaleciendo proyectos colectivos, como lo hacen los pueblos indígenas y las decenas de colectivos que siguen resistiendo y no se dejan cegar por los

las-organizaciones-sociales-independientes-frente-la-candidatura-presidencial-AMLO/ [consultado el 12 de agosto de 2018].

³ R. Zibechi, “Insurrecciones silenciosas”, *La Jornada*, 10 de noviembre de 2017. Disponible en <http://www.jornada.UNAM.mx/2017/11/10/opinion/020a1pol> [consultado el 12 de agosto de 2018].

fuegos de artificio de la política institucional.⁴ Las euforias tienden a diluirse rápidamente y lo que permanece es el trabajo organizativo constante. Tomar el poder para hacer cambios desde arriba ha demostrado que finalmente no logra la transformación de fondo que solo puede conseguir la gente con organización autónoma.⁵

Reflexiones finales

El argumento general de este libro consiste en extraer las implicaciones políticas del ciclo reaccionario global, en el que nos encontramos con retrocesos enormes en las conquistas populares, con la emergencia de fuerzas políticas regulares e irregulares fascistas, civiles y militares, institucionales y extrainstitucionales. Las implicaciones varían de país a país, pero defiendo que en cada uno donde hay una pluralidad de fuerzas de izquierda estas deben articularse de manera pragmática para resistir con los mínimos daños posibles este periodo de luchas defensivas. Este periodo defensivo es visto como provisional y para ello las articulaciones deben ser pragmáticas, limitadas y capaces de preservar la autonomía de cada fuerza política. Esta será la mejor manera para, en un momento posterior, beneficiarse del interconocimiento obtenido en el periodo anterior para lograr otras articulaciones más avanzadas.

En vista de este argumento, la contundente victoria de AMLO es más frágil para las aspiraciones de las clases despojadas, silenciadas y desposeídas de lo que se puede imaginar en este momento de euforia. La dimensión de su fragilidad se observa en la siguiente realidad:

⁴ R. Zibechi, "Conocer al enemigo y sus objetivos", *Desinformémonos*, 9 de julio de 2018. Disponible en <https://desinformemonos.org/conocer-al-enemigo-objetivos/> [consultado el 12 de agosto de 2018]. Hay quienes acotan que no hay que esperar a que la cultura política cambie, sino que hay que combatirla con la crítica y provocar el cambio de la cultura dominante al tiempo que se siguen generando iniciativas de organización autónoma, más allá de la racionalidad capitalista y de los espacios estatales (gobierno, partidos, elecciones).

⁵ J. Alonso, "Notas marginales a la elección de 2018", *Rebelión.org*, 24 de julio de 2018.

la victoria de AMLO es una victoria del pueblo, y se debe en buena medida a jóvenes de las periferias que hace mucho comprendieron que los partidos de orden no resuelven sus problemas ni los de sus familias. Para ellos la gran ventaja de Morena es que nunca ha gobernado el país. ¿Hasta cuándo van a esperar a que el nuevo Gobierno sea diferente?

La victoria de AMLO no resulta de una articulación solamente entre fuerzas de izquierda, sino que integra también algunas fuerzas de derecha (evangélicas, por ejemplo). Por otro lado, en relación con las izquierdas extrainstitucionales, AMLO va probablemente a proseguir la política de dividir para reinar. Con eso va a intentar que no se concreten articulaciones significativas entre esas fuerzas. Ahora bien, son esas fuerzas las que están más cerca de los de abajo y su articulación sería importante para proseguir sus agendas. Los de abajo son los que han sufrido más duramente la violencia estructural del país. En el último sexenio fue particularmente grave la tragedia de Ayotzinapa. Los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) son precisos y no han podido desmentirse. La responsabilidad del Estado parece confirmada, el mismo Estado que ahora preside AMLO. ¿Qué va a pasar? Por último, son muy raros los casos de quienes buscan moderar sus propuestas para ganar el poder y después de ganarlo las radicalizan.

Aventuro una reflexión que reconozco corre el riesgo de entenderse mal. Si la articulación entre fuerzas de izquierda institucionales es difícil, no lo es menos la articulación entre estas y las izquierdas extrainstitucionales, o incluso entre las diferentes izquierdas extrainstitucionales. Los grupos interesados en dividir para vencer son normalmente los que detentan el poder. En el presente caso de México, ese grupo es la izquierda institucional liderada por AMLO. Ocurre que las izquierdas extrainstitucionales no son inmunes a la tentación de dividir para vencer. La victoria de AMLO es la victoria del México de la indignación, la indignación por los miles de desaparecidos por la violencia, por los 43 de Ayotzinapa, la indignación de “Yo soy 132”, de las luchas indígenas, de las feministas, de

los jóvenes urbanos marginados, de los migrantes indocumentados, etcétera. ¿Cuál fue el papel del EZLN o de Morena en esas revueltas de la indignación? No fue ciertamente decisivo. Así pues, ¿qué tipo de liderazgo puede reivindicar el EZLN en el nuevo ciclo político? Y, si tiene el liderazgo, ¿lo ejercerá para unir o para dividir las fuerzas de izquierda extrainstitucionales? Me atrevo a pensar que la apuesta del EZLN es que no hay un nuevo ciclo político y que la victoria de AMLO (en parte a pesar de él) representa una continuidad. Si gana la apuesta y extrae las conclusiones necesarias seguirá siendo una parte importante de la lucha futura por una política progresista y una sociedad liberada. Si pierde la apuesta, temo que el EZLN quede confinado en su pasado, un pasado sin duda brillante, pero un pasado sin futuro.

Capítulo 6

España: la fractura de la identidad nacional

En los últimos años, en España la izquierda-izquierda ha pasado por un momento excepcionalmente prometedor. A raíz del movimiento de los indignados (más conocido en España como 15M), aprovechando la insatisfacción de los españoles con un Gobierno conservador masivamente corrupto (PP, Partido Popular) y el fracaso de una alternativa con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desgastado por un gobierno rehén del neoliberalismo, nació un nuevo partido de izquierda: Podemos. Surgió como una fulguración política en 2014 y tuvo un éxito sorprendente en las primeras elecciones en las que participó, al ser elegidos cinco diputados para el Parlamento Europeo. Además de ser un partido nuevo, era un partido de nuevo tipo, con una relación orgánica con el movimiento social del que emergía (el movimiento de los Indignados). Asimismo, era un partido nuevo por contar con muchos jóvenes entre sus líderes. Se anunciaba el fin del bipartidismo, que surgió con la transición a la democracia consagrada en la Constitución de 1978, la alternancia entre el PP y el PSOE, con el antiguo Partido Comunista, más tarde Izquierda Unida, reducido a una existencia muy modesta.

Podemos fue la respuesta de aquellos y aquellas que en el movimiento de los Indignados defendían que el movimiento de las calles y las plazas debía prolongarse a escala institucional, transformándose en un partido. Pese a adoptar la lucha institucional, Podemos

se presentó como el partido contrario al régimen de la Transición (el posfranquismo iniciado en 1978 con la nueva Constitución), con el argumento de que ese régimen había originado una élite o casta política y económica que desde entonces se expresaba políticamente en la alternancia entre los dos partidos del régimen (PP y PSOE), una alternancia sin alternativa. Las posiciones iniciales del partido llevaron a algunos a pensar, en mi opinión desacertadamente, que estábamos ante un nuevo populismo de izquierda, que oponía la casta al pueblo. De hecho, se decía que la dicotomía izquierda/derecha no captaba la novedad y la riqueza programática y organizativa del partido, que era necesaria una “nueva” manera de hacer política, opuesta a la “vieja” política. Al tratarse de un partido nuevo, sus bases organizativas eran frágiles, pero esa fragilidad se veía compensada con el entusiasmo de los militantes y los simpatizantes.

Los difíciles caminos de la articulación entre las izquierdas

En estas condiciones, no era de esperar ninguna aproximación o articulación entre las izquierdas, sobre todo entre la Izquierda Unida y el PSOE. De hecho, la gran mayoría de los adeptos de Podemos no consideraba que el PSOE fuera un partido de izquierda ante las concesiones que los socialdemócratas habían hecho al neoliberalismo de la UE. Estábamos en un periodo de medir fuerzas y ese proceso era particularmente decisivo para Podemos. Las primeras “mediciones” no podían ser mejores. Nacido en enero de 2014, las encuestas de opinión mostraban a finales de 2015 que Podemos era el segundo partido en las intenciones de voto de los españoles, después del PP y por delante del PSOE. Las primeras iniciativas de acuerdo electoral entre fuerzas de izquierda llegaron de la Izquierda Unida, liderada por otro joven, Alberto Garzón, después de las elecciones autonómicas de 2015. Eran las primeras señales que indicaban el propósito de unir las diferentes fuerzas de izquierda para conquistar el poder.

Entretanto, Podemos decidió, a través de una consulta interna, que cualquier acuerdo o coalición con otras formas de izquierda debía contener el nombre de Podemos. Así, pues, fueron surgiendo los primeros acuerdos a nivel autonómico: “Compromís-Podemos-És el Moment” en la Comunidad Valenciana, “Podemos-En Marea-anova-EU” en Galicia y “En Comú Podem” en Cataluña. Y a escala nacional surgió la coalición “Unidos Podemos”, antes de las elecciones legislativas de junio de 2016, cuando también se incorporó el grupo ecologista Equo.

Las elecciones generales de 2016 fueron el primer indicio de que el trayecto ascendente de Podemos no era algo irreversible. Toda la campaña de Podemos se orientó a superar al PSOE como gran partido de oposición. Ese objetivo quedó lejos de conquistarse, puesto que el PSOE obtuvo el 22 % de los votos y Unidos Podemos apenas el 13 %. Tras la crispación inicial entre Podemos y el PSOE, los dos partidos habían mantenido algunas conversaciones a fin de provocar la caída del Gobierno conservador, pero no se concretó nada. Los resultados de las elecciones también fueron flojos para el PSOE, ya que estos esperaban beneficiarse del desgaste del Gobierno del PP. Ante tal situación, las divisiones en el interior del partido se agudizaron y Pedro Sánchez renunció al cargo de secretario general en octubre de 2016, después de salir derrotado en un turbulento Comité Federal. Ese mismo mes, el PSOE hacía posible, mediante la abstención, la investidura del nuevo Gobierno del PP, liderado por Mariano Rajoy. La líder regional Susana Díaz, discípula política de Felipe González, volvió a realzar entonces la política centrista de partido y secundó la abstención del PSOE. En una demostración de gran tenacidad política, Pedro Sánchez aprovechó los cambios estatutarios que preveían la elección directa del secretario general en elecciones primarias y volvió a conquistar la dirección del partido en el Congreso del PSOE celebrado en mayo de 2017. Las relaciones entre los dos partidos mejoraron significativamente cuando Pedro Sánchez retomó la dirección del partido.

Siempre bajo la presente influencia del líder histórico del partido, Felipe González, una fuerte corriente dentro del PSOE se negaba

en redondo a cualquier alianza con Podemos y, en cambio, defendía el entendimiento con los partidos de derecha (como Ciudadanos, un partido de derecha liberal nacido en Cataluña y hoy presente en el conjunto del Estado español, con el apoyo de algunos sectores importantes de los medios de comunicación y de intereses económicos poderosos) para garantizar la continuidad del pacto de gobierno y la política de alternancia que venía desde la Transición. Era la reproducción de la política convencional de la socialdemocracia europea constituida en la Guerra Fría y que, tras la caída del Muro de Berlín, se había mantenido en el poder; política que se acabó, como hemos visto, con el Partido Socialista portugués a finales de 2015. Sin embargo, el regreso de Pedro Sánchez revelaba que la militancia socialista estaba dividida al respecto: una, por creer que sin la unidad entre las fuerzas de izquierda esta no volvería nunca más al poder; otra, por pensar que sin un giro a la izquierda que permitiera recuperar los votos que habían permitido que creciera Podemos, el PSOE no podría volver al poder.

Se crearon las condiciones para retomar las conversaciones de confluencia entre el PSOE y Podemos. Por parte de Podemos, ahora había una motivación mucho más intensa para una articulación con toda la izquierda. Se hablaba de la solución portuguesa; se reconocía que las transiciones democráticas en los dos países habían sido diferentes, pero se consideraba que para intentar cambiar la política neoliberal europea era crucial que España, la quinta mayor economía de la UE, pasara a tener un Gobierno de izquierda. Pedro Sánchez tuvo varias reuniones con el primer ministro socialista portugués y consta que discutieron sobre la coalición portuguesa. En Podemos había contactos tanto con el Bloco de Esquerda como con el Partido Comunista Portugués.

En el nuevo ciclo de contactos entre Podemos y el PSOE se trataba de articular reformas políticas, construir acuerdos programáticos y, a largo plazo, promover un gobierno de izquierda que pudiera acabar con los años neoliberales y de corrupción del gobierno del PP. Las señales que facilitaban la confluencia estaban sobre la mesa y

procedían de ambos lados. El PSOE declaraba que Podemos era “un socio preferente” o que el gran objetivo era “un entendimiento de izquierda en el país”.

La crisis de Cataluña

Estábamos en junio de 2017. Pocos meses después, estalló la crisis de Cataluña y las divergencias entre los dos partidos respecto a Cataluña provocaron el colapso de las conversaciones y del objetivo de los acuerdos de gobierno. De hecho, el desarrollo de la crisis mostró que, pese a haberse alejado, los dos partidos se vieron negativamente afectados por el modo en el que se posicionaron ante tal situación.

Para quienes no conocen la crisis de Cataluña, he aquí un breve resumen: al igual que otras regiones de España, principalmente el País Vasco y Galicia, Cataluña tiene una identidad nacional fuerte e históricamente arraigada; esa identidad sufrió una gran represión en la dictadura franquista; tras la transición democrática en 1978 se reconocieron la identidad catalana y su autonomía en el marco del Estado español; a lo largo de las últimas décadas, los catalanes han luchado a través de las vías institucionales para que se amplíe el Estatuto de Autonomía; en 2006 aceptaron el nuevo Estatuto de Autonomía pactado con el Gobierno central, pero el Tribunal Constitucional lo anuló. Desde entonces, las relaciones entre Madrid y Barcelona se crisparon; al mismo tiempo, el partido nacionalista y conservador que llevaba mucho tiempo gobernando en Cataluña (Convergència i Unió, refundado después como Partit Demòcrata Europeu Català), políticamente muy cercano al PP, pasó a defender la independencia como única vía para que Cataluña viera reconocida su identidad y voluntad de autogobierno. El objetivo de la independencia pasó a tener entonces dos brazos políticos: un brazo de derecha y un brazo de izquierda, en el cual habían militado republicanos que nunca se habían reconocido en la monarquía borbónica (antepasados del rey actual), que en el siglo XVIII había derrotado a los independentistas catalanes.

El 1º de octubre de 2017 el Gobierno catalán realizó un referéndum,¹ considerado ilegal por el Gobierno central de Madrid, para conocer la voluntad de los catalanes en cuanto a la independencia. El Gobierno central intentó frenar la celebración del referéndum por la vía judicial y policial, pero, pese a las intimidaciones y la represión, el referéndum se realizó y la mayoría de los que se expresaron con su voto se posicionaron a favor de la independencia. Pocos días después el Gobierno de Cataluña declaró unilateralmente la independencia. El Gobierno central reaccionó activando el artículo 155 de la Constitución, que declaró el estado de excepción en Cataluña; suspendió el Gobierno autonómico, mandó detener a los dirigentes políticos y convocó elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre de 2017, con el objetivo de elegir un nuevo Gobierno; el líder del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, suspendido por las autoridades centrales, se exilió en Bélgica y desde Bruselas busca el apoyo de los países europeos a la causa catalana, apoyo que no llega; posteriormente fue detenido en Alemania cuando entraba desde Dinamarca y puesto en libertad bajo fianza pues la Audiencia Territorial de Schleswig Holstein considera inadmisibile el delito de rebelión.

Se celebraron las elecciones catalanas y los partidos independentistas volvieron a ganar las elecciones; tanto el PSOE como Podemos (que se presentó a las elecciones en una coalición de varias fuerzas de izquierda llamada Catalunya en Comú) salieron derrotados en las elecciones y la derrota de Podemos es especialmente preocupante para el partido por las repercusiones que puede tener fuera de Cataluña; la coalición que había gobernado antes Cataluña (constituida por un partido de derecha, el Pdecat, el más votado; y dos partidos de izquierda: uno de izquierda moderada, Esquerra Republicana de Catalunya, y otro de izquierda-izquierda, la Candidatura d'Unitat Popular) vuelve a posicionarse para gobernar. Mientras escribo estas

¹ Sobre la que consideré una posición de izquierda sobre el referéndum de autodeterminación, se puede ver mi artículo "La izquierda y Catalunya", *Público.es*, 28 de septiembre de 2017.

líneas (31 de enero), el futuro político de Cataluña es una completa incógnita.

¿Cómo puede ser que la crisis de Cataluña haya podido bloquear un acuerdo entre izquierdas considerado fundamental para acabar con el Gobierno conservador, un objetivo compartido por la mayoría de los españoles? Al final, los dos partidos se manifestaron contra el referéndum decidido unilateralmente por los catalanes y ambos defendieron la idea de un Estado plurinacional a fin de la eventual constitución de un Estado federal o confederal; ambos partidos se manifestaron contra la independencia de Cataluña, pero Podemos insistió especialmente en que ese objetivo se debía construir en consenso con los catalanes y no basándose en la represión judicial y policial. Defendió el derecho a decidir de los catalanes, basado en un referéndum “con garantías”, pactado con el conjunto del Estado español.

Sin embargo, las divergencias entre los dos partidos han acabado por agudizarse. La crisis de Cataluña ha llevado al PSOE, al contrario de Podemos, a retroceder en la defensa de la plurinacionalidad del Estado español. La plurinacionalidad (la España como “nación de naciones”) había sido reconocida en el 39º Congreso del partido que reeligió a Pedro Sánchez como secretario general. Con todo, posteriormente la plurinacionalidad dejó de ser el eje central de la propuesta del partido de reforma constitucional. Los dos partidos divergieron fuertemente en el hecho de activar el artículo 155 de la Constitución y en la represión jurídico-judicial en la que este se tradujo. El PSOE se manifestó a favor de la declaración del estado de excepción y, de hecho, acordó con el PP la activación del dispositivo constitucional. Para Podemos, con esta decisión el PSOE volvía a ser uno de los partidos del régimen contra el que había surgido y, por eso, debían suspenderse las negociaciones entre las dos organizaciones. Por lo que respecta al PSOE, el distanciamiento fue correspondido.

Las izquierdas y la identidad nacional

¿Por qué la crisis de Cataluña puede ser especialmente negativa para Podemos? Si nos restringimos a Cataluña, los daños no parecen duraderos. La posición de la alianza en la que se integraba Podemos era la posición aparentemente moderada del fortalecimiento de la autonomía por las vías legales y constitucionales. ¿Pero sería esta la posición de las bases catalanas del partido? ¿Acaso estarían todas con el partido cuando este se mostraba a favor del derecho a decidir y al mismo tiempo insistía en que la independencia no era una buena solución ni para Cataluña ni para España? ¿Defender el derecho a decidir no implicaría el deber de aceptar lo que se decidiera? ¿Por qué insistir tanto en la ilegalidad del referéndum cuando la aplastante mayoría de los catalanes defendía el derecho incondicional a decidir, aunque estuvieran divididos casi por la mitad con relación al objetivo de la independencia?

El hecho de que había divergencias internas se volvió evidente cuando el secretario general de Podemos en Cataluña se declaró a favor de aceptar el resultado de las elecciones de diciembre y, por tanto, la independencia, y no tardó en presentar su dimisión tras mantener una dura pulseada con la dirección estatal del partido. En cualquier caso, en contextos de fuerte polarización es normal que los partidos que defienden posiciones más moderadas sean castigados por los electores, pero esa situación no perdura cuando se atenúa la polarización, lo que puede ocurrir si tenemos presente que el independentismo no tuvo una victoria aplastante, más bien al contrario, y que tanto el extremo de la independencia como el extremo del centralismo (el partido conservador Ciudadanos) fueron los vencedores de las elecciones.

Si tenemos en cuenta a España en su conjunto, la razón de la vulnerabilidad añadida de Podemos después de la crisis de Cataluña se halla en que la identidad nacional en España no es, al contrario que en otros países, una bandera inequívocamente de derecha. Es una bandera de muchos de los movimientos de ciudadanos y ciudadanas

de izquierda que se coaligaron con Podemos en las diferentes regiones autonómicas. Para ellos, era importante que Podemos distinguiera entre legalidad y legitimidad en el caso del referéndum de los catalanes y estuviera sin lugar a duda al lado de los catalanes que desafiaban el centralismo conservador de Madrid para ejercer el derecho más básico de la democracia, el derecho de votar. Solo así tendría sentido que la oposición del partido a la declaración unilateral de independencia tras el resultado del referéndum del 1º de octubre se considerara genuina; una declaración que, no obstante, se suspendió inmediatamente como señal de oferta de diálogo y solicitud de mediación internacional. Teniendo en cuenta lo anterior, quedó la duda de saber de qué lado estaría Podemos en futuras confrontaciones de otras regiones con el centralismo de Madrid.

¿Acaso la dirección de Podemos ha sido insensible a la complejidad de la cuestión de la identidad nacional en España? Los nuevos líderes de la izquierda-izquierda europea, no solo en España sino también en otros países, han sido entrenados para desconfiar de todos los nacionalismos, puesto que en Europa estos fueron mayoritariamente conservadores y estuvieron en el origen de los peores crímenes. Asimismo, fueron entrenadas para dar toda la prioridad a las políticas de clase, aunque en los últimos tiempos complementadas con políticas antipatriarcales y antirraciales. Cabe añadir que en Cataluña la independencia ha sido empuñada como bandera por una derecha que durante décadas había sido servil al Gobierno central y, como Gobierno autonómico, había aplicado con empeño las políticas neoliberales contra los trabajadores catalanes.

Cualquiera de estas dos vertientes del enfrentamiento debe volver a valorarse en los próximos tiempos, no solo en España, sino también en muchos otros países. Para ello, las izquierdas europeas tienen que aprender del Sur global. Con relación al nacionalismo, en los contextos coloniales extraeuropeos este ha sido un objetivo políticamente mucho más complejo. Fue la bandera de los pueblos oprimidos, entre los que evidentemente había diferencias de clase y etnia, entre otras. De ahí que se haya distinguido entre el nacionalismo de los

débiles u oprimidos y el nacionalismo de los fuertes u opresores. Sin embargo, incluso en Europa, esa complejidad ha existido históricamente. Xosé Manuel Beiras habla de “nacionalismos periféricos” al referirse a Galicia y a las diferentes naciones en el interior del Estado español. Andalucía fue quizás el primer territorio de Europa que fue tratado como colonia después de la mal llamada Reconquista. Como han insistido los estudiosos andaluces, las formas coloniales de administración y de concentración de tierras se probaron primero en Andalucía antes de aplicarse en el Nuevo Mundo. Es por esto por lo que el concepto de colonialismo interno se puede aplicar tanto en un contexto latinoamericano como en un contexto europeo. Los nuevos líderes de la izquierda europea nunca han podido aprender en las escuelas y en las universidades que la historia de sus países incluía el colonialismo interno y que hay varios tipos de nacionalismo, tanto en el mundo como en la propia Europa.

Por otro lado, con relación a la prioridad de la política de clase, en el futuro será necesaria una profunda reflexión. He defendido que la dominación moderna está conformada desde el siglo XVI por tres modos principales: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Desde sus orígenes hasta hoy, estos tres modos de dominación siempre han actuado articulados. Las épocas y los contextos sociales de cada país se distinguen por el modo específico de articulación entre los diferentes modos de dominación que prevalece. El colonialismo no ha terminado con el fin del colonialismo histórico. Actualmente, sigue bajo otras formas, como el colonialismo interno, el racismo, la xenofobia y la islamofobia.

La lucha contra la dominación también debe articularse y debe contemplar las tres vertientes, aunque los énfasis y las urgencias obliguen a dar más prioridad a una u otra. Sin embargo, las tres se deben contemplar siempre, por la simple razón de que en ciertos contextos las luchas asumen versiones cambiantes. Por ejemplo, una reivindicación de clase se puede afirmar bajo la forma de reivindicación de identidad nacional, y viceversa. Por tanto, las fuerzas políticas que tienen éxito son las que están más atentas a este carácter

cambiante de las luchas sociales. Pienso que este ha sido el caso de Cataluña. En España, las identidades nacionales son transclasistas y las fuerzas de izquierda no pueden minimizarlas debido a este hecho. Estas tienen que luchar contra las contradicciones para hacer funcionar el transclasismo a favor de una política progresista que fortalezca las posiciones y los intereses de las clases subalternas, populares. La crisis de Cataluña reveló que la “cuestión nacional” de España solo se resuelve con una ruptura democrática con el régimen actual, lo que da por supuesto una nueva Constitución.

Unidos Podemos está muy a tiempo de hacer una reflexión sobre ello y espero que ocurra lo mismo en el PSOE. Si se da este paso, volverá a ser posible pensar en una unidad entre las fuerzas de izquierda consistente, que incluya partidos y movimientos. Sin ella, las izquierdas españolas nunca llegarán al poder con un programa de izquierda, lo que es malo para España y para Europa.

Actualización de agosto de 2018 *(con la colaboración de Antoni Aguiló)*

La moción de censura y los desafíos de las izquierdas

El éxito de la moción de censura presentada por el PSOE y aprobada por mayoría absoluta en el Congreso el pasado 1º de junio, tras el anuncio de la sentencia por el caso Gürtel, que tuvo como resultados condenas para el extesorero, varios dirigentes y personas relacionadas con el Partido Popular, y por primera vez la condena del propio partido por crear en varios territorios un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”,² ha proporcionado un campo de cultivo para una nueva contribución de las

² Sentencia nº 20/2018 de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, 17 de mayo de 2018, 58. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a7bcddcb750b1e4> [consultado el 3 de agosto de 2018].

izquierdas que apunte a nuevos caminos y se haga eco de algunas de las reivindicaciones del 15M en cuanto al agotamiento de un determinado sistema político y partidario.

La moción contra Rajoy, además del apoyo del PSOE, contó con el apoyo de Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Compromís, Nueva Canarias y la coalición vasca EH Bildu, que juntos sumaron 180 votos favorables frente a los 169 votos contrarios del Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias (partidos conservadores que se presentaron a las elecciones en coalición con el PP), con la única abstención de la diputada de la Coalición Canaria (CC).

Este escenario ha hecho que se establezcan algunas comparaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez –que la derecha mediática se apresuró en llamar *Gobierno Frankenstein*– y el Gobierno de António Costa en Portugal –que los opositores definieron desde sus comienzos como jerigonza–. No obstante, a pesar de las apariencias, la comparación resulta forzada si se tiene en cuenta que el Gobierno vigente en Portugal desde 2015 surge tras unas elecciones y, sobre todo, tras el fracaso de la solución presentada por la coalición conservadora liderada por Passos Coelho, que estuvo once días en el poder; mientras que la moción de censura del PSOE surge tras algo más de año y medio –con un intervalo en funciones de casi un año– de que Rajoy estuviera al frente del Gobierno español. Si en 2016 Sánchez hubiera logrado llegar a un acuerdo de gobierno con Unidos Podemos y los nacionalistas, probablemente todo sería diferente. Pero no tuvo poder interno para hacerlo, anunció un acuerdo con Ciudadanos y finalmente fue apartado del liderazgo por el Comité Federal del partido, regresando en 2017 gracias al voto de la militancia.

La diferencia fundamental entre ambos casos no estriba en la legitimidad política de la moción de censura, puesta en duda en el caso español desde las filas del PP, sino en el significado de la llegada al poder. Costa se propuso formar Gobierno en nombre de un programa político para toda la legislatura con un objetivo político muy

concreto en torno al cual articular una mayoría parlamentaria: revertir las políticas de austeridad de la troika y la derecha portuguesa. Para ello tuvo que firmar acuerdos de gobierno con los partidos a su izquierda.

A diferencia de ello, lejos de constituir la base de un amplio acuerdo programático y de gobernabilidad, que ofreciera la posibilidad de conformar un bloque alternativo, el sí a Pedro Sánchez de los partidos que apoyaron la moción de censura suponía en realidad el rechazo a que Mariano Rajoy siguiera siendo presidente. Se trataba, pues, de un acuerdo puntual en clave exclusivamente destituyente, que no contenía una propuesta política vinculada a una mayoría parlamentaria de cambio.

En este contexto, la acción del Gobierno de Pedro Sánchez se debate entre conjugar su anunciada hoja de ruta social con medidas que no choquen con las exigencias de austeridad de la Unión Europea ni con los Presupuestos Generales del Estado de Rajoy para 2018 aprobados en el Congreso y a los que el PSOE se opuso, pero que estratégicamente mantuvo para asegurar su estabilidad, por lo que probablemente emprenderá un programa de pequeñas reformas que no supongan un cambio sustancial de rumbo. En este sentido, el nuevo Gobierno ha anunciado un paquete de medidas moderadas, algunas simbólicas, pero de urgente necesidad, que pueden ayudar al PSOE a recuperar el aliento electoral perdido desde el inicio de la crisis de 2008. El programa de gobierno de Pedro Sánchez planea adoptar medidas de mayor o menor calado en diferentes sectores que podrían acordarse con otros grupos parlamentarios. Estas han promovido el relanzamiento a escala europea del debate migratorio, sobre todo a raíz de la acogida en territorio español del buque *Aquarius*, tratando de crear un eje España-Portugal-Francia-Alemania más moderado, que proponga a la Comisión Europea el reparto rápido de migrantes y asilados por varios países europeos frente a la radicalidad del discurso antinmigración del bloque Italia-Hungría-Polonia.

Su programa también contempla medidas de regeneración democrática, que incluyen la derogación de los aspectos más duros de

la Ley Mordaza y la renovación del Consejo de Administración de RTVE, inesperadamente fallida por la ausencia de dos diputados y la equivocación de otros dos durante la votación.

Del mismo modo, planea medidas en el ámbito de la memoria histórica (la creación de una Dirección General de Memoria Histórica, la decisión de exhumar y trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos, entre otras); del feminismo (recuperación del Ministerio de Igualdad, récord mundial de ministras, ley para asegurar la igualdad de género en el empleo, ley de igualdad salarial, reforma del código penal sobre delitos sexuales contra mujeres, recuperación del acceso gratuito a la reproducción asistida para lesbianas y mujeres solteras, etcétera); en el ámbito de los derechos sociales y las libertades civiles (propuesta sobre la regulación de la eutanasia y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, a petición de Unidos Podemos); de las políticas sociales destinadas a la mejora del Estado de bienestar (aumento de las pensiones de jubilación, devolución de la sanidad universal, eliminación del copago farmacéutico para los pensionados, recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, aumento de impuestos para las grandes empresas, creación de un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años, etcétera); y en el ámbito de las energías renovables (Ley de Transición Energética y Cambio Climático).

Igualmente prevé actuaciones en lo que se refiere a la reactivación del diálogo bilateral con el Gobierno de Cataluña, constituido tras las elecciones catalanas de diciembre de 2017 y el levantamiento del artículo 155, a fin de normalizar las relaciones con el Ejecutivo catalán de Quim Torra. La principal estrategia del Gobierno de Sánchez pasa por llevar la crisis de Cataluña del plano jurídico-represivo al político, lo que se ha traducido en una política de gestos de distensión que incluyen el traslado de los presos preventivos independentistas a cárceles catalanas y el encuentro entre Sánchez y Torra tras más de

dos años sin que un presidente de la Generalitat fuera recibido en la Moncloa. Sin embargo, la desjudicialización del conflicto implicaría también, por un lado, que la Fiscalía General del Estado (dependiente del Gobierno) se replantee su estrategia judicial con respecto a las peticiones de condena para los encausados independentistas, teniendo en cuenta que la justicia alemana se niega a juzgar por un delito de rebelión al expresidente en el exilio Carles Puigdemont, así como, por otro lado, el levantamiento de los vetos que hay en el Tribunal Constitucional a leyes catalanas sobre materias como pobreza energética, cambio climático y universalidad de la sanidad. Además, Sánchez mantiene por ahora (agosto de 2018) el control económico sobre las cuentas de la Generalitat. Más allá de las buenas intenciones y de la voluntad recíproca de cooperación, las posturas parecen inamovibles. La reforma constitucional en clave federal no está entre las opciones viables del Gobierno español, dado el corto plazo del que dispone la legislatura, mientras que el Gobierno de Cataluña insiste en que la autodeterminación sigue siendo un asunto central.

En el caso político español, el interregno actualmente abierto remite a las preguntas-desafío planteadas en el prefacio de esta edición, sobre todo si creemos que la unidad de las izquierdas y de las luchas emancipadoras no solo es deseable, sino también posible y necesaria.

Adenda sobre otros contextos

Las cuestiones tratadas en este texto, aunque con otros matices y otras composiciones, están presentes en otros contextos. En el sentido que le he atribuido al concepto de izquierda en este libro, pienso que la dicotomía y la oposición entre izquierda y derecha está presente globalmente, al menos cuando se trata de regímenes políticos democráticos, aunque estos sean democracias de bajísima intensidad. Obviamente, esta oposición puede formularse en términos que no responden a la dicotomía izquierda/derecha, pero eso no interfiere en la cuestión sustantiva de las diferencias y en las condiciones para la articulación entre las fuerzas políticas organizadas. Un tema relacionado con este y no abordado en el presente libro es el cuestionamiento de la dicotomía izquierda/derecha incluso en contextos en los que ha sido uno de los pilares del sistema político en vigor. A partir del momento en el que los regímenes políticos democráticos dejaron de contemplar la posibilidad de optar por otro régimen económico que no fuera el capitalista (simbólicamente desde la caída del Muro de Berlín), el cuestionamiento de la distinción entre izquierda y derecha se volvió más común. El surgimiento reciente del populismo ha dado una nueva amplitud a este cuestionamiento. Sin embargo, como defendí en otro lugar,¹ hay diferentes populismos y

¹ Véase en mi libro *La difícil democracia: una mirada desde la periferia europea*, op. cit., 257-267.

las diferencias revelan la presencia de la oposición entre izquierda y derecha aunque no se utilicen estos conceptos. Otra vertiente del mismo cuestionamiento es la aparición de nuevas fuerzas políticas que se consideran de izquierda, pero ven refutada esa caracterización por otras fuerzas de izquierda. Uno de los casos más interesante es el partido Economic Freedom Fighters de Sudáfrica, creado por Julius Malema, antiguo líder de la Liga Juvenil del ANC (Congreso Nacional Africano), partido que protagonizó la lucha contra el *apartheid*. A pesar de que el partido se autodefine como “marxista-leninista-fanoniano” y defiende políticas similares a las que defendieron algunos movimientos africanos de liberación nacional contra el colonialismo, ha sido considerado fascitizante no solo por partidos de derecha, sino también por partidos de izquierda.

En este libro me he centrado en el tema de la unidad de las izquierdas. Entre muchas otras condiciones que pueden afectar la unidad de las izquierdas en contextos preelectorales, he identificado algunas, vinculándolas a países específicos, teniendo en cuenta que todas ellas ocurren en un contexto común: la virulencia del gobierno fascitizante neoliberal de la derecha conservadora que he ilustrado con el caso de Portugal. Las condiciones que he considerado que tienen un valor explicativo especial en cada país han sido: la fractura del desgaste del gobierno (Brasil), la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio (Colombia), la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad (México) y la fractura de la identidad nacional (España). He tratado de identificar condiciones dominantes siendo consciente de que además de estas hay otras presentes.

A su vez, cualquiera de estas condiciones analizadas puede estar presente en otros países y contextos y puede asumir configuraciones diferentes. Por ejemplo, la fractura por el desgaste del gobierno puede estar presente en Italia con el deterioro socioliberal del Partido Democrático que, en parte, se encuentra en el origen del surgimiento y el crecimiento de un partido antisistema, el Movimiento Cinco Estrellas, de Beppe Grillo. El éxito electoral del Movimiento Cinco Estrellas y de la Liga Norte (antes llamada Liga Lombarda, separatista,

nacionalista, de derecha, por no decir de extrema derecha) en las elecciones de marzo de 2018 llevaron a la constitución de un gobierno de ultraderecha alineado con los partidos de la derecha más conservadora actualmente en el gobierno en Austria, Hungría y Polonia. Por otro lado, tras el desastroso gobierno del Partido Socialista, liderado por François Hollande, en un intento tardío de someterse al orden neoliberal, las perspectivas para la izquierda en Francia son igualmente muy poco alentadoras. Lo mismo se puede decir del desgaste del largo gobierno del Partido del Congreso en la India, que conllevó la creación de otro partido considerado de izquierda, el AAP, que tiene como lema central la lucha contra la corrupción. Este desgaste acabó por dejarle la vía libre al BJP, liderado por Modi, un partido conservador fascitizante, que combina el servilismo al credo neoliberal con la politización del hinduismo, al que transforma en un instrumento de discriminación contra los musulmanes.

La fractura por el desgaste del gobierno está presente con toda certeza en varios países africanos, sobre todo si se tiene presente que han sido sometidos con especial violencia a las imposiciones del neoliberalismo y del capital financiero. Por ejemplo, es el caso del ANC en Sudáfrica. El desgaste del gobierno ha llevado al surgimiento de otras fuerzas políticas, como referí arriba, en tanto que se agravan las divisiones internas en el ANC. En parte, por las mismas razones de contexto internacional, podemos detectar el efecto del desgaste del gobierno en países como Mozambique y Angola, donde siguen gobernando los partidos que lideran las luchas de liberación contra el colonialismo portugués.

A su vez, la fractura de la lucha armada condiciona las posibilidades de articulación entre las fuerzas de izquierda en Turquía (la cuestión kurda), la India (los naxalitas) y Filipinas (las luchas étnicas musulmanas). Durante mucho tiempo, Sri Lanka fue un país políticamente condicionado por la lucha armada de los tamiles.

La fractura de la institucionalidad/extraintitucionalidad está presente en Túnez, Argentina y Perú, y provoca el surgimiento de la distinción propuesta por los zapatistas entre la *izquierda de abajo* y

la *izquierda de arriba*. Por último, la fractura de la identidad nacional surge de formas muy distintas (discriminación racial, xenofobia, internamiento indigno de refugiados, etcétera) en muchos países de Europa debido a la herencia colonial y crea múltiples obstáculos a las articulaciones entre fuerzas de izquierda. Son los casos, por ejemplo, de Alemania, Inglaterra y Holanda. Y sucede lo mismo con Bernie Sanders y otras fuerzas de izquierda a la sombra del Partido Demócrata estadounidense y la importancia relativa que dan a la discriminación y la violencia policial contra la población afroamericana.

Al mismo tiempo, se debe tener presente que a veces las condiciones analizadas aquí no afectan solo las posibilidades de articulación entre las fuerzas de izquierda, sino que también provocan divisiones en el interior de cada una, lo que vuelve más difícil aún cualquier política de alianzas. Es el caso del Partido Laborista en el Reino Unido, que en los últimos tiempos ha sufrido una fuerte convulsión interna de la que todavía no se ha recuperado plenamente.

Conclusión

Frecuentemente reclamamos la necesidad de hacer análisis concretos de situaciones concretas, pero la verdad es que pocas veces acabamos por concretar. Las diferentes fuerzas de izquierda deben continuar afirmando su diversidad y analizando la sociedad con una visión de mediano y largo plazo. El tema abordado en este texto pretende responder a un contexto específico, un contexto en el que las fuerzas de izquierda tienen que ser más humildes y más ambiciosas al mismo tiempo. Tienen que ser más humildes porque deben actuar en un mundo donde el objetivo de construir un sistema globalmente alternativo al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado no está en la agenda política. Esta ausencia crea un vacío que por ahora solo parece poder colmarse con alternativas locales e iniciativas que proyecten una sociedad alternativa. No obstante, estas deben ser más ambiciosas, porque, teniendo en cuenta el panorama actual, solo las izquierdas pueden salvar a la humanidad de los efectos más destructivos y del inmenso sufrimiento humano derivados de una catástrofe social y ambiental que no parece estar lejos.

Esa defensa consiste en la defensa de la dignidad humana y de la dignidad de la naturaleza a través de la radicalización de la democracia, una democracia de alta intensidad, necesariamente posliberal. Será un proceso histórico largo, caracterizado por dos principios guía: revolucionar la democracia y democratizar la revolución. En el

punto en el que hemos llegado al fin del nuevo (des)orden neoliberal iniciado en 1989, es necesario comenzar con pequeños pasos. El contexto es de fascismo social y político difuso. Pese a ello, el proceso de radicalización se enfrenta a dos grandes dificultades.

La primera es que tiene que empezar por la democracia liberal, pero no terminar en ella. Tiene que tomársela en serio e implicarse a fondo en ella, sin dejarse corromper por ella. Tiene que defenderla hasta el punto de convencer a públicos amplios de que la democracia no puede defenderse si no adopta mecanismos y amplía los campos democráticos mucho más allá de los límites de la democracia liberal. Las izquierdas siempre se han situado en el lado opuesto de la democracia liberal para denunciar los límites, las mentiras y las exclusiones ocultas por el lado derecho de esta. Hoy en día se sienten llamadas a actuar en el lado derecho de la democracia liberal, pero saben que en el momento en el que pierdan de vista las realidades del lado opuesto estarán perdidas.

La segunda dificultad consiste en que las izquierdas tienen que operar simultáneamente a largo y corto plazo, lo que va contra toda la lógica de la democracia liberal, una lógica que muchas fuerzas de izquierda han interiorizado demasiado. La razón de afirmar con frecuencia y con alguna verdad que la derecha identifica mejor sus intereses que la izquierda es porque, al contrario de la izquierda, la derecha, como el capitalismo, solo puede ver y solo tiene que ver a corto plazo, puesto que así los beneficios y las pérdidas son más fáciles de identificar. Al final de esta reflexión, quizá sea posible responder a una pregunta intrigante: ¿por qué los partidos de izquierda, que durante décadas han sido muy críticos con la democracia liberal, son hoy sus mejores y más genuinos defensores? ¿Y por qué lo hacen cuando el quiebre de la democracia liberal parece evidente? La respuesta es la siguiente. El neoliberalismo y el capital financiero global son enemigos de la democracia, sea esta de alta o de baja intensidad, y las fuerzas de derecha que opten por seguir los dictámenes de aquellos tendrán que optar cada vez más por políticas antidemocráticas. A medida que la derecha se consolide en el poder, la democracia irá

perdiendo su carácter, hasta tal punto que el nuevo régimen político, aún sin nombre, será una nueva forma de dictadura disfrazada de fachada democrática. Ahora bien, las izquierdas siempre han estado en primera línea en la lucha contra las dictaduras, y la lucha antifascista ha sido el objetivo por el que más veces han llegado a una coalición. Las izquierdas han empezado a entender que las fuerzas antidemocráticas están secuestrando la democracia y que, cuando esto ocurre, el fascismo no está lejos, si es que ya no está entre nosotros. Esta sensación de peligro inminente es lo que explica mejor la nueva voluntad de articulación entre las fuerzas de izquierda.

Y, teniendo en cuenta que los enemigos de la democracia actúan de manera global, será crucial que las fuerzas de izquierda se articulen no solo a escala nacional, sino también globalmente. El socialismo como democracia sin fin podría ser el lema de una nueva internacional de las izquierdas. De cualquier modo, la nueva internacional, al contrario de las anteriores, no tendría como objetivo crear ninguna organización ni mucho menos definir la línea política correcta. Solo pretendería crear un foro en el que las izquierdas de todo el mundo pudieran aprender unas de las otras los tipos de obstáculos que surgen cuando se busca articular luchas y unir fuerzas, en qué contextos puede ser deseable dicha articulación y qué ocurre cuando tal articulación o unidad no se da. En este sentido, podría acordarse el lema:

Izquierdas del mundo, ¡únanse!

Otros ensayos

Ecuador: del centro al fin del mundo

Como su propio nombre indica, Ecuador está situado geográficamente en el centro del mundo. Todo lleva a creer que el neoliberalismo ha decidido llevar a cabo su agenda de fin del mundo en este país. Como es sabido, el neoliberalismo es la versión más antisocial del capitalismo global porque está estrictamente vinculada a los intereses del capital financiero. No reconoce otra libertad que la libertad económica, por lo que le resulta fácil sacrificar todas las demás. Por cierto, es bueno que los portugueses sepan esto con respecto al partido Iniciativa Liberal, la versión más tardía del liberalismo en forma de bancarrota. La especificidad de la libertad económica es que se ejerce en la medida exacta del poder económico que uno tiene para ejercerla y, por tanto, su ejercicio siempre implica una forma de imposición asimétrica sobre los grupos sociales que tienen menos poder y una forma de violencia brutal sobre los que no tienen poder, la gran mayoría de la población empobrecida del mundo. Tal imposición y violencia siempre se traduce en la transferencia de riqueza de los pobres (traducida en las magras políticas de protección social del Estado) a los ricos y en el saqueo de los recursos naturales, así como de los activos económicos, cuando los hay. El Fondo Monetario Internacional es el agente encargado de legalizar el robo en el que se traducen las políticas de austeridad impuestas por el capitalismo financiero.

El robo es tan evidente hasta el punto de que el montante de los préstamos casi siempre equivale a los beneficios públicamente contabilizados que se ofrecen a los acreedores internacionales y a las grandes corporaciones multinacionales que se articulan con ellos. Los casos más recientes de este proceso van desde Grecia hasta Portugal (2011-2015), desde Argentina hasta Brasil y muchos países africanos. Lo que está sucediendo en Ecuador representa el paroxismo, el momento de máxima intensidad de la voluntad destructiva del neoliberalismo. Con el fin de salvaguardar el derecho al robo legal por parte de los acreedores y las empresas multinacionales, el país se incendia socialmente, se declara un Estado de excepción rápidamente legitimado por una Corte Constitucional cómplice, se movilizan las Fuerzas Armadas entrenadas por la infame Escuela de las Américas (hoy con un nombre diferente que borra la historia para mantener los propósitos) a fin de ejercitarse en la lucha contra los enemigos internos, es decir, las grandes mayorías empobrecidas, se asesina y hiere a los manifestantes y se provoca la desaparición de cientos de niños. Es una estrategia maximalista y de fin del mundo dispuesta a arrasar el país para hacer cumplir la voluntad imperial y de las élites locales a su servicio.

Lo más trágico de todo es que Ecuador fue el país de la esperanza en la primera década de este siglo. Tuve el placer de ser consultor en la elaboración de una de las constituciones más progresistas del mundo, la Constitución de 2008, la primera que en su articulado consagró los derechos de la naturaleza y ofreció una alternativa al desarrollo capitalista. Una alternativa que se basaba en los principios de armonía con la naturaleza y de reciprocidad que los pueblos indígenas siempre han practicado, un modelo de vida que, por resultar tan extraño a la lógica occidental, tuvo que consagrarse en su versión original, en lengua quechua, el *suma kawsay*, traducido imperfectamente por buen vivir. Los años siguientes fueron años de experimentación innovadora y grandes expectativas, de manera especial para los pueblos indígenas que, sobre todo desde 1990, venían luchando por el reconocimiento de sus derechos, el respeto de sus

formas de vida y la dignidad de su existencia como supervivientes del gran genocidio colonial moderno, perpetuado hoy por el nuevo colonialismo y el racismo que durante décadas caracterizó tanto a los partidos políticos de derecha como de izquierda.

La presidencia de la República la ocupaba Rafael Correa, un gran comunicador, sin gran arraigo en los movimientos sociales, con un discurso antimperialista, siempre polémico en sus posiciones y poco tolerante con las divergencias en su propio campo político. A pesar de ello, realizó un trabajo notable de renegociación de la deuda externa y de redistribución social, aunque erróneo y tal vez insostenible por dos razones principales. Por un lado, tenía dificultades para reconocer en los pueblos indígenas algo más que gente pobre; sus derechos colectivos, su cultura y su historia apenas contaban; la redistribución social implicaba centralismo de Estado y la liquidación de las autonomías territoriales del autogobierno indígena, garantizadas al menos desde la Constitución de 1998; pronto trabajó duro por demonizar a los líderes indígenas. Por otro lado, en contra de la Constitución e invocando dificultades financieras, adoptó el modelo de desarrollo capitalista neoextractivista (centrado en la extracción de recursos naturales, especialmente petróleo), aunque dando preferencia a los inversores chinos en detrimento de los inversores norteamericanos tradicionalmente presentes. En los últimos años, Correa fue abandonado por una buena parte de la izquierda ecuatoriana, no solo por su desarrollismo, sino por su virulencia contra los líderes indígenas. Yo mismo fui crítico con Correa, pero nunca compartí los excesos de cierta izquierda, ungida por la izquierda ecologista europea, que llegó a considerar a Correa como un líder autoritario de extrema derecha. Hoy deben estar experimentando un baño de realidad sobre lo que verdaderamente es la extrema derecha en Ecuador y en todo el subcontinente.

Rafael Correa estuvo en el poder entre 2007 y 2017 y fue relevado por su vicepresidente durante varios años, ahora presidente, Lenín Moreno. Inicialmente, dio la idea de que lo que cambiaría solo sería el estilo de gobierno, no la sustancia. Sin embargo, quien conocía

los antecedentes de Moreno debería haber estado estar más atento. Nadie se dio cuenta de que la persecución judicial contra Correa por presunta corrupción, que Moreno patrocinó, no era más que otra versión de la nueva estrategia estadounidense para neutralizar a los gobernantes que pusieran en peligro los intereses de las empresas estadounidenses, especialmente en el sector petrolero: la supuesta lucha contra la corrupción. Fue así contra Lula da Silva y Cristina Kirchner, entre muchos otros. Poco a poco, Moreno fue mostrando su verdadero propósito: realinear Ecuador con los intereses de Estados Unidos. El acuerdo con el FMI culminó la celebración de esta alianza. El llamado “paquetazo” decretado el 1 de octubre, el paquete de medidas de austeridad, es de una violencia extrema para las familias de bajos ingresos, la gran mayoría de la población ecuatoriana.

La trágica trayectoria de las recetas del FMI es de sobra conocida. Nunca dan nada más que buenos negocios para sus inversores. Siempre resultan en el empobrecimiento de las grandes mayorías. A pesar de ello, o tal vez por ello, siguen aplicándose y, cada vez que se aplican, se anuncian como la única alternativa para salvar el país. Que el FMI sea indiferente a las desastrosas consecuencias sociales de sus recetas no resulta sorprendente, porque no se puede exigir que el capitalismo haga otra filantropía que la que redunde en su propio interés (y por tanto no es verdadera filantropía). Lo sorprendente es que Lenín Moreno parece no recordar que la resistencia de los pueblos indígenas, una resistencia aprendida a lo largo de los siglos, ya ha derribado a tres presidentes desde 1990, y es muy probable que él sea el próximo. Lo más trágico para el pueblo ecuatoriano es que los anteriores derrocamientos presidenciales (1997, 2000, 2005) fueron mucho menos violentos de lo que se anuncia para el siguiente. La tímida declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya incapacidad para defender con autonomía los derechos humanos es bien conocida, es una señal de los tiempos autoritarios en los que nos encontramos.

Tras doce días de lucha, Moreno cedió. Derogó el decreto 883 que estableció las políticas de austeridad (sobre todo, la práctica

duplicación del precio de la gasolina). Es un paso atrás de supervivencia política, pero mal disfrazado. El decreto 894 comienza justificando la derogación del decreto 883 por razones técnicas (que no son otras que la imposibilidad de aplicarlo debido a la resistencia del pueblo), para luego esgrimir razones de paz social y concordia y anunciar el propósito de negociar con las organizaciones sociales las nuevas medidas. El artículo 2 del nuevo decreto estipula que los subsidios se mantendrán y solo se racionalizarán y enfocarán para que no se beneficien de ellos quienes no los necesitan o los usan para el contrabando. Si este fuese el propósito inicial, el país no habría reaccionado como lo hizo.

A dos años del fin de su mandato, Moreno sabe que esta cesión es una derrota personal que le saldrá cara en un futuro próximo. Todos recordarán la arrogancia de su propósito inicial de llevar la austeridad adelante a cualquier precio. Este discurso se dirigía al FMI y no al pueblo ecuatoriano. El nuevo discurso, con un toque patético y supuestamente conmovido, es un discurso dirigido al pueblo ecuatoriano y es poco más que un discurso de rendición. De hecho, la principal derrota no es la de Lenín Moreno, sino la del FMI y sus políticas de austeridad. Las últimas maniobras se abortaron, como se dice en la jerga militar. Tal y como se abortaron en Argentina. Y otros países seguirán. Las dificultades del FMI reflejan el declive del neoliberalismo en esta segunda década del siglo.

Los antecedentes de Moreno, ahora más expuestos, hacen que el pueblo ecuatoriano no se desarme en la nueva fase de lucha. Con su lucha, están dando una lección al mundo: el poder injusto, por fuerte que sea, siempre tiene un punto vulnerable, su injusticia y la resistencia pacífica y organizada contra ella.

Traducción de Antoni Aguiló

Evo Morales: el indio fuera de lugar

Los dramáticos acontecimientos en Bolivia han seguido un guión imperial que los latinoamericanos empiezan a conocer bien: preparar el cambio de régimen de un gobierno considerado hostil a los intereses de los Estados Unidos (o mejor, de las multinacionales norteamericanas). Lo hacen montando un plan doble: anular una victoria electoral “enemiga” y consolidar rápidamente el nuevo régimen que toma medidas que no son propias de un gobierno de transición. Ciertamente nos sorprende lo que pasó, pero también el modo inmediato como fue comentado, de modo mayoritariamente desfavorable al gobierno de Evo Morales y desde cuadrantes ideológicos supuestamente opuestos. Propongo contribuir a este debate pues veo en los recientes acontecimientos en Bolivia las semillas de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Empiezo por enumerar cómo vi la emergencia de Evo en la escena internacional, para abordar luego los principales logros de su gobierno en contrapunto con sus fracasos, algunos de los cuales criticqué oportunamente. Terminó con una evaluación con la mirada puesta en el futuro no solo de los procesos políticos del continente, sino también de los comentarios críticos por parte de sectores de izquierda y feministas.

Situando la emergencia de Evo y la difícil solidaridad crítica

Hace más de una década, el 12 de abril de 2007, en un texto titulado “Aprender con el Sur” escribí: “Cuando, en 1537, el Papa Paulo III decretó en la bula *Sublimis Deus* que los indios tenían alma, abrió un largo proceso histórico que concluyó con la elección, en 2005, del primer indio presidente de un país: Evo Morales, en Bolivia. Con el 62% de población indígena, Bolivia es uno de los países de América Latina más ricos en recursos naturales y también uno de los más pobres... El proceso boliviano es frágil y con desenlace incierto. En Santa Cruz de la Sierra, centro del capitalismo agrario, vi constituyentes indígenas siendo insultados y agredidos por grupos de extrema derecha. Lo que me impresionó en la actitud de los constituyentes fue que, a diferencia de la izquierda europea hegemónica, son militantes de causas, no funcionarios de cosas”.

Acompañé en los años siguientes el proceso político iniciado con la victoria electoral de Evo Morales. Así, el 3 de febrero de 2009 escribía:

El pasado 25 de enero participé, en calidad de observador internacional, en el referendo constitucional de Bolivia. La consulta consistía en dos preguntas: una sobre si se aprueba o no la nueva Constitución Política aprobada en diciembre de 2007 en la Asamblea Constituyente y modificada por negociación política en el Congreso en octubre de 2008; y otra pregunta, acerca del tamaño máximo de la propiedad de la tierra: 5.000 o 10.000 hectáreas. Tuve la sensación de estar testimoniando un acontecimiento histórico, uno de los más consistentes ejercicios de democracia de alta intensidad de nuestro tiempo. Hace mucho no presenciaba un acto electoral tan participativo (más del 80% de votantes), tan intensamente vivido como fiesta democrática, tan bien preparado desde el punto de vista logístico y de capacitación electoral... Independientemente de su resultado, el referendo fue una lección de democracia dada por un pueblo que mostró una vocación extraordinaria para someter a la voluntad popular las decisiones políticas más trascendentes... Se trata de un proceso histó-

rico muy rico, pero también muy contradictorio y lleno de riesgos. Identifico dos riesgos principales.

El primer riesgo se refiere a la relación siempre tensa entre democracia y justicia social. Aquellos que hace años se alarmaron con una indagación del PNUD que declaraba a los latinoamericanos listos a sacrificar la democracia por una dictadura que les garantice algún tipo de bienestar, tendrán que revisar su posición: si tuviesen una alternativa democrática creíble, los latinoamericanos la apoyarían con entusiasmo en la expectativa de que genere justicia social. ¿Y si ello no ocurriera? Aquí reside el primer riesgo: altas expectativas conducen a grandes frustraciones y los resultados son imprevisibles. Este riesgo es más serio en Bolivia en tanto las dos preguntas del referendo estaban centradas en una idea fuerte y multidimensional de la justicia social, incluyendo dimensiones socioeconómicas, históricas, culturales y étnicas. 61,47% de los bolivianos votaron a favor de la nueva Constitución y 80,66% a favor de las 5.000 hectáreas como extensión máxima para la propiedad de la tierra. Estamos ante un nuevo constitucionalismo, un constitucionalismo transformador que se asienta más en la iniciativa popular que en la iniciativa de las élites, que celebra la diversidad cultural, étnica y racial de los países en lugar de tener de ellos una visión supuestamente homogénea y siempre reductora. Pero toda esta energía ciudadana, siendo suficientemente fuerte para producir textos constitucionales innovadores, ¿será igualmente fuerte para transformarlos en realidad? Si no lo fuese, el riesgo es grande.

El segundo riesgo reside en la capacidad del proceso constituyente de crear una nueva hegemonía democrática que neutralice la pulsión golpista, tan evidente en el primer semestre de 2008. El potencial redistributivo de la nueva Constitución afecta en el plano económico a una clase social dominante que no parece dispuesta a perder sus privilegios. La oposición boliviana está hoy dividida entre un sector que ve en Evo Morales un adversario a derrotar en las urnas y otro sector que lo ve como enemigo, encima indio, al cual abatir por cualquier medio. Al contrario de lo que difunden los grandes medios, el gobierno de Evo Morales ha demostrado una enorme disponibilidad para la negociación. Solo para dar un ejemplo: con-

trariamente al texto constitucional aprobado en diciembre de 2007 por la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución Política, salida de las negociaciones del Congreso en octubre de 2008, no se aplica retroactivamente en relación al tamaño máximo de la propiedad de la tierra. La gran propiedad de la tierra, mientras sea utilizada productivamente, no será afectada (tal como ocurre en Brasil). A pesar de ello, el segundo riesgo (el del colapso de la democracia) es real y para neutralizar a Bolivia requiere del apoyo regional.

Y en agosto de 2012 escribí:

¿Quién podría imaginar hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo, el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue por medio de la defensa de estos derechos que conquistaron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que, una vez conquistado, el poder se vuelva tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon para que él fuera poder? ¿Por qué razón, siendo un poder de las mayorías más pobres, es ejercido a favor de las minorías más ricas? [...] En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone, sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas, la construcción de una carretera en territorio indígena (el Parque Nacional TIPNIS) para drenar recursos naturales... El neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser tierra y las poblaciones que en ellos habitan, obstáculos para el desarrollo que es necesario promover lo antes posible. Para el capitalismo extractivista la única regulación verdaderamente aceptable es la autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la corrupción de los gobiernos. Cuando la democracia asuma que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida oponerle resistencia, puede que sea demasiado tarde. Mientras tanto, puede que el capitalismo ya haya concluido que la democracia no es compatible con él.

Aciertos y logros del gobierno de Evo

En el primer Gobierno de Evo Morales (2006-2010), el más avanzado en términos de transformaciones sustantivas, se destaca el cumplimiento de la llamada “Agenda de Octubre”, con dos medidas esenciales en Bolivia: a) la nacionalización de los hidrocarburos, producida con mucho simbolismo el 1º de mayo de 2006 (algunos críticos sostienen que en realidad fue una renegociación de contratos con las petroleras); y, b) la Asamblea Constituyente, que luego de un difícil camino condujo a la aprobación en referendo (enero de 2009) de una nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.

Con la nacionalización de los hidrocarburos y de empresas estratégicas como la de telecomunicaciones (Entel), que coincidió con un período de bonanza por efecto del incremento de los precios internacionales de materias primas, el Estado boliviano salió de su condición de mendigo (el “Estado con huecos”) y con Evo Morales se avanzó hacia un Estado fuerte con presencia territorial. La inversión pública se convirtió en la fuente principal de un modelo de crecimiento, estabilidad económica y redistribución elogiado por todos los organismos internacionales. Pese a dificultades y demoras, se dieron pasos importantes para avanzar en la anhelada industrialización de los hidrocarburos, así como en otros grandes emprendimientos (generación de electricidad, explotación del hierro, explotación de las reservas de litio).

La nueva Constitución trajo consigo avances y logros fundamentales en el marco del nuevo modelo de Estado Plurinacional y con autonomías. Un acierto fundamental fue el reconocimiento constitucional del sujeto “indígena originario campesino” y su inclusión en la estructura estatal y en el ámbito público-político. La plurinacionalidad del Estado es un logro en construcción cuyo mayor impulso es obra del Pacto de Unidad que en su momento unificó a las organizaciones matrices. Se avanzó también en el camino de largo plazo de las autonomías en diferentes niveles territoriales, incluido el autogobierno indígena.

Por supuesto que no puede dejar de señalarse como logro fundamental la reducción importante de las brechas de desigualdad y, en especial, de pobreza. Durante el período de Gobierno de Evo, según datos oficiales, la pobreza se redujo del 59,9 % al 34,6 %, en tanto que la pobreza extrema bajó del 38,2 al 15,2%. Contribuyeron a ello diferentes bonos destinados a sectores vulnerables (Renta Dignidad para adultos mayores, Bono Juancito Pinto para niños en edad escolar, Bono Juana Azurduy para mujeres embarazadas). Diferentes estudios de organismos internacionales como el PNUD, destacan también como logro del Gobierno de Evo Morales la inclusión social de la nueva clase media (“emergente”), como resultado del hecho de que las personas con ingresos medios pasaron de 3,3 millones (2005) a siete millones (2018). Hay un debate sobre la sostenibilidad de este importante ensanchamiento de la clase media en Bolivia.

Son destacables también en el gobierno de Morales, como resultado del nuevo marco constitucional y normativo, los importantes avances en materia de equidad de género, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, en especial, presencia paritaria de mujeres electas en los órganos legislativos de todos los niveles (Asamblea Legislativa Plurinacional, asambleas departamentales, concejos municipales). Ello ha sido posible por el impulso permanente de organizaciones de mujeres.

Hay otros logros evidentes en materia de reducción de desigualdades, inclusión social, reducción drástica del analfabetismo, indicadores macroeconómicos favorables (Bolivia lideró los últimos años el crecimiento económico en América del Sur), reducción a la mitad de la tasa de desempleo (de 8,1 a 4,2%), incremento sostenido del salario mínimo, aumento de la expectativa de vida, inversión pública notable en infraestructura (en especial carreteras y miles de obras en provincias y área rural), entre otros. En todo caso, un logro sustantivo, que no puede medirse con indicadores, tiene que ver con la reafirmación de la dignidad y la soberanía de Bolivia en el contexto internacional.

Errores y fracasos del gobierno de Evo

Así como hubo innegables logros en el Gobierno de Evo Morales, también existieron fracasos y errores graves. Sin duda un error sustantivo fue haber burocratizado el proceso de cambio con el alejamiento, cooptación o división de las organizaciones y movimientos sociales. Cuando más se requería de organizaciones fuertes y autónomas que vigilen y preserven las conquistas, desde el Estado se las debilitó con arreglo a cargos y prebendas a favor de sus dirigencias. Un fracaso que he señalado en algunos textos es la temprana desconstitucionalización, esto es, la no aplicación del texto constitucional. En el proceso posconstituyente hubo debilidad desde el Gobierno para implementar algunos grandes principios de la Constitución, en especial en cuanto al ejercicio (no solo reconocimiento) de derechos.

Hay que mencionar también los equívocos de gestión gubernamental como el fallido “gasolinazo” (2010), el quiebre con indígenas de tierras bajas por el mencionado afán de construir una carretera a través del TIPNIS (2011), la persistente apuesta por un modelo desarrollista asentado en megaproyectos y emprendimientos extractivistas, el no respeto a la consulta previa y otras políticas en beneficio de la alianza oficial con el sector agroindustrial cruceño.

Ciertamente, en términos democráticos, un punto de quiebre fue la convocatoria y el posterior desconocimiento del resultado vinculante del referendo sobre la reelección (febrero de 2016), en el cual poco más del 51% de la población rechazó la reforma del artículo 168 de la Constitución que impide la posibilidad de una nueva repostulación del binomio del MAS. Por otro lado, el proceso de cambio tuvo dificultades en renovar los liderazgos y se volvió “Evo-dependiente”.

Fueron impuestos asimismo límites desde el Estado a su propia cualidad plurinacional y autonómica reconocida en la Constitución Política. Pese al impulso inicial, hubo trabas y múltiples requisitos para la conformación de autonomías indígena originario campesinas, en las cuales al parecer el Gobierno no creía. Pasó lo mismo en

general con el proceso autonómico, cuyos avances fueron lentos por varias razones.

Por último, no puede dejar de mencionarse como fallo la subordinación de la justicia indígena a la jurisdicción ordinaria, pese al reconocimiento constitucional, en sentido fuerte, del pluralismo jurídico. Y el principio fundamental del Vivir Bien, asumido desde las naciones y pueblos indígenas como alternativa al desarrollo, se fue diluyendo en la ya mencionada apuesta del gobierno de Evo por una agenda nacional-popular expresada en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que requiere una evaluación especial.

La caída de Evo: el golpe imperial y de las élites locales

Si los errores sobrepasasen los logros, lo más “natural” en democracia es que Evo Morales perdiese las elecciones. No fue eso lo que sucedió. La caída de Evo fue resultado de un golpe de Estado. La derecha y alguna izquierda interna y la derecha internacional cuestionaron la idea de golpe. Sostuvieron que no hubo golpe sino “fraude monumental”, concentrando su mirada en la protesta, en esencia urbana y de clase media tradicional, que estuvo 21 días en paro cívico contra el resultado de los comicios, que Evo volvió a ganar (como fue reconocido hasta por la OEA). Al cuestionar la habilitación del binomio del MAS pese al resultado vinculante del referendo constitucional de febrero de 2016, mostraron que no participaron de buena fe en las elecciones. Defraudaron la democracia al prepararse exclusivamente para el escenario de fraude electoral. Así, pretendieron mostrar que la renuncia de Evo se debió exclusivamente a la “movilización pacífica” de la ciudadanía por el respeto al voto y en rechazo de unas elecciones “fraudulentas”.

No fue así. Los hechos muestran que en Bolivia se activó desde hace tiempo un plan golpista, con diversos componentes bien sincronizados entre las elites locales y el imperialismo norteamericano. De hecho, el discurso del “fraude” fue cimentado semanas antes

de las elecciones. Y se consagró en varios cabildos departamentales que anticiparon el desconocimiento de la votación si ganaba Evo. El discurso se fortaleció por errores gruesos del Tribunal Supremo Electoral. Así, la protesta de los opositores pasó de la demanda de nuevas elecciones a la exigencia, con ultimátum de 48 horas, de la renuncia del presidente. Pronto fue seguida por un motín policial, que abdicó de sus funciones de resguardo de la seguridad y el orden público. Operó también, de manera torpe, un “informe preliminar” de la auditoría de la OEA, que habló de “irregularidades”. El golpe imperial y de las elites políticas, en tanto interrupción abrupta de un mandato constitucional, llegó a la cima con la intervención directa de las Fuerzas Armadas, que “sugirieron” la renuncia del presidente. Luego vinieron acciones violentas contra autoridades y dirigentes del MAS, forzando su dimisión. Si bien tras la renuncia de Evo y su asilo en México no devino un gobierno militar, el hecho se consolidó con la autoproclamación como presidenta, alegando sucesión constitucional, de la segunda vicepresidenta del Senado (cuyo partido obtuvo apenas el 4% del voto en las elecciones), que con respaldo de la Policía y de las Fuerzas Armadas asumió un mandato cargado de símbolos religiosos conservadores y de revanchismo racista.

Tenemos entonces un primer momento en que los golpistas se aprovecharon de la legítima movilización ciudadana en democracia para fomentar la violencia (como la quema de cinco tribunales electorales departamentales); un momento explícitamente golpista, de interrupción forzada del mandato presidencial, por obra de agentes externos (Estados Unidos a través de la OEA de Almagro) y de actores internos (operadores cívico-políticos, Policía, Fuerzas Armadas, élites locales); y un momento todavía frágil e incierto de cauce democrático con la decisión unánime, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (dominada por el MAS), de convocar nuevas elecciones. Pesan también en la evaluación las dos masacres (Sacaba y Senkata) producidas por represión militar-policial y recién certificadas por la CIDH, hechos de vandalismo, la acción de grupos afines a Evo para “cercar las ciudades” y las persistentes operaciones de persecución política

y judicial a título de “sedición” o “terrorismo”. En síntesis, la caída de Evo no resultó de un acto democrático validado en el “voto castigo” de la ciudadanía por el afán reeleccionista del presidente: se operó con la ejecución de un plan golpista. Y hoy busca un difícil, precario y poco creíble cauce de retorno a la “normalidad” democrática en las urnas, mientras sigue la violación de derechos humanos. Un retorno que pasa por la inhabilitación de Evo Morales y de Álvaro García Linera, y por un gobierno de transición que se propone anular compromisos internacionales (como la retirada del ALBA y de UNASUR), privatizar empresas estratégicas, extender todavía más la frontera agrícola, liberalizar la economía con entrega de recursos naturales según la receta neoliberal, cambiar masivamente el cuerpo diplomático, sustituir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, antes justamente acusado de estar subordinado al oficialismo, por vocales próximos al nuevo oficialismo y, sobre todo, eliminar del horizonte político el sujeto colectivo indígena y nacional-popular, y todas las demandas originadas en las luchas de los pueblos indígenas (el Buen Vivir, la plurinacionalidad, los derechos colectivos, la democracia comunitaria, el respeto a la Madre Tierra).

La intervención imperial aprovechó los errores internos para neutralizar en un país más (después de Brasil y Ecuador) la influencia de China en el continente. La rivalidad entre los dos imperios (un decadente y otro ascendente) no conoce reglas democráticas. Está en juego el comando de la nueva ola de globalización basada en la inteligencia artificial y la tecnología 5G. La China parece por ahora mejor posicionada para comandarla y por eso avanza internacionalmente con medidas de incentivo positivo (la nueva ruta de la seda), mientras los EUA intervienen con medidas punitivas (embargos, sanciones económicas, cambios de régimen, contra-insurgencia). La fachada multilateral es proporcionada por la OEA, que opera en la región como ministerio de asuntos internos de los EUA. En meses recientes, el gobierno de Evo Morales suscribió un contrato con China para la conformación de una empresa que fabrique litio metálico con base en los enormes yacimientos de litio en Bolivia, un mineral

estratégico para el nuevo orden tecnológico. Había pues que neutralizar esta rebeldía a la siempre vigente Doctrina Monroe (el subcontinente como patio trasero de Estados Unidos).

Así, el imperialismo norteamericano aplicó un guion conocido de cambio de régimen para garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos de un país en su zona de influencia. Bolivia, tal como ocurrió antes con Brasil, funcionó como laboratorio de lo que está por venir. En el caso de Bolivia, es posible decir que nunca un gobierno antiimperialista ofreció tantas oportunidades a la interferencia imperial y se rindió tan rápidamente (en claro contraste con Venezuela). Pero el imperialismo y las elites saben que hay líderes que, a pesar de todos sus errores, logran tocar el corazón de las clases más empobrecidas, más humilladas, más olvidadas. Y que, a pesar de todos sus errores, hay el peligro de que puedan regresar. Por eso es necesario movilizar el aparato represivo y el sistema judicial para acusarlos de crímenes que los inhabiliten políticamente para siempre. Fue lo que pasó con Rafael Correa, con Lula da Silva y con Cristina Kirchner (en este caso, sin éxito por ahora). Pasará lo mismo con Evo.

Las evaluaciones críticas

A lo largo de la última década, muchas fueron las voces en el continente que criticaron el desarrollismo de los gobiernos que llamaron progresistas para no caracterizarlos de izquierda. Alberto Acosta, Eduardo Gudynas, Maristella Svampa y muchos otros criticaron el neoextractivismo y todo su impacto en la vida de las poblaciones, en contradicción con lo que estaba establecido en las constituciones. En este particular puede destacarse a Raúl Prada y Luis Tapia en Bolivia. También a Silvia Rivera Cusicanqui, que fue una crítica persistente, con voz propia en favor de un gobierno desde abajo, desde las estructuras políticas ancestrales de los pueblos indígenas (una posición que desde una perspectiva eurocéntrica podría ser considerada

anarquista). Fue certera en las críticas de algunos aspectos del gobierno de Evo, pero sus evaluaciones globales me parecieron muchas veces exageradas.

Después de la caída de su gobierno, las críticas más contundentes a Evo provinieron no solamente de la derecha, como sería de esperar, sino también de sectores de izquierda y de feministas blancas y mestizas latinoamericanas. Este hecho ha causado alguna perplejidad y también provocó revuelta en otros sectores de izquierda y del feminismo, sobre todo de movimientos de mujeres indígenas. Al calor de los hechos recientes, pensar que después de 32 muertos y 700 heridos; después del proclamado triunfo del supremacismo blanco en versión criollo-mestiza y de la biblia evangélica frente al paganismo satánico de la Pachamama; después de mandar a los indios, incluida la quema de la wiphala, a que vuelvan a sus rincones de invisibilidad (tal como los batustones en la Sudáfrica del apartheid); pensar después de todo esto que hay buenas (o incluso mejores) condiciones para construir la democracia indígena de base, me parece un delirio. Ojalá esté equivocado.

Ciertamente las críticas de algunos sectores de izquierda, en versión explícitamente feminista o no, merecen una reflexión más profunda. He afirmado muchas veces que la verdadera renovación de la lucha por una sociedad más justa y por una política de liberación para el nuevo siglo tiene en las luchas de las mujeres una de las bases más consistentes. Argentina, Venezuela y Chile ofrecen pruebas contundentes de ello. Fuera del continente se pueden encontrar otras pruebas. Por ejemplo, he escrito que la actual solución gubernativa de izquierda en Portugal (el único país de Europa gobernado consistentemente por un gobierno de izquierda o centro izquierda), se debe en buena parte a tres jóvenes líderes del Bloque de Izquierda, tres mujeres con edad entre los 39 y los 42 años, para quienes entrar en alianzas con otros partidos de izquierda a fin de cuidar el bienestar de las familias golpeadas por la oleada neoliberal y austeritaria entre 2011 y 2015, era más importante que mantener los sectarismos y dogmatismos que han dominado las izquierdas en casi todo el mundo.

Pero no quedan dudas de que después de la caída del gobierno de Evo Morales la polémica subió de tono y el feminismo latinoamericano parece hoy profundamente dividido. Debe notarse que a lo largo de la última década muchas activistas indígenas hicieron críticas a sus gobiernos y siempre lo hicieron desde una perspectiva constructiva. Para limitarme a grandes líderes con las que trabajé, recuerdo a Nina Pacari, Blanca Chancoso y María Eugenia Choque. Muchas de ellas mantuvieron alguna distancia en relación con los feminismos, e incluso rehusaron a considerarse feministas por pensar que esa era una designación propia de mujeres blancas y mestizas. Pero lo importante fue que estuvieron juntas en muchas luchas.

He defendido que las tres grandes dominaciones de nuestro tiempo (desde el siglo XVII) son el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Las tres están presentes hoy con gran virulencia y actúan articuladamente porque el trabajo libre propio del capitalismo no se sostiene sin el trabajo esclavo, altamente devaluado o no pagado. Estas últimas formas de trabajo son abastecidas por poblaciones consideradas subhumanas: poblaciones de matriz africana, pueblos indígenas, mujeres, pueblos Roma, castas inferiores, etc. El drama de nuestro tiempo es que mientras la dominación actúa articuladamente, la resistencia lo hace de forma fragmentada. ¿Cuántos movimientos y organizaciones anticapitalistas no fueron racistas y sexistas? ¿Cuántos movimientos y organizaciones antirracistas no fueron sexistas y procapitalistas? ¿Y cuántos movimientos y organizaciones feministas no fueron racistas y procapitalistas? En la medida en que se mantenga esta asimetría entre dominación y resistencia no será posible salir del infierno capitalista, colonialista y heteropatriarcal en el que nos encontramos. En esta asimetría tal vez encontremos pistas para explicar el malestar causado por algunas críticas. La pregunta central será evaluar si las críticas, tal como fueron formuladas, contribuyen o no a profundizar todavía más la fragmentación de las resistencias al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado.

Otros dos factores son igualmente importantes. Por un lado, hay que distinguir entre luchas importantes y luchas urgentes. Las

luchas anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales son todas igualmente importantes, pero, dependiendo del contexto, unas pueden ser más urgentes que otras. Ante el golpe brutal del imperialismo en Bolivia contra Evo, ¿cuál es la lucha más urgente?, ¿defender las soluciones democráticas (aunque sean desesperadas) propuestas por Evo o demonizarlo como si él fuera el único culpable de su desgracia política? En un contexto de gran agresividad imperial, ¿no sería más urgente mostrar que las alternativas de izquierda deben ser encontradas democráticamente dentro del propio país y de ninguna manera ser funcionales al imperialismo?

Por otro lado, hay que distinguir el *kairos*, los tiempos y las oportunidades. No se trata de silenciar las críticas, sino de encontrar el tono que no ofrezca a la derecha nacional e internacional razones para aumentar su agresividad. Por ejemplo, ¿las críticas justas al neoextractivismo de Evo podrían ser hechas en un tiempo y en un estilo que no favoreciesen una solución todavía más neoextractivista, con menos soberanía nacional y mucho menos preocupación por la redistribución social? El criterio no es blanquear o no errores graves de los potenciales aliados, sino analizar el momento y el contexto; y tener claro que las críticas fortalecen o, por lo menos, no debilitan las resistencias anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Los y las de abajo que hoy lloran la muerte de su gente en las masacres de Sacaba y de Senkata (después de que en trece años los militares no habían disparado contra el pueblo, cosa inédita en Bolivia), ¿se quedarán más solas o más acompañadas con las críticas al proceso en el que, quizás exageradamente, confiaron?

Desafíos de largo plazo

Entre muchos otros posibles, selecciono cuatro desafíos que trascienden el contexto boliviano e incluso el contexto continental: sobre el Estado, la larga transición, las articulaciones entre resistencias y la democracia.

Primero, el Estado del que Evo Morales fue presidente no llegó a ser plurinacional. Fue un Estado ciertamente mucho más benévolo con el bienestar de las poblaciones flageladas por las violaciones, la discriminación, el olvido y la humillación, pero operó desde una matriz institucional y cultural colonial, centralista y autoritaria. La inercia de la historia pesa igualmente en los que más sufren con ella, incluso cuando buscan combatirla. Pero la paciencia y la resistencia indígenas vienen de siglos. Un país como Bolivia solo será plenamente democrático cuando sea gobernado por indígenas y según las cosmovisiones indígenas.

Segundo, tomar el poder del Estado solo tiene sentido si está orientado a transformarlo. El poder del Estado debe ser utilizado para iniciar una larga transición hacia un Estado verdaderamente plurinacional, anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. El aprendizaje empezó con Evo y no termina con él. Por el contrario, es solamente un comienzo. Después de 500 años de ausencia política, un comienzo de 13 años tuvo que ser forzosamente confuso y hasta contradictorio.

Tercero, las resistencias anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales deben ser siempre articuladas de modo que se fortalezcan recíprocamente. A nivel teórico, muchos movimientos, y muy en particular la gran mayoría de los movimientos feministas, saben eso. El problema es encontrar en cada contexto histórico el justo equilibrio y el criterio político para formularlo. Hay que aprender a caminar más juntos y más humildes, y con el peso de nuestras limitaciones y de nuestros errores recíprocos.

Cuarto, la democracia liberal no tiene futuro y corre el riesgo de morir democráticamente al elegir recurrentemente antidemócratas o gobiernos que rápidamente se separan de sus bases sociales. Por este camino, la democracia liberal se confundirá más y más con nuevas formas de dictadura. La verdadera tragedia del último siglo no fue legitimar una democracia que fácilmente se rinde o confunde con dictadura. Fue separar la democracia de la revolución. Hay que revolucionar la democracia y democratizar la revolución.

La nueva Guerra Fría y Venezuela

Lo que está pasando en Venezuela es una tragedia anunciada, y probablemente causará la muerte de mucha gente inocente. Venezuela está al borde de una intervención militar extranjera y el baño de sangre que resultará puede asumir proporciones dramáticas. Quien lo dice es el líder más conocido de la oposición a Nicolás Maduro, Henrique Capriles, al afirmar que el presidente-títere Juan Guaidó está usando al pueblo venezolano como “carne de cañón”. Él sabe de lo que está hablando. Sabe, por ejemplo, que Hugo Chávez tomó muy en serio el destino de la experiencia socialista democrática de Salvador Allende en Chile. Y que, entre otras medidas, armó a la población civil, creando las milicias, que obviamente pueden ser desarmadas, pero que muy probablemente ello no ocurrirá sin cierta resistencia. Sabe también que, a pesar del inmenso sufrimiento a que el país está siendo sometido por la mezcla tóxica de errores políticos internos y presión externa, en particular a través de un embargo que la ONU considera humanitariamente condenable, en el pueblo venezolano continúa arraigado un sentimiento de orgullo nacionalista que rechaza con vehemencia cualquier intervención extranjera.

Ante la dimensión del riesgo de destrucción de vidas inocentes, todos los demócratas venezolanos opositores al gobierno bolivariano se hacen algunas preguntas para las que solo muy duramente van teniendo alguna respuesta. ¿Por qué Estados Unidos, acompañado

de algunos países europeos, se embarca en una posición agresiva y maximalista que desde el principio inviabiliza cualquier solución negociada? ¿Por qué se hacen ultimátums típicos de los tiempos imperiales de los que, por cierto, Portugal tiene una amarga experiencia? ¿Por qué se rechazó la propuesta de intermediación hecha por México y Uruguay, que tiene como punto de partida el rechazo de la guerra civil? ¿Por qué un joven desconocido hasta hace unas semanas, miembro de un pequeño partido de extrema derecha, Voluntad Popular, directamente involucrado en la violencia callejera ocurrida en años anteriores, se autoproclama presidente de la república tras recibir una llamada del vicepresidente de Estados Unidos, y varios países se disponen a reconocerlo como presidente legítimo del país?

Las respuestas irán surgiendo con el tiempo, pero lo que va siendo conocido es suficiente para indicar de dónde vendrán. Se empieza a saber que, a pesar de poco conocido en el país, Juan Guaidó y su partido de extrema derecha, que ha defendido abiertamente una intervención militar contra el Gobierno, son hace mucho los favoritos de Washington para implementar en Venezuela la infame política de “cambio de régimen”. A esto se une la historia de las intervenciones de Estados Unidos en el continente, un arma de destrucción masiva de la democracia siempre que esta significó la defensa de la soberanía nacional y cuestionó el libre acceso de las empresas estadounidenses a los recursos naturales del país. No es difícil concluir que lo que está en juego no es la defensa de la democracia venezolana. Lo que está en juego es el petróleo de Venezuela. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo (el 20% de las reservas mundiales, mientras Estados Unidos tiene el 2%). El acceso al petróleo de Oriente Medio determinó el pacto de sangre con el país más dictatorial de la región, Arabia Saudí, y la destrucción de Irak, Siria, Libia, en el norte de África; la próxima víctima bien podría ser Irán. Además, el petróleo de Oriente Medio está más cerca de China que de Estados Unidos, mientras que el petróleo de Venezuela está en la puerta de casa.

El modo de acceder a los recursos varía de un país a otro, pero el objetivo estratégico ha sido siempre el mismo. En Chile, conllevó

una dictadura sangrienta. Más recientemente, en Brasil, el acceso a los inmensos recursos minerales, a la Amazonia y a las reservas petrolíferas del presal, implicó la transformación de otro favorito de Washington, Sérgio Moro, de ignorado juez de primera instancia a ganar notoriedad nacional e internacional, mediante el acceso privilegiado a datos que le permitieron ser el justiciero de la izquierda brasileña y abrir el camino para la elección de un confeso apologista de la dictadura y de la tortura que estuviese dispuesto a vender las riquezas del país como desperdicio y formase un gobierno del que el favorito pronorteamericano del futuro de Brasil formara parte.

Pero la perplejidad de muchos demócratas venezolanos tiene que ver especialmente con Europa, también porque en el pasado Europa estuvo activa en negociaciones entre el gobierno y las oposiciones. Sabían que muchas de esas negociaciones fracasaron por presión de Estados Unidos. De ahí la pregunta: ¿también tú, Europa? Son conscientes de que si Europa estuviese genuinamente preocupada con la democracia, hace mucho habría roto relaciones diplomáticas con Arabia Saudí. Y de que si Europa estuviese preocupada por la muerte en masa de civiles inocentes, hace mucho que habría dejado de vender a Arabia Saudí las armas con las que este país está llevando a cabo el genocidio en Yemen. Incluso tal vez esperasen que las responsabilidades históricas de Europa delante de sus antiguas colonias justificasen alguna contención. ¿Por qué este alineamiento total con una política que mide su éxito por el nivel de destrucción de países y vidas?

Paulatinamente irá quedando claro que la razón de este alineamiento reside en la nueva Guerra Fría que estalló entre Estados Unidos y China, una Guerra Fría que tiene en el continente latinoamericano uno de sus centros y que, tal como la anterior, no puede disputarse directamente entre las potencias rivales, en este caso, un imperio declinante y un imperio ascendente. Tiene que ser acometida por vía de aliados, sean ellos, en un caso, los gobiernos de derecha en América Latina y los gobiernos europeos y, en otro caso, Rusia. Ningún imperio es bueno para los países que no tienen poder

para beneficiarse por entero de la rivalidad. Cuando mucho, procuran obtener ventajas del alineamiento que les está más próximo. Y el alineamiento, para ser eficaz, debe ser total. Esto es, se necesita sacrificar los anillos para no perder los dedos. Esto es tan verdad en Canadá como en los países europeos.

Me he reconocido bien representado por el gobierno de mi país (Portugal) en el poder desde 2016. Sin embargo, la legitimidad concedida a un presidente-títere y a una estrategia que muy probablemente terminará en un baño de sangre me hace sentir vergüenza de mi gobierno. Solo espero que la vasta comunidad de portugueses en Venezuela no tenga que sufrir con tamaña imprudencia diplomática, para no usar otro término más vehemente y verdadero sobre la política internacional del gobierno en este caso.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Soplan vientos favorables desde España

Los vientos que soplan desde España son favorables. Por primera vez desde la transición democrática de 1978, los dos principales partidos de izquierda se unen para formar gobierno. La articulación de izquierda de la que Portugal fue pionera en Europa a partir de 2016 desempeñó un papel importante, si bien indirecto, en la solución española. Señaló que el sentido común podía formar parte de la política, a pesar de que durante mucho tiempo parecía impensable. Demostró que, más allá de lo mucho que divide a los diferentes partidos de izquierda, lo que los une es lo suficientemente sustantivo como para construir un programa de gobierno compartido. Dado que era un camino poco transitado, hubo que ponerlo por escrito y detallar los términos del acuerdo. Se sabía que las desconfianzas mutuas eran muchas y persistían. Se sabía que las fuerzas (políticas, económicas y mediáticas) de derecha harían todo lo posible para demonizar al nuevo gobierno y que el camino sería más fácil cuanto más vaga fuese la convergencia. También demostró que las políticas de la Unión Europea, pese a ser muy conservadoras, permitían cierta capacidad de maniobra y lo permitían aún más siempre que la burocracia de Bruselas no se sintiese amenazada o cuestionada (lo que había sucedido con Grecia). Demostró, por último, que tras la devastación neoliberal de los años anteriores (con el empobrecimiento general de los portugueses), no aumentar demasiado las expectativas

era importante (dadas las condiciones del país) y era políticamente aceptable en la medida en que lo poco sabría a mucho. La solución resultó ser exitosa y los resultados de las elecciones legislativas de 2019 fueron una prueba de ello.

A lo largo de los últimos cuatro años los contactos peninsulares sobre este tema han sido muchos. Históricamente, las condiciones sociales, políticas y culturales de España fueron muy diferentes. Portugal tuvo una revolución en 1974, mientras que España realizó una transición pactada con la dictadura anterior y con quienes más se beneficiaron de ella, particularmente las élites económicas y la Iglesia católica. Por ejemplo, a pesar de las continuidades con la dictadura (especialmente en las Fuerzas Armadas y en el sistema judicial), en Portugal, como antes en Italia y Alemania, hubo consenso para eliminar de las calles, las plazas y los puentes los nombres más destacados de la dictadura, mientras que en España este tema continuó incendiando los debates prácticamente hasta el día de hoy. A diferencia de Portugal, España tenía dos grandes fuentes potenciales de fracturas: la cuestión del régimen, dado el desgaste de la monarquía en los últimos tiempos, y la cuestión de las nacionalidades. Verdaderamente, solo después de 1808 los habitantes del Estado español manifestaron cierto sentido político de pertenencia respecto al hecho de ser todos españoles.

Por estas y otras razones, la voluntad política de convergencia entre las izquierdas tuvo altibajos en una secuencia simultáneamente turbulenta (tres elecciones generales entre 2016 y 2019) y paralizante (sucesión de gobiernos de gestión ordinaria). Fue ganando consenso la idea de que en España, la mejor solución para una coalición de izquierda no sería el mero apoyo parlamentario (la solución portuguesa), sino la participación en el gobierno con responsabilidades políticas sustantivas. Sería una solución más arriesgada, pero la considerada más eficaz para enfrenar la oposición de la derecha, que se preveía feroz. Y la solución está ahí y todos los demócratas del mundo deberían saludarla. En este momento me gustaría simplemente señalar algunos puntos.

1. Más allá del acuerdo específico, y por encima de todo, lo más importante ahora es poner en valor el significado de la escala estatal de este ejercicio inédito de articulación política en la izquierda española. No hay precedentes de coalición a escala estatal, excepto el breve gobierno de Juan Negrín, en 1937, en coalición con el Partido Comunista. Hasta ahora solo había habido coaliciones progresistas a nivel autonómico. La articulación entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) rompe con una larga tradición de gobiernos monocolor y en solitario que en España se viene fraguando desde la Transición. Así, el nuevo gobierno estará formado por dos partidos cuyo acuerdo progresista representa un intento dialogado de entendimiento mutuo entre las dos grandes culturas políticas actuales de la izquierda española: la de 1978 y una izquierda reciente post15M.

2. Además de una estrecha colaboración entre ambas culturas políticas, también va a tener que darse una estrecha colaboración (en forma de apoyo parlamentario) con partidos independentistas/nacionalistas/soberanistas, como el PNV, ERC, el BNG o Bildu. Lo que está en juego, en este aspecto, es la consolidación de una nueva mayoría, un bloque que integraría al PSOE y UP y se abriría a fuerzas nacionalistas (nacionalismos vascos, valenciano, gallego y parte del catalán) con capacidad para condicionar el rumbo de la política española. A este respecto, hay que lamentar la oposición al acuerdo de cierta extrema izquierda catalana, hija de una tradición fatal de cierta izquierda europea, que, con su maximalismo y sectarismo, allana el camino a gobiernos de derecha o incluso de extrema derecha, tal y como sucedió en Alemania.

3. El acuerdo es más global y ambicioso que el acuerdo de 2015 entre las izquierdas portuguesas. A lo largo de sus 50 páginas, el texto del acuerdo incluye compromisos y medidas progresistas que abarcan, en líneas generales, los programas políticos con los que el PSOE y UP concurren a las elecciones generales. Hay compromisos firmes en materia de educación, de memoria histórica, pensiones y de

igualdad de género (las “políticas feministas” se destacan como uno de los once capítulos del acuerdo). Hay menos concreción en materia de vivienda, migraciones, política exterior, defensa y seguridad. Apunta a un programa socialdemócrata que tiene como objetivo principal restaurar los derechos sociales y económicos que habían sido debilitados o eliminados por los gobiernos de derecha. Contrariamente a lo que el PSOE defendió en su último programa electoral, se prevé la subida de impuestos para las rentas más altas (probablemente en torno al 0,8% de los españoles). Evita los temas que pueden generar más fractura. En política territorial subyace al acuerdo una tendencia federal. En el caso de Cataluña, propone la única solución de sentido común: abrir el diálogo y crear las condiciones para una solución política.

4. La investidura de este gobierno tiene una importancia estratégica para Europa. La violencia casi golpista con la que la ultraderecha (la derecha más tradicional aliada a la nueva extrema derecha) ha tratado de bloquear la investidura no tiene precedentes en Europa, pero puede indicar el camino que el neofascismo europeo pretende seguir. Este camino consiste en no reconocer los resultados electorales siempre que sean desfavorables para las fuerzas de derecha y seguir una estrategia de desestabilización que tenga como objetivo llevar a cabo golpes suaves contra cualquier gobierno de izquierda, por moderado que sea. Esta estrategia tiene los siguientes componentes generales: deslegitimar mediáticamente las políticas del gobierno con el recurso, siempre que sea necesario, a las noticias falsas; ampliar simbólicamente cualquier medida relativa a las ideas preconcebidas de la clase media para convertirlas en presagios del apocalipsis; “calear” las calles, utilizando el mínimo descontento para provocar actos de represión legítima convertidos inmediatamente en amenazas totalitarias; recorrer al órgano del Estado más conservador y menos sujeto a presiones democráticas, el sistema judicial, para lanzar una guerra jurídica (*lawfare*) contra las políticas del Gobierno (la judicialización de la política utilizada de manera particularmente grosera

en Brasil). Para llevar a cabo esta desestabilización, los agentes internos cuentan ahora con el apoyo de extrema derecha estadounidense (capitaneada por el predicador del eurofascismo, Steve Bannon), centrada en la destrucción de la Unión Europea. En el caso de España, es lamentable que la ultraconservadora Conferencia Episcopal se muestre preocupada y pida a los españoles que recen, a pesar de que el programa de gobierno no toca los Acuerdos Iglesia-Estado y solo elimina la financiación de las escuelas concertadas que segregan por sexo, eliminación derivada de un mandato constitucional.

5. El gobierno progresista español necesitará el apoyo de todos los demócratas del mundo, en particular, de sus vecinos, nosotros, los portugueses. El Gobierno portugués se propone continuar con la política que inspiró a los españoles. Desafortunadamente, el Partido Socialista (PS) portugués consideró prescindible poner por escrito el compromiso con el Bloco de Esquerda. Todos sabemos que la enfermedad infantil de los partidos socialistas europeos es tener más miedo de los partidos a su izquierda que de los partidos a su derecha. Ojalá que los próximos cuatro años muestren que el PS está curado. Sería otra novedad esperanzadora para Europa y para quienes luchan contra el avance de la extrema derecha.

Traducción de Antoni Aguiló

Las venas abiertas de Nicaragua

Pertenezco a la generación de los que en los años 1980 vibraron con la Revolución sandinista y la apoyaron activamente. El impulso progresista reanimado por la Revolución cubana de 1959 se había estancado en gran medida por la intervención imperialista de Estados Unidos. La imposición de la dictadura militar en Brasil en 1964 y en Argentina en 1976, la muerte del Che Guevara en 1967 en Bolivia y el golpe de Augusto Pinochet en Chile contra Salvador Allende en 1973 fueron los signos más sobresalientes de que el subcontinente americano estaba condenado a ser el patio trasero de Estados Unidos, sometido a la dominación de las grandes empresas multinacionales y de las élites nacionales conniventes con ellas. Estaba, en síntesis, impedido de pensarse como conjunto de sociedades inclusivas centradas en los intereses de las grandes mayorías empobrecidas.

La Revolución sandinista significaba el surgimiento de una contracorriente auspiciosa. Su significado resultaba no solo de las transformaciones concretas que protagonizaba (participación popular sin precedentes, reforma agraria, campaña de alfabetización que mereció el premio de la UNESCO, revolución cultural, creación de servicio público de salud, etc.), sino también del hecho de que todo esto se realizó en condiciones difíciles debido al cerco extremadamente agresivo de los Estados Unidos de Ronald Reagan, que supuso el embargo económico y la infame financiación de los “contras”

nicaragüenses (la guerrilla contrarrevolucionaria) y el fomento de la guerra civil. Igualmente significativo fue el hecho de que el gobierno sandinista mantuviera el régimen democrático, lo que en 1990 dictó el fin de la revolución con la victoria del bloque opositor, del que, además, formaba parte el Partido Comunista de Nicaragua.

En los años siguientes, el Frente Sandinista, siempre liderado por Daniel Ortega, perdió tres elecciones, hasta que en 2006 reconquistó el poder, manteniéndolo hasta hoy. Sin embargo, Nicaragua, como por lo demás toda Centroamérica, estuvo fuera del radar de la opinión pública internacional y de la propia izquierda latinoamericana. Hasta que el pasado abril las protestas sociales y la violenta represión llamaron la atención del mundo. Pueden contarse ya muchas decenas de muertes causadas por las fuerzas policiales y por milicias adeptas al partido del Gobierno. Las protestas, protagonizadas inicialmente por estudiantes universitarios, apuntaban a la displicencia del gobierno ante la catástrofe ecológica en la Reserva Biológica Indio-Maíz causada por el incendio y por la deforestación e invasión ilegales. Se sucedieron después las protestas contra la reforma del sistema de seguridad social, que imponía recortes drásticos en las pensiones y gravámenes adicionales impuestos a los trabajadores y los patrones. A los estudiantes se unieron los sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil.

Ante las protestas, el Gobierno retiró la propuesta, pero el país estaba ya incendiado por la indignación contra la violencia y la represión y por la repulsa causada por muchas otras facetas sombrías del gobierno sandinista, que entretanto empezaron a ser más conocidas y abiertamente criticadas. La Iglesia católica, que desde 2003 se “reconcilió” con el sandinismo, volvió a tomar sus distancias y aceptó mediar en el conflicto social y político bajo condiciones. El mismo distanciamiento ocurrió con la burguesía empresarial nicaragüense, a quien Ortega ofreció sustanciosos negocios y condiciones privilegiadas de actuación a cambio de lealtad política. El futuro es incierto y no puede excluirse la posibilidad de que este país, tan masacrado por la violencia, vuelva a sufrir un baño de sangre. La oposición al

orteguismo cubre todo el espectro político y, tal como ha ocurrido en otros países (Venezuela y Brasil), solo muestra unidad para derribar el régimen, pero no para crear una alternativa democrática. Todo lleva a creer que no habrá solución pacífica sin la renuncia de la pareja presidencial Ortega-Murillo y la convocatoria de elecciones anticipadas libres y transparentes.

Los demócratas, en general, y las fuerzas políticas de izquierda, en particular, tienen razones para estar perplejos. Pero tienen sobre todo el deber de reexaminar las opciones recientes de gobiernos considerados de izquierda en muchos países del continente y de cuestionar su silencio ante tanto atropello de ideales políticos durante tanto tiempo. Por esta razón, este texto no deja de ser, en parte, una autocrítica. ¿Qué lecciones se pueden extraer de lo que pasa en Nicaragua? Ponderar las duras lecciones que a continuación enumero será la mejor forma de solidarizarse con el pueblo nicaragüense y de manifestarle respeto por su dignidad.

Primera lección: espontaneidad y organización. Durante mucho tiempo las protestas sociales y la represión violenta ocurrieron en las zonas rurales sin que la opinión pública nacional e internacional se manifestara. Cuando las protestas irrumpieron en Managua, la sorpresa fue general. El movimiento era espontáneo y recurría a las redes sociales que el Gobierno había promovido con el acceso gratuito a internet en los parques del país. Los jóvenes universitarios, nietos de la Revolución sandinista, que hasta hace poco parecían alienados y políticamente apáticos, se movilizaron para reclamar justicia y democracia. La alianza entre el campo y la ciudad, hasta entonces impensable, surgió casi naturalmente y la revolución cívica salió a la calle asentada en marchas pacíficas y barricadas que llegaron a alcanzar el 70% de las carreteras del país. ¿Cómo es que las tensiones sociales se acumulan sin que se noten y su explosión repentina toma a todos por sorpresa? Ciertamente, no por las mismas razones por las que los volcanes no avisan. ¿Puede esperarse que las fuerzas conservadoras nacionales e internacionales no se aprovechen de

los errores cometidos por los gobiernos de izquierda? ¿Cuál será el punto de explosión de las tensiones sociales en otros países del continente causadas por gobiernos de derecha, por ejemplo, en Brasil y Argentina?

Segunda lección: los límites del pragmatismo político y de las alianzas con la derecha. El Frente Sandinista perdió tres elecciones después de haber sido derrotado en 1990. Una facción del Frente, liderada por Ortega, entendió que la única manera de retornar al poder era haciendo alianzas con sus adversarios, incluso con aquellos que más visceralmente habían hostilizado al sandinismo, como la Iglesia católica y los grandes empresarios. Respecto a la Iglesia católica, la aproximación comenzó a principios de la década de 2000. El cardenal Obando y Bravo fue durante buena parte del período revolucionario un opositor agresivo al gobierno sandinista y activo aliado de los contras, apodando a Ortega como “víbora moribunda” durante toda la década del noventa. Pese a ello, Ortega no tuvo pudor en aproximarse al cardenal al punto de pedirle en 2005 que oficiase el matrimonio con su compañera de muchos años, Rosario Murillo, actual vicepresidenta del país. Entre muchas otras concesiones a la Iglesia, una de las primeras leyes del nuevo Gobierno sandinista, todavía en 2006, fue aprobar la ley de prohibición total del aborto, incluso en casos de violación o de peligro para la vida de la mujer. Esto, en un país con alta incidencia de violencia contra mujeres y niños. Por otra parte, la aproximación a las élites económicas se produjo por la sumisión del programa sandinista al neoliberalismo, con la desregulación de la economía, la suscripción de tratados de libre comercio y la creación de sociedades público-privadas que garantizaban jugosos negocios al sector privado capitalista a costa del erario público. Se produjo también un acuerdo con el expresidente Arnoldo Alemán, considerado uno de los jefes de Estado más corruptos del mundo.

Estas alianzas garantizaron cierta paz social. Y debe destacarse también que en 2006 el país estaba al borde de la quiebra y las políticas adoptadas por Ortega permitieron el crecimiento económico.

Se trató, sin embargo, del crecimiento típico de la receta neoliberal: gran concentración de riqueza, total dependencia de los precios internacionales de los productos de exportación (en particular, café y carne), autoritarismo creciente ante el conflicto social causado por la extensión de la frontera agrícola y por los megaproyectos (por ejemplo, el gran canal interoceánico, con financiamiento chino), aumento desordenado de la corrupción, empezando por la elite política en el Gobierno. La crisis social solo fue atenuada debido a la generosa ayuda de Venezuela (donaciones e inversiones) que llegó a ser una parte importante del presupuesto del Estado y permitió algunas políticas sociales compensatorias. La situación tendría que estallar cuando los precios internacionales bajasen, hubiese cambio de política económica en el principal destino de las exportaciones (Estados Unidos) o se evaporase el apoyo de Venezuela. Todo eso ocurrió en los últimos dos años. Mientras tanto, terminada la orgía de favores, las élites económicas tomaron sus distancias y Ortega quedó cada vez más aislado. ¿Puede un gobierno continuar denominándose de izquierda (y hasta revolucionario) a pesar de seguir todo el ideario del capitalismo neoliberal con las condiciones que este impone y las consecuencias que genera? ¿Hasta qué punto las alianzas tácticas con el “enemigo” se transforman en la segunda naturaleza de quien las protagoniza? ¿Por qué las alianzas con las diferentes fuerzas de izquierda parecen siempre más difíciles que las alianzas entre la izquierda hegemónica y las fuerzas de derecha?

Tercera lección: autoritarismo político, corrupción y desdemocratización. Las políticas adoptadas por Daniel Ortega y su facción crearon divisiones importantes en el seno del Frente Sandinista, y oposición en otras fuerzas políticas y en las organizaciones de la sociedad civil que habían encontrado en el sandinismo de los años 1980 su matriz ideológica y social y su voluntad de resistencia. Las organizaciones de mujeres tuvieron un protagonismo especial. Es sabido que el neoliberalismo, al agravar las desigualdades sociales y generar privilegios injustos, solo se puede mantener por la vía autoritaria y represiva.

Fue eso lo que hizo Ortega. Por todos los medios, incluyendo cooptación, supresión de la oposición interna y externa, monopolización de los medios masivos, reformas constitucionales que garantizan la reelección indefinida, instrumentalización del sistema judicial y creación de fuerzas represivas paramilitares. Las elecciones de 2016 fueron el claro retrato de todo esto, y la victoria del eslogan “una Nicaragua cristiana, socialista y solidaria” encubría mal las profundas fracturas en la sociedad.

De un modo casi patético, pero quizás previsible, el autoritarismo político fue acompañado por la creciente patrimonialización del Estado. La familia Ortega acumuló riqueza y mostró su deseo de perpetuarse en el poder. ¿La tentación autoritaria y la corrupción son una desviación o son constitutivas de los gobiernos de matriz económica neoliberal? ¿Qué intereses imperiales explican la ambigüedad de la OEA frente al orteguismo, en contraste con su radical oposición al chavismo? ¿Por qué buena parte de la izquierda latinoamericana y mundial mantuvo (y continúa haciéndolo) el mismo silencio cómplice? ¿Por cuánto tiempo la memoria de las conquistas revolucionarias opaca la capacidad de denunciar las perversiones que les siguen al punto de que la denuncia llega casi siempre demasiado tarde?

Publicado en *Jornal de Letras*, 4 de julio de 2018

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Carta abierta al presidente Iván Duque

Coimbra, 22 de noviembre de 2019

Estimado Presidente Iván Duque Márquez, reciba mis saludos cordiales:

Soy un cientista social portugués, fundador del Fórum Social Mundial, Profesor Jubilado de la Facultad de Economía y Director Emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Distinguished Legal Scholar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison. Desde hace muchísimos años he realizado diversas investigaciones sociológicas en Colombia y la región.

En este momento, además, soy miembro del Comité Asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, pero no es en esta calidad en la que le escribo. Le escribo en mi calidad de demócrata comprometido con las luchas por la paz y por la democracia en el continente, teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones he manifestado mi solidaridad con todos y todas aquellos que luchan en Colombia por la paz y por la democracia, tomo la libertad de escribir esta Carta Abierta debido a los graves acontecimientos de Colombia.

Presidente, ¿Cuántas masacres tienen que pasar para empezar a actuar? Hoy, cuando escribo esto, han sido asesinados 198 indígenas

desde 2016¹. De esos 198, 135 han sido en su gobierno². Pero no quiero reducir estas personas a simples números, ellas y ellos, han sido líderes y lideresas en sus comunidades, autoridades tradicionales y espirituales, de una importancia tal que no solo es el asesinato de una persona, es la afectación a toda una comunidad.

Debo recordarle, que de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia, 39 se encuentran en riesgo de extinción tanto física como cultural³. Si a esas terribles cifras le sumamos los homicidios antes citados, el panorama es aterrador.

Luego de la firma del acuerdo de paz de 2016, las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando el tejido social. Fruto de esta disputa, hemos visto en el último mes noticias sobre masacres en el Cauca⁴, pero que no se limitan solo allí, pues esto es solo la punta del iceberg de este nuevo panorama de violencias: desconocemos aún cuántas poblaciones indígenas y afrodescendientes se encuentran recluidas y aisladas en sus territorios ancestrales gracias a esta nuevo arremetida del conflicto armado.

¹ Véase <https://www.eltiempo.com/colombia/198-indigenas-han-sido-asesinados-en-colombia-desde-2016-432546> [Consultado el 20 de noviembre de 2019]

² Véase <https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3501-asesinan-a-indigena-senu-del-bajo-cauca-antioqueno> [Consultado el 20 de noviembre de 2019]

³ Véase <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/pueblos-indigenas-colombianos-están-en-peligro-de-extincion-cultural-articulo-880899> [Consultado el 20 de noviembre de 2019]

⁴ Véase <https://www.semana.com/nacion/articulo/barbarie-criminal-se-ensaña-contra-los-nasas-en-cauca-que-esta-pasando/638853> [Consultado el 20 de noviembre de 2019] <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/nueva-masacre-en-cauca-fueron-asesinadas-5-personas-en-corinto-y-caloto-429436> [Consultado el 21 de noviembre de 2019]

Múltiples alertas tempranas han sido emitidas por la Defensoría del Pueblo⁵, llamando la atención sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los líderes sociales del país.⁶ Estos líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, han sufrido la violencia sistemática de grupos al margen de la ley, en donde especialmente se ha visto un incremento en los homicidios contra personas racializadas, es decir, indígenas y afrodescendientes.

No exagero, señor presidente, al decir que lo que vemos en Colombia es un etnocidio contra una parte específica de la población: aquella que defiende y lucha por su territorio, sus tradiciones y su existencia física y cultural.⁷

Estas últimas noticias sobre el Cauca, las cuales nos han sacudido a todos e incluso lo han llevado a usted a dirigirse personalmente a la región, no pueden resolverse proponiendo más guerra y más terror. La militarización del Cauca⁸ solo dejará más y más víctimas, ya sea por desplazamiento forzado, ya sea por fuego cruzado. Someter a la población al miedo y la zozobra, le es funcional a estos grupos armados ilegales, pues es esa su principal estrategia para obtener el tan anhelado control territorial.

Frente a esta ola de violencia, debido a estos viejos y nuevos actores armados⁹, la mejor opción en pro de las comunidades que allí habitan es escucharlas. Un claro ejemplo de esto es la propuesta que se le ha hecho a usted de iniciar un *Plan Piloto de Erradicación y*

⁵ Me refiero aquí a las alertas tempranas producidas de 2018 a la fecha.

⁶ Véase:

- Defensoría del Pueblo. Alerta temprana N° 026-18. 28 de febrero de 2018.
- Defensoría del Pueblo. Alerta temprana N° 067-18. 21 de agosto de 2018.
- Defensoría del Pueblo. Informe de Seguimiento Alerta Temprana 026-18. Agosto de 2019.

⁷ Véase <https://www.cric-colombia.org/portal/autoridades-indigenas-exponen-ante-la-cidh-el-exterminio-fisico-y-cultural-de-los-pueblos/> [Consultado el 21 de noviembre de 2019]

⁸ Véase: <https://www.france24.com/es/20191031-colombia-duque-indigena-masacre-cauca> [Consultado el 13 de noviembre de 2019]

⁹ Disidencias FARC, ELN, EPL, AUC, AGC, Carteles Mexicanos, Etc.

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de manera inmediata, en el marco del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.¹⁰

La situación es tan dramática, que, tan solo en el municipio de Suarez (Cauca), se encuentran en situación de riesgo 11.229 habitantes, el equivalente al 65.9% de la población total de dicho municipio. La mayoría de esta población se ubica en la zona rural, organizada mediante Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios, Asociaciones Campesinas y Juntas de Acción Comunal.¹¹

Mientras esto pasa en el Cauca, en el área rural de Buenaventura¹², 12.289 habitantes de distintos territorios colectivos, se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta el incremento en las intimidaciones y amenazas contra la vida, libertad e integridad de las personas, generando restricciones en la movilidad. El conflicto armado en esta parte del país, está generando grandes afectaciones territoriales de diversa índole. De igual manera, el casco urbano se encuentra en riesgo por la presencia de estructuras armadas ilegales, y los enfrentamientos por el control territorial entre los grupos armados: “Banda Local” y “La Empresa”, además de grupos autodenominados como disidentes de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional-ELN.¹³

Recuerde presidente, que, según la cosmovisión de estas comunidades, sus resguardos y consejos comunitarios deben estar libres de grupos armados legales e ilegales, ya que ambos generan desarmonía y desequilibrio tanto en el territorio como en la comunidad.

Con el regreso de los asesinatos selectivos, del etnocidio y de la violencia en los territorios, también ha resurgido una práctica que en la década pasada aterró al país: los mal llamados falsos positivos.

¹⁰ Véase: <https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3499-pueblos-indigenas-proponen-plan-piloto-para-detener-asesinatos-en-el-norte-del-cauca> [Consultado el 21 de noviembre de 2019]

¹¹ Véase: Defensoría del Pueblo. Alerta temprana N° 033-19. 15 de agosto de 2019.

¹² Véase: Defensoría del Pueblo. Alerta temprana N° 079-18.

¹³ Véase: Defensoría del Pueblo. Alerta temprana N° 007-19.23 de enero de 2019.

Acá, me quiero referir a los casos del excombatiente Dimar Torres¹⁴ y del joven Flower Trompeta¹⁵. No se puede permitir que estos macabros acontecimientos vuelvan a ocurrir en un país que se juega el todo por la paz, la reconciliación y la no repetición.

Le pido a usted, como jefe de Estado y jefe de gobierno, condenar todas las violaciones a las garantías democráticas del *Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019* llevadas a cabo por el siniestro Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El bienestar ciudadano no puede ser objeto de estigmatización y represión. Debe rechazarse tajantemente la actitud que asumió la fuerza pública al atacar y provocar las manifestaciones pacíficas de una ciudadanía que desea un verdadero cambio.

Finalmente, presidente, Colombia hoy se encuentra en un momento histórico. Tal vez desde 1977, el país no presenciaba una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre, la cual no solo logró parar el país, sino que también nos demostró el clamor popular de estudiantes¹⁶, maestros, sindicalistas, indígenas, mujeres y demás participantes del paro. La gente, tanto en los territorios periféricos como en las grandes ciudades, protestan contra su gobierno profundamente impopular y, a raíz de esto, algo debe cambiar. Deben ser escuchados sus justos reclamos y buscar una salida por el bien del país, para así poder construir una Colombia en paz.

Atentamente,

Boaventura de Sousa Santos

¹⁴ Ver: <https://www.semana.com/nacion/articulo/mi-coronel-ya-lo-mate-el-grupo-de-whatsapp-que-crearon-para-asesinar-a-dimar/637988> [Consultado el 21 de noviembre de 2019]

¹⁵ Ver: <https://www.semana.com/nacion/articulo/linea-de-tiempo-del-presunto-asesinato-de-flower-yain-trompeta-en-corinto/638458> [Consultado el 21 de noviembre de 2019]

¹⁶ El gobierno nacional ha cumplido parcialmente el Acuerdo logrado por el movimiento nacional por la educación en el segundo semestre de 2018, motivo por el cual la educación superior en Colombia sigue en riesgo.

Para alimentar la llama de la esperanza

“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”, escribió José Martí en *Nuestra América*.¹ ¿Cuáles son las ideas de las que disponemos al inicio de la tercera década del siglo XXI para analizar lo que ha sucedido sobre todo en las dos últimas décadas en América Latina y orientarnos en la década que empieza? No es una tarea fácil, sobre todo en el caso de las ideas orientadoras, puesto que la ideología dominante ha estado desertificando el futuro con la fórmula paralizante de que “no hay alternativa”. Es como si las formas más violentas e injustas de dominación capitalista, colonialista y patriarcal fueran la emanación del orden natural de las cosas. Las ideas orientadoras siguen existiendo, pero su recuperación exige que las concibamos como ruinas-semilla. Elijo cuatro ideas. Las concibo como ideas-metáfora, instalaciones pedagógicas. Al igual que las instalaciones artísticas, estas instalaciones pedagógicas pretenden ser performativas, recurren al pasado como si este nunca hubiera sucedido y al futuro como si estuviera aquí. Son imágenes movilizadoras que siembran esperanza entre las clases populares en los momentos en que estas se sienten más abrumadas por el miedo. Sirven de puente entre el pasado y el futuro para que este no les sea robado por los mercaderes de pasados inventados y falsos futuros.

¹ José Martí, *Nuestra América* (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2005 [1891]).

La instalación del interregno

La primera idea no es originaria de América Latina, pero el continente la ilustra de manera muy particular. Se trata de la idea de interregno de Antonio Gramsci, que este gran comunista italiano acuñó alrededor de 1930, y se refiere a la idea de que las sociedades pasan por períodos en los que lo viejo todavía no acaba de morir y lo nuevo aún no ha nacido plenamente (Gramsci, 1971: 275).² Son períodos de especialmente difícil adecuación o confrontación entre lo nuevo y lo viejo, propicios para la formación de monstruos o formaciones mórbidas que desfiguran lo que existe, al mismo tiempo que crean nuevos imaginarios, unas veces prometedores y otras destructivos. Adaptando el concepto libremente a nuestro tiempo, lo viejo está compuesto por las formas más excluyentes, violentas y retrógradas de la triple dominación que caracteriza el mundo eurocéntrico desde el siglo XVI: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.³ A su vez, lo nuevo se genera en las luchas sociales y políticas contra esta dominación. El interregno ocurre cuando la confrontación o adaptación entre lo viejo y lo nuevo dominan la vida social y política del país.

² Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, ed. y trad. Quintin Hoare y Geoffrey Nowell-Smith. (London: Lawrence & Wishart, 1971). El término interregno procede de la antigua Roma, donde se utilizaba para hacer referencia al momento de la intermediación jurídica y política que seguía a la muerte del soberano y precedía a la entronización de su sucesor. La declaración del interregno acontecía mediante la proclamación del *justitium*, ya que tanto la soberanía como la legalidad quedaban suspendidas. Gramsci utilizó este concepto de forma brillante, aplicándolo a la crisis generalizada de autoridad que la Europa anterior a la II Guerra Mundial vivía, donde el orden dominante había perdido la capacidad de liderar democráticamente, por el consenso de la mayoría, y había abierto un horizonte de posibilidades.

Philippe Theophanidis, "Interregnum as a Legal and Political Concept: A Brief Contextual Survey" (*Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies*, 0(9), 109-124, 2016. Doi: <http://dx.doi.org/10.12681/syn.16228>).

³ Boaventura de Sousa Santos, *Justicia entre saberes. Epistemologías del Sur contra el epistemicidio* (Madrid: Morata 2017), *El fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías del Sur* (Madrid: Trotta, 2019).

Podemos decir que la idea de interregno forma parte de “Nuestra América” al menos desde principios del siglo XIX. Reside en los propios procesos de independencia, así como en la continuidad de la injerencia imperial de las antiguas potencias colonizadoras y, desde principios del siglo XX, de Estados Unidos. Con la gran (y tantas veces olvidada) excepción de Haití, los procesos de independencia, si bien muy diferentes entre sí, fueron, en general, protagonizados por los descendientes de los colonos mediante el aprovechamiento de las rivalidades interimperiales. Por esta razón se caracterizaron por una supervivencia significativa del viejo (des)orden capitalista, colonialista y patriarcal. Esta supervivencia se tradujo en continuidades institucionales o estructurales, particularmente la forma de Estado moderno, el régimen de propiedad, el racismo, el sexismo y el mantenimiento de una narrativa histórica que legitimó la herencia eurocéntrica. Las monstruosidades resultantes han variado a lo largo de los últimos doscientos años, pero su lastre siempre ha sido visible, aunque en unas épocas más que en otras.

Por otro lado, la intervención imperial, al tiempo que confirió una dimensión continental al interregno, siempre tuvo el efecto de prolongar la muerte de lo viejo para impedir más eficazmente el nacimiento pleno de lo nuevo. Cuanto más fuerte era la irrupción de lo nuevo, más violenta era la intervención imperial para evitar que naciera completamente. Al concluir *Los condenados de la Tierra*, Frantz Fanon afirma con su punzante lucidez:

Hace dos siglos, una antigua colonia europea decidió imitar a Europa. Lo logró hasta tal punto que los Estados Unidos de América se han convertido en un monstruo donde las taras, las enfermedades y la inhumanidad de Europa han alcanzado terribles dimensiones (Fanon, 1983: 159).⁴

Desde mediados del siglo XX, la naturaleza cambiante de la intervención del imperialismo estadounidense se puede resumir en

⁴ Frantz Fanon, *Los condenados de la Tierra* (México, D. F.: FCE, 1983).

cuatro guerras sucesivas (y en ocasiones simultáneas): la guerra contra el comunismo, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas y, por último, la guerra contra la corrupción. A través de estos dos factores (los procesos de independencia y la injerencia permanente del imperialismo), más que de un periodo de interregno, debemos hablar de una larga duración histórica del interregno y, en consecuencia, de monstruosidades que con el tiempo se normalizaron. La permanencia del interregno confiere a América Latina una característica muy específica: si es cierto que lo nuevo nunca tiene la posibilidad de emerger plenamente, no es menos cierto que lo viejo tampoco consigue eliminar la memoria, la voluntad y las semillas de lo nuevo. En esto reside el optimismo trágico del continente. Se trata de un imaginario colectivo que tiene dimensiones sociales, políticas, culturales y estéticas y que hunde sus raíces en la larga resistencia de los pueblos indígenas y los pueblos descendientes de los esclavos. Este imaginario tiene muchas afinidades con lo que Bolívar Echeverría llamó *ethos* barroco (2000)⁵.

Sin embargo, esta larga duración tuvo varios periodos que se distinguieron precisamente por el tipo de interregno y de monstruos que los caracterizó. Podemos distinguir dos tipos de interregno: el interregno en el que domina la confrontación (interregno-confrontación) y el interregno en el que domina la adecuación (interregno-adaptación), dependiendo de las formas en las que se articulan y contradicen los objetivos de lo viejo (no morir totalmente) y lo nuevo (nacer plenamente). Para limitarnos a los últimos sesenta años y sin el propósito de ser exhaustivos, podemos distinguir seis grandes interregnos-confrontación, a pesar de ser muy diferentes entre ellos: Cuba, 1959 (Revolución cubana), Chile, 1970 (gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende), Nicaragua, 1979 (Revolución sandinista), Venezuela, 1998 (Hugo Chávez y la Revolución bolivariana), Bolivia, 2006 (Evo Morales y el proceso de cambio), Ecuador, 2007 (Rafael Correa y la Revolución ciudadana). En todos ellos, lo viejo, para no

⁵ Bolívar Echeverría, *La modernidad de lo Barroco* (México, D. F.: Era, 2000).

morir, contó con el apoyo decisivo de la intervención imperialista de Estados Unidos y la eficacia de este apoyo ha variado a lo largo del tiempo. Los monstruos que de aquí surgieron fueron variados e incluyeron asesinatos e intentos de asesinato, embargos económicos, aislamiento diplomático y financiero, actos de contrainsurgencia, demonización mediática, golpes de Estado, etc. Entre los interregnos-adaptación, una lista no exhaustiva incluye: Chile, 1990 (gobierno de Concertación), Colombia, 1991 (proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1991), Uruguay, 1994 (Gobierno del Frente Amplio), Argentina, 2003 (gobierno de Néstor Kirchner), Brasil, 2003 (gobierno de Lula da Silva), Honduras, 2006 (gobierno de Manuel Zelaya), Paraguay, 2008 (gobierno de Fernando Lugo), México, 2018 (gobierno de Andrés Manuel López Obrador). Las monstruosidades que mejor caracterizan estos interregnos son las convulsiones por las que ha pasado la democracia liberal. Lo nuevo, simbolizado por las enormes expectativas que la democracia liberal en los gobiernos progresistas crea a las clases populares, choca con lo viejo, que se reafirma en forma de desfiguraciones de la propia democracia con el fin de subvertir y neutralizar su potencial emancipatorio. Tales desfiguraciones han sido producidas por tres agentes institucionales y tres agentes extrainstitucionales. Los agentes institucionales han sido los medios de comunicación (control oligopólico), el sistema judicial (judicialización de la política a través de la *lawfare*, o guerra jurídica) y el poder legislativo (financiación de partidos por grandes empresas y grupos financieros, *fake news* con manipulación de *big data*, fraude electoral). Los agentes extrainstitucionales han sido el narcotráfico (que es responsable, en parte, de la corrupción y de la selectividad de la lucha contra ella), el paramilitarismo (que garantiza el control territorial), y el asesinato selectivo de líderes sociales (que intimida a los oprimidos y elimina a los artífices de lo nuevo). En la actualidad, los mencionados agentes extrainstitucionales constituyen en muchos países un Estado profundo, paralelo al Estado oficial pero interpenetrado con él. En conjunto, los agentes institucionales y extrainstitucionales han actuado para eliminar

liderazgos democráticos, fabricar victorias electorales de lo viejo, perpetrar golpes de Estado blandos, es decir, golpes de Estado con una fachada democrática. Especialmente en el contexto de América Latina, el imperialismo estadounidense ha desempeñado un papel casi siempre decisivo en la movilización de los agentes de desfiguración democrática.

¿Cuáles han sido las trayectorias de estos interregnos en los últimos diez años? Los interregnos-confrontación han sufrido un asedio imperial brutal. Persisten, con dificultades crecientes, Cuba y Venezuela, así como también Nicaragua. En el caso de Nicaragua, hay que señalar una monstruosidad perturbadora: la manera en la que dentro de lo nuevo se fue (re)creando lo viejo con elementos novedosos. A su vez, en los interregnos-acomodación se han agravado las desfiguraciones de las democracias, y en muchos de ellos lo viejo ha acabado prevaleciendo con mayor o menor intervención imperial. En México, donde el gobierno progresista acaba de comenzar, ya es visible la preparación de un golpe blando. Brasil es un caso extremo de intervención imperial en el contexto de la democracia liberal. Lo nuevo, que con todas las ambigüedades propias del interregno-adaptación se venía construyendo desde 2003, fue desestabilizado a partir de 2014 por una combinación tóxica de élites patrimonialistas internas y del imperialismo estadounidense. El golpe contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, la persecución jurídico-política contra Lula da Silva y la elección del neofascista Jair Bolsonaro son los momentos más decisivos del fin provisional de este interregno.

Sin embargo, como es característico de los interregnos latinoamericanos, lo viejo nunca logra consolidarse plenamente, ya que lo nuevo se obstina en emerger y renacer de las cenizas. En este sentido, hay tres casos paradigmáticos: Argentina, Colombia y Chile. A mediados de la pasada década, Argentina eligió a un empresario y, con él, se comprometió con el recetario neoliberal y la sumisión al imperialismo bajo el dominio del capitalismo financiero más burdamente especulador (fondos buitres). Significaba el fin del interregno inaugurado por el kirchnerismo. Fue un fin provisional, dada la

permanente resistencia popular, en la que destacaron los movimientos de mujeres. Las luchas sociales hicieron que a finales de 2019 Argentina regresara a un kirchnerismo renovado y, como es de esperar, expurgado de algunos de los errores del pasado.

Colombia tuvo una trayectoria particularmente convulsa en la pasada década. El acuerdo de paz de La Habana celebrado en 2016 entre el Gobierno y el grupo guerrillero de las FARC tuvo un significado muy especial: señalaba la posibilidad de que el interregno-adaptación se convirtiese en un interregno-confrontación. A pesar de todos los contratiempos durante el proceso de aprobación, el texto del acuerdo configuraba una nueva constitución política en la que lo nuevo se afirmaba frente a lo viejo a través de una promesa de paz con justicia social: la paz democrática. Después de más de cincuenta años de violencia política, el cumplimiento del acuerdo significaría, sin duda, una ruptura con las formas más violentas de capitalismo, colonialismo y patriarcado, que siempre dominaron el país y estuvieron en el origen de la propia guerrilla. Desafortunadamente, las vicisitudes posteriores han demostrado que las expectativas de paz democrática se están frustrando. En su lugar, ha surgido la paz neoliberal, que, lejos de ser una verdadera paz, es la continuación de la violencia política, ahora de forma aparentemente despolitizada. El control territorial de la guerrilla se sustituye por el control territorial de las empresas multinacionales y el narcotráfico. Esta sustitución implica la proliferación del asesinato selectivo de líderes sociales comprometidos con la defensa de territorios ancestrales y de campesinos.

Sin embargo, cuando el viejo (des)orden parecía consolidarse, la resistencia surgió con una magnitud desconocida desde las décadas de 1970-1980. Las luchas de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y formas de vida, y de las poblaciones afrodescendientes de Buenaventura contra los megaproyectos portuarios, abrieron el camino en el último trimestre de 2019 a la movilización de cientos de miles de colombianos y colombianas en todas las ciudades del país. Fue el paro cívico que, en el momento en que escribo sigue en curso

y en el que el protagonismo de los jóvenes y las mujeres ha sido evidente. En él han participado ciudadanos y ciudadanas de los sectores urbanos populares que no tienen filiación partidaria, no son activistas de movimientos sociales y nunca habían imaginado protestar o desafiar en las calles la represión y el toque de queda. El malestar generalizado frente a las políticas antipopulares y “austeritarias” del Gobierno, la falta de voluntad política para cumplir el acuerdo de paz y la pasividad ante al asesinato sistemático de los líderes sociales fue canalizado por fuerzas políticas con capacidad para convocar y sostener la lucha organizada en el Comité Nacional del Paro.

Durante los últimos cuarenta años, Chile se ha presentado nacional e internacional como prueba del éxito y de la sostenibilidad del neoliberalismo, una sostenibilidad aún mayor si se tiene en cuenta que ha sido capaz de reproducirse tanto en la dictadura como en la democracia. No obstante, a lo largo de la última década se fue evidenciando el descontento social causado por un (des)orden social muy desigual, hechos de bajos salarios y pensiones indignas, educación y salud privatizadas y caras, arbitrariedad patronal y de las grandes empresas, impunidad frente a la contaminación ambiental, transporte público caro y deficiente, violencia contra los pueblos indígenas mapuches, contra las mujeres, etc. A lo largo de la década, la resistencia activa fue liderada por los mapuches y los estudiantes, hasta que en octubre de 2019 las protestas se extendieron por todo el país involucrando a los sectores más diversos de la población. La chispa que incendió Chile fue el encarecimiento del transporte público en Santiago, pero el malestar social y el sentimiento de injusticia social estaban latentes en toda la sociedad y solo esperaban que el vaso se desbordase. La respuesta del Gobierno fue represiva (Estado de emergencia, toque de queda, brutalidad policial) y reveló continuidades perturbadoras respecto a la represión estatal de la época de la dictadura, como la tortura (incluyendo la violación) y la mutilación (alcanzando salvajemente los ojos de los jóvenes manifestantes).

Las protestas tomaron formas innovadoras de organización horizontal y revelaron el descrédito general de las instituciones políticas,

especialmente de los partidos. El protagonismo de los movimientos de mujeres debe subrayarse no solo por su fuerza, sino también por la forma innovadora en que se ha posicionado en las movilizaciones. Destaco la Asamblea Feminista Plurinacional, que al demandar el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad establece una articulación con el movimiento indígena, duramente golpeado en los últimos tiempos por la avalancha neoliberal del neoextractivismo. La bandera “la revolución será feminista o no será” sostiene la propuesta innovadora de una Asamblea Constituyente paritaria, plurinacional y popular.⁶ Todo esto indica que el interregno-adaptación que ha caracterizado a Chile en las últimas décadas parece transmutarse en un interregno-confrontación.

Con la instalación de la idea de interregno he procurado mostrar que lo viejo y lo nuevo continúan tejiendo sus articulaciones contradictorias y mutantes en el continente. Las victorias y las derrotas de las clases populares se suceden sin mucha sedimentación. Nuevas formas de represión de la resistencia popular están bloqueando el camino de la liberación, pero paralelamente están surgiendo nuevas formas de resistencia, creatividad opositora y de imaginarios de liberación. Esta oscilación alimenta el optimismo trágico que caracteriza la esperanza posible en el continente.

Instalación: como si el futuro estuviera aquí

Colonialismo, tierra y territorio

La primera idea la formularon muchos autores. Elijo la formulación de Frantz Fanon: “Para el pueblo colonizado, el valor más esencial, por ser el más concreto, es primordialmente la tierra: la tierra que

⁶ Véase, por ejemplo, “Chile Vamos da portazo a mujeres e indígenas, y feministas anuncian huelga general”. Disponible en <https://radio.uchile.cl/2019/12/18/chile-va-mos-da-portazo-a-mujeres-e-indigenas-y-feministas-anuncian-huelga-general/> [consultado en enero de 2020].

debe asegurar el pan y, por supuesto, la dignidad” (1983: 21). La forma en la que los gobiernos progresistas fueron derrocados en el continente durante la última década reveló la centralidad de dos temas que el pensamiento crítico de matriz eurocéntrica ha descuidado: la vigencia del colonialismo y la cuestión de la tierra y el territorio. El pensamiento crítico dominante aceptó durante mucho tiempo que el colonialismo había terminado con los procesos de independencia y que desde entonces la lucha social era exclusiva o, ante todo, una lucha anticapitalista. En la última década se ha hecho más evidente que nunca que esta idea está equivocada. El colonialismo no terminó con las independencias, sino que cambió de forma. Lo que terminó con los procesos de independencia fue una forma específica de colonialismo, el colonialismo histórico caracterizado por la ocupación territorial por parte de una potencia extranjera.⁷ Desde entonces, el colonialismo ha cambiado de forma, pero ha continuado hasta nuestros días y a veces ha sido tan violento como el colonialismo histórico. En los años sesenta del siglo pasado autores como Pablo González Casanova (colonialismo interno,⁸ 1965), Rodolfo Stavenhagen (aculturación y colonialismo, 1965)⁹ y Kwame Nkrumah (neocolonialismo)¹⁰ señalaron esta persistencia, pero el pensamiento crítico no absorbió plenamente estas ideas pioneras. De manera un tanto paradójica, los gobiernos progresistas de la última década mostraron la urgente necesidad de revisar la concepción de la dominación a partir de los conocimientos nacidos en las luchas sociales. A pesar de todas las conquistas en la mejora de las condiciones de vida de las

⁷ Y ni siquiera esta forma de colonialismo terminó, como muestran los casos de Palestina y el Sáhara Occidental.

⁸ Pablo Gonzalez Casanova, “Internal Colonialism and National Development” (*Studies in Comparative International Development*, 1(4): 27-37, 1965), *Colonialismo interno (uma redefinição). A teoria marxista hoje* (Buenos Aires: CLACSO, 2007).

⁹ Rodolfo Stavenhagen, “Clases, colonialismo y aculturación: ensayo sobre un sistema de relaciones interétnicas en Mesoamérica” (*Estudios en Desarrollo Internacional Comparativo*, 1(6): 53-77, 1965).

¹⁰ Kwame Nkrumah *Neo-Colonialism, The Last Stage of Imperialism* (London: Thomas Nelson & Sons, 1965).

clases populares a través de la redistribución social, estos gobiernos revelaron una inquietante continuidad con el colonialismo histórico al centrar sus políticas económicas en lo que se designó como neoextractivismo, la explotación sin precedentes de los recursos naturales. Ello originó fenómenos como: la relativa desindustrialización del país;¹¹ la violación de los instrumentos internacionales que obligan a la consulta previa a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes sobre los megaproyectos que afectan a sus territorios; la permanencia del racismo estructural e institucional; la persistencia del asesinato de líderes sociales indígenas, *quilombolas* y campesinos comprometidos en la lucha en defensa de sus tierras y territorios; la tolerancia de la concentración de la tierra y la poca voluntad política para llevar a cabo la reforma agraria y la demarcación de tierras ancestrales; la escasa sensibilidad ante la degradación ambiental y la catástrofe ecológica. De ello resultó que lo “nuevo” prometido por los gobiernos progresistas contenía algunas características de lo “viejo”. Tales características revelan la perturbadora articulación estructural entre el capitalismo y el colonialismo. Por otro lado, la creciente agresividad del imperialismo estadounidense también ha mostrado una continuidad insidiosa con la matriz del colonialismo y las rivalidades entre imperios: la lucha salvaje por el acceso a los recursos naturales, de la que Venezuela, Brasil y Bolivia son los ejemplos más recientes y dramáticos.

Patriarcado, cuerpo, experiencia y lucha

La segunda idea para la instalación “Como si el futuro estuviera aquí” ha tenido muchas formulaciones y la más incisiva es la propuesta por los movimientos feministas latinoamericanos mencionados

¹¹ En el caso de la India, el colonialismo histórico del Reino Unido destruyó la industria textil para proteger la industria textil de Manchester.

anteriormente: “La revolución será feminista o no será”¹². La última década ha demostrado que el capitalismo está vinculado no solo al colonialismo, sino también al patriarcado. De hecho, a pesar de todas las conquistas de los movimientos de mujeres contra la discriminación sexual y la violencia sexual doméstica, pública, institucional y estructural, lo cierto es que esa violencia, particularmente bajo la forma más brutal de feminicidio, se mantuvo y en algunos casos incluso empeoró. La formulación más reciente y elocuente de este hecho perturbador es el de la Comandanta Amada del movimiento zapatista al inaugurar el Segundo Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan el pasado 27 de diciembre en Chiapas:

En todo el mundo siguen asesinando mujeres, las siguen desapareciendo, las siguen violentando, las siguen despreciando. En este año no se ha parado el número de violentadas, desaparecidas y asesinadas. Lo que sabemos es que ha aumentado. Y nosotras como zapatistas lo miramos que es muy grave. Por eso convocamos a este segundo encuentro con un solo tema: la violencia contra las mujeres. [...] Dicen que hay equidad de género porque en los malos gobiernos hay igual de hombres y mujeres mandones y mandonas. Pero nos siguen asesinando. Dicen que hay más derechos en la paga para las mujeres. Pero nos siguen asesinando. Dicen que hay mucho avance en las luchas feministas. Pero nos siguen asesinando. Dicen que ahora las mujeres tienen más voz. Pero nos siguen asesinando. Dicen que ahora ya se toma en cuenta a las mujeres. Pero nos siguen asesinando. Dicen que ahora hay más leyes que protegen a las mujeres. Pero nos siguen asesinando. Dicen que ahora es muy bien visto hablar bien de las mujeres y sus luchas. Pero nos siguen asesinando. Dicen que hay hombres que entienden la lucha de como mujeres que somos y hasta se dicen que son feministas. Pero nos siguen asesinando. Dicen que la mujer ya está en más espacios. Pero nos siguen asesinando. Dicen que ya hasta hay súper *héroas* en las películas. Pero nos siguen asesi-

¹² Véase, por ejemplo, Ramos Patricia, “La revolución socialista será feminista... o no será”, *Rebelión* (13/10/2008). Disponible en <http://www.rebelion.org/docs/74223.pdf> y en <http://samarrilleres.org/es/revolucion-feminista/> [consultado en enero de 2020].

nando. Dicen que ya hay más conciencia del respeto a la mujer. Pero nos siguen asesinando. Cada vez más asesinadas. Cada vez con más brutalidad. Cada vez con más saña, coraje, envidia y odio. Y cada vez con más impunidad.¹³

El capitalismo ha demostrado que para reproducirse no solo requiere cuerpos racializados, sino también cuerpos sexualizados.

Pero, por otro lado, la última década también ha mostrado que el papel de las mujeres en la lucha anticapitalista y anticolonial ha ido asumiendo un protagonismo creciente. En todo el continente, y particularmente en Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil y Chile, las mujeres han conseguido que sus reivindicaciones se incluyan en la agenda política. Pero sobre todo ha hecho valiosas contribuciones a las luchas sociales: nuevas narrativas de liberación, nuevas formas de organización y nuevas articulaciones entre luchas en el continente y más allá.¹⁴ Por encima de todo, han ido dando cada vez más credibilidad a la ética del cuidado, a la economía de la reciprocidad y a la relación respetuosa con la naturaleza. Por esta razón, han antepuesto las luchas extrainstitucionales que pueden conducir a una nueva institucionalidad. Las mediaciones partidarias, incluso las de la izquierda, han sido sometidas a un escrutinio crítico e intenso. Las palabras de Marichuy, precandidata indígena a las elecciones presidenciales de México 2018, portavoz del Congreso Nacional Indígena (CNI), son elocuentes: “Queremos que los mismos pueblos digan y

¹³ “México: Palabras de las mujeres zapatistas en la inauguración del Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que luchan”. Disponible en <https://kaosenlared.net/mexico-palabras-de-las-mujeres-zapatistas-en-la-inauguracion-del-segundo-encuentro-internacional-de-mujeres-que-luchan/> [consultado en enero de 2020].

¹⁴ Para ejemplo, en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan participaron más de 4.000 mujeres, procedentes de 49 países, entre ellos México, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Grecia, Dinamarca, India, Reino Unido, Sri Lanka, Turquía y Kurdistán. Véase “Palabras zapatistas en el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan”. Disponible en <https://www.nodal.am/2020/01/palabras-zapatistas-en-el-segundo-encuentro-internacional-de-mujeres-que-luchan/> [consultado en enero de 2020].

decidan qué hacer ellos al interior de sus propias comunidades”.¹⁵ Al concebir el cuerpo como territorio, muchos feminismos latinoamericanos alentaron alianzas entre los movimientos feministas y los movimientos indígenas. Así es como debe leerse la referida propuesta de las mujeres chilenas de convocar una Asamblea Constituyente plurinacional.

De hecho, la principal obligación de las luchas protagonistas es dar visibilidad a las luchas menos visibles, pero igualmente importantes. En este ámbito, los movimientos feministas no siempre han hecho honor a su responsabilidad. El incidente más reciente y turbador fue la evaluación equivocada por parte de cierto feminismo latinoamericano blanco y mestizo del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Ante esto, no puedo resistirme a citar de nuevo las sabias palabras de la Comandanta Amada:

De repente tal vez te ayude en tu lucha el escuchar y conocer otras luchas de como mujeres que somos. Aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con otras luchas y sus modos y geografías, pues a todas nos sirve escuchar y aprender. Por eso no se trata de competir para ver cuál es la mejor lucha, sino de compartir y de compartirnos. Por eso te pedimos que siempre tengas respeto a los diferentes pensamientos y modos. Todas las que estamos aquí, y muchas más que no están presentes, somos mujeres que luchan. Tenemos diferentes modos, es cierto. Pero ya ves que nuestro pensamiento como zapatistas que somos es que no sirve que todas somos iguales de pensamiento y modo. Pensamos que la diferencia no es debilidad. Pensamos que la diferencia es fuerza poderosa si hay respeto y hay acuerdo de luchar juntas pero no revueltas.

¹⁵ “Marichuy, primera candidata indígena a la presidencia de México en 2018”. Disponible en <https://www.republica.com.uy/marichuy-primera-candidata-indigena-la-presidencia-mexico-2018/> [consultado en enero de 2020].

La instalación de la red de la dominación

A la luz de las luchas sociales de la última década en el continente es urgente revisar la concepción de la dominación que orientó tanto los interregnos-adaptación como los interregnos-confrontación. La dominación se basa en tres pilares principales: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Hay otros mecanismos de dominación, como la religión fundamentalista, las castas o el capacitismo, pero estos tienden a actuar como dominaciones-satélite al servicio de los pilares principales. Estos pilares están profundamente articulados y no operan unos sin los otros. A principios del siglo XXI, la explicación marxista de tal articulación reside en el hecho, hoy más visible que nunca, de que la explotación del trabajo libre, que el capitalismo presupone, no se sostiene económica y políticamente sin la presencia simultánea de un trabajo altamente devaluado (sobreexplotado), es decir, el trabajo esclavo y el trabajo no remunerado. Estas últimas formas de trabajo son “facilitadas” por cuerpos racializados y sexualizados. Por tanto, la persistencia del colonialismo y el patriarcado es condición necesaria para la reproducción del capitalismo. Esta articulación entre el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado ha escapado durante mucho tiempo al pensamiento crítico de origen eurocéntrico. El drama de nuestro tiempo reside en que, mientras que las tres formas de dominación actúan articuladamente, las luchas sociales contra ellas han estado fragmentadas. ¿Cuántos movimientos anticapitalistas han sido colonialistas, racistas y sexistas? ¿Cuántos movimientos antirracistas han sido procapitalistas y sexistas? ¿Cuántos movimientos feministas han sido racistas, colonialistas y procapitalistas? Mientras esta asimetría se mantenga no será posible salir del infierno capitalista, colonialista y patriarcal en que vivimos. Las luchas anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales son todas igualmente importantes, aunque, dependiendo de los contextos, algunas pueden ser más urgentes que otras.

La educación liberadora

Una de las grandes lecciones de la última década es que la lucha por la hegemonía es más compleja hoy que nunca. Los gobiernos progresistas, que han contribuido de manera decisiva al crecimiento de las clases medias en sus países, se han topado con el distanciamiento político de estas desde el momento en que surgieron las primeras dificultades para proseguir con las políticas redistributivas y las políticas sociales en general. Las clases populares, que como resultado de esas mismas políticas acababan de cruzar la línea de la pobreza o incluso de la miseria extrema, se han convertido en un terreno fácil para la difusión de ideologías conservadoras e incluso reaccionarias, como en el caso del fundamentalismo religioso. La ideología neoliberal de la autonomía individual, bajo la forma de la libre iniciativa emprendedora (autonomía sin reivindicación de las condiciones sociales para ser realmente autónomo), y de la satisfacción personal medida por el nivel de consumo de bienes y servicios, ha penetrado profundamente en la sociedad, a menudo promovida por los gobiernos que podrían resultar más perjudicados por ella. La era de la comunicación digital y del consumo masivo ha creado un nuevo sentido común que no solo es hostil a las ideas fundamentales para construir una sociedad anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal (solidaridad, reciprocidad, cooperación, autodeterminación y bienes comunes), sino que además trivializa y somete a criterios de beneficio personal las propias ideas de la sociedad democrática liberal, como ciudadanía, participación y bien público.¹⁶ En la era de los *big data* y los algoritmos, la manipulación de las opciones políticas y del consumo combina fácilmente la masificación con la personalización. De esta manera se construye un mundo imaginario de diferencias que, en lugar de conducir a una cultura de la diversidad y la pluralidad, crea guetos identitarios, colectivos de diferencia que cultivan la indiferencia hacia los colectivos concebidos como diferentes. En un

¹⁶ Boaventura de Sousa Santos, *El fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías del Sur* (Madrid: Trotta, 2019).

mundo que predica la prosperidad individual a cualquier precio, el otro siempre es un potencial competidor desleal, el enemigo a batir. En esto consiste la política del resentimiento. Cuanto más invisible se vuelve la dominación, más fácilmente las víctimas de la exclusión social y la injusticia ven en otras víctimas la causa de sus propios males. El racismo y el sexismo son poderosos potenciadores de la política del resentimiento. El discurso y la política del odio encuentran aquí su caldo de cultivo y su fértil campo de propagación. En lugar de oponentes con los que se discute, se construyen enemigos a eliminar.

Los gobiernos progresistas de la última década promovieron la educación pública, pero no cuidaron lo suficiente su contenido. Asumieron que la difusión de la educación promovía una educación desmercantilizada, descolonizada y depatriarcalizada.¹⁷ Un error fatal. También descuidaron la democratización y la diversificación de los medios de comunicación. Promovieron los medios de comunicación oligopolistas con la esperanza de neutralizarlos, una esperanza que resultó trágicamente irreal. La única excepción fue el kirchnerismo argentino y los resultados están a la vista. En resumen, se olvidaron de la instalación pedagógica que Paulo Freire les había ofrecido con la *Pedagogía del oprimido*¹⁸ y la *Pedagogía de la esperanza*¹⁹. Y nadie podría haberla formulado con más elocuencia que él: “Cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor”.

Traducción de Antoni Aguiló

¹⁷ Boaventura de Sousa Santos, *Decolonising the University* (Cambridge: Cambridge Scholars, 2017); Boaventura de Sousa Santos, *Construyendo las epistemologías del Sur. Antología. Vol. II* (Buenos Aires: CLACSO, 2018).

¹⁸ Paulo Freire, *Pedagogía del oprimido* (México: Siglo XXI, 2005 [1968]).

¹⁹ Paulo Freire, *Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la Pedagogía del oprimido* (México: Siglo XXI, 2011).

El autor

Boaventura de Sousa Santos es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale. Es profesor emérito de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, de Portugal, Distinguished Legal Scholar de la Universidad de Wisconsin, de Estados Unidos, y Global Legal Scholar de la Universidad de Warwick, del Reino Unido. En la actualidad, es director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, donde dirige también el Observatorio Permanente de Justicia.

Algunos libros de su autoría son: *A gramática do tempo. Para uma nova cultura política* (Porto: Afrontamento, 2006); *Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho* (Madrid: Trotta, 2009); (con Paula Meneses) *Epistemologias do Sul* (Coimbra: Almeida, 2009); *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur* (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2010); *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad* (Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Ediciones Uniandes, 2012, segunda edición ampliada); *Democracia al borde del caos. Ensayo contra la autoflagelación* (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2014); *Justicia entre saberes: epistemologías del Sur contra el epistemicidio* (Madrid: Ediciones Morata, 2017); (con José Manuel Mendes) *Demodiversidad. Imaginar nuevas posibilidades democráticas* (Ciudad de México: Akal, 2017); *Democracia y transformación social* (Bogotá: Siglo del Hombre

Editores, 2017); *Construyendo las epistemologías del Sur: para un pensamiento alternativo de alternativas* (Buenos Aires: CLACSO, 2018, en dos volúmenes); (con Antoni Aguiló) *Aprendizajes globales. Descolonizar, desmercantilizar y despatriarcalizar desde las epistemologías del Sur* (Barcelona: Icaria, 2019); *El final del imperio cognitivo* (Madrid: Trotta, 2019), *La cruel pedagogía del virus* (Buenos Aires, CLACSO, 2020).

IZQUIERDAS DEL MUNDO, ¡ÚNANSE!

Y OTROS ENSAYOS

"Izquierda significa el conjunto de teorías y prácticas transformadoras que, a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, han resistido a la expansión del capitalismo y al tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales que genera, y que surgieron con la convicción de que puede existir un futuro poscapitalista, una sociedad alternativa, más justa por estar orientada a la satisfacción de las necesidades reales de los pueblos, y más libre, por estar centrada en la realización de las condiciones del efectivo ejercicio de la libertad".

Boaventura de Sousa Santos



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais